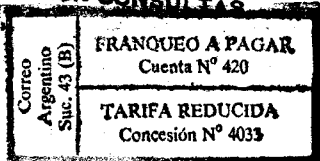


REPUBLICA ARGENTINA



DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

19ª REUNION — CONTINUACION DE LA 6ª SESION
ORDINARIA — AGOSTO 12 Y 13 DE 1992

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Luis Alberto Martínez, Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo
y Jorge Alberto Rodríguez

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Bruno
y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ACENOLAZA, Florencio Gilberto
ACEVEDO, Julio César
ACHEM, Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo
AGUADO, Jorge Rubén
AGÚNDEZ, Jorge Alfredo
ALABI, Ernesto Salim
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Héctor Claudio
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl Angel
AMADEO, Eduardo Pablo
ARANDA, Saturnino Danttil
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDÁRIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AVELÍN, Alfredo
AYALA, Juan Carlos
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BARBERA, Eliseo
BARBOTTI, Atilio Ector
BASSANI, Ángel Marcelo
BAUM, Daniel
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BECERBA, Nicolás Eduardo
BENEDETTI, Jorge Enrique
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERICUA, Jorge
BERMÚDEZ, María del Pilar
BISCIOTTI, Victorio Osvald
BLANCO, Oscar Alberto
BORDA, Osvaldo
BORDÍN CAROSIO, Hugo Antonio
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREARD, Noel Eugenio

BROOK, Mario Carlos
BRUNATI, Luis Pedro
BRUZZO, Omar Abdulio
CABRERA, Gerardo
CAFIERO, Juan Pablo
CAIMMI, Fernando Enrique
CALLEJA, Ovidio Amílcar
CAMANO, Dante Alberto
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMANO, Graciela
CANATA, José Domingo
CAPUTO, Dante Mario
CARRERAS, Porfirio Mario
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CAVALLARI, Juan José
CEBALLOS, Walter Alberto
CLERICI, Federico
CORCHUELO BLASCO, José M.
COSSOS PEREZ, Juan Nicolás
CRAMARO, Hugo Arnaldo
CROSTELLI, Juan Carlos
CRUZ, Washington Jesús
D'ALESSANDRO, Miguel H.
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorg, Carlos
DE LA RÚA, Fernando
DI TULLO, Héctor Horacio
DURRIEU, Marcela Margarita
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELÍAS, Ángel Mario
ENDEIZA, Eduardo Aníbal
ESPECHE, Alberto Luis
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNÁNDEZ, Aníbal
FERNÁNDEZ, Roberto Enrique
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo C.
FERREYRA, Eduardo Mario
FESCINA, Andrés Julián
FLORES, Rafael Horacio
FOLLONI, Jorge Oscar
FONTELA, Moisés Eduardo
FRIGERIO, Octavio Oscar
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GAN, Fernando Pascual

GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Pedro Alberto
GARCÍA CUERVA, Ignacio S.
GARCÍA de NOVELLI, María C.
GATTI, Héctor Angel
GAUNA, Juan Octavio
GERMANO, Alberto Raúl
GIOJA, José Luis
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ, José Ernesto
GÓMEZ, Roque Julio César
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GONZÁLEZ, Luis Mario
GONZÁLEZ, Oscar Félix
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GASS, Gabriela M.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GREEN, Gustavo Adolfo
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERNÁNDEZ, Santos Abel
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA, Luis Fernando
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARBIA, José María
IBARRECHE, Julio César
IGLESIAS, Evaristo Constantino
IRIBARNE, Alberto Juan Bautista
ITURRE, César Eusebio del Valle
JALIL, Luis Julián
KOTH, Carlos
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando J.
LOSADA, Luis Enrique
LOUTAIF, Julio César
LYNCH, Carlos Alberto
MACHADO, Oscar Alfredo
MACHICOTE, Jorge Raúl
MAGGI, Juan Alberto
MANFREDOTTI, Carlos
MANNY, José Juan
MAQUEDA, Juan Carlos

MARCÓ, Jorge Raúl
 MARCOLLI, Juan Miguel Angel
 MARCOS, Ricardo Ernesto
 MARTÍN de DE NARDO, Marta
 MARTÍNEZ, Luis Alberto
 MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael
 MATZKIN, Jorge Rubén
 MENDOZA, Claudio Ramiro
 MENDOZA, Martín
 MENEGHINI, Javier Reynaldo
 MICHELLI, Marco Aurelio
 MICHITTE, Salomón Antonio
 MOLARDO, Elvio Francisco
 MOLINAS, Ricardo Francisco
 MONTEVERDE, Carlos Roberto
 MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
 MOURE, Juan Manuel
 MUNOZ, Marcelo Bernardo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto Adolfo
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 ORTIZ PELLEGRINI, Miguel A.
 PARADA, Alberto
 PARENTE, Rodolfo Miguel
 PAROLA, José María
 PARRILLI, Oscar Isidro José
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Aníbal Pedro
 PESCE, Félix
 PICCININI, Ana Ida
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 PIOTTI, Alberto Daniel
 PROFILLI, Gerardo Pedro
 PRONE, Alberto Josué
 PUNICELLI, Arturo Antonio
 QUEZADA, Rodolfo Héctor
 RE, Ricardo Horacio
 RODRÍGUEZ, Jorge Alberto
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ, Raúl Eduardo

RODRÍGUEZ SANUDO, Hugo B.
 ROIG, Angel
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 ROY, Irma
 RUCKAUF, Carlos Federico
 RUIZ, Angel Rafael
 SAADI, Luis Alberto
 SAADI, Ramón Eduardo
 SABIO, Juan Carlos
 SACKS, Rubén Rodolfo
 SALUSSO, Horacio Ramón
 SALVADOR, Daniel Marcelo
 SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
 SANTÍN, Eduardo
 SCELZI, Carlos José
 SEGUI, Héctor Miguel
 SODERO NIEVAS, Víctor Hugo
 SOLÁ, Felipe Carlos
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA ARCHI, José María
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Conrado Hugo
 SUCARIA, Neyer
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 SUREDA, Ángela Gerónima
 TOMA, Miguel Angel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TROYANO, Silvia Elena
 URIONDO, Luis Enrique R.
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA, Néstor Angel
 VARELA CID, Eduardo
 VAZQUEZ, Ricardo Héctor
 VAZQUEZ, Roberto
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VERDU, Mario
 VICCHI, Raúl Noracio
 YOMA, Jorge Raúl
 ZAMORA, Federico
 ZAMORA, Luis Fernando
 ZARACHO, Evelio Argentino

AUSENTES, EN MISIÓN OFICIAL

FALLETI, Julio César José
 TACTA de ROMERO, Emma A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

DURANONA y VEDIA, Francisco de
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 ZAMBIANCHI, Carlos

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ABDALA, Germán Darío
 BISCHOF, Enrique Alberto
 CASARI de ALARCIA, María Leonor
 FERRADAS, Miguel Enrique
 FIGUEROA, Pedro Octavio
 MARELLI, Mabel G. de
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORQUÍN, Leopoldo Manuel
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RAIMUNDI, Carlos Alberto

AUSENTES, CON AVISO:

ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
 BAGLINI, Raúl Eduardo
 BELTRÁN, Carlos Roberto
 DE MARTINO, Víctor Amador
 ECHEVARRÍA, Luis María
 FERNÁNDEZ, Roberto Carlos
 GUERRERO, Antonio Isaac
 GUERRERO, Luis Serafin
 GUZMAN, María Cristina
 LÓPEZ, Jorge Antonio
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 NINO, Jorge
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 SAMID, Manuel Julio

—La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª reunión (Sesión preparatoria) de fecha 30 de abril de 1922.

SUMARIO

1. Mociones formuladas por el señor diputado Matzkin: de aplazamiento de la consideración del proyecto de ley de la señora diputada Troyano por el que se crea un Fondo Rotativo para Créditos Productivos destinados a las pequeñas y medianas empresas (755-D-92); de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para considerar el asunto referido a la situación institucional de la provincia de Corrientes y para tratar sobre tablas el asunto a que se refiere el número 3 de este sumario, y de que se convoque a la Honorable Cámara a sesión especial para tratar el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales sobre distribución de los recursos provenientes de la masa de impuestos coparticipables. Se aprueban. (Pág. 1921.)
2. Consideración del asunto relacionado con la situación institucional de la provincia de Corrientes. Se rechazan las siguientes mociones de tratamiento sobre tablas: del señor diputado Garay para el proyecto de declaración del que es coautor por el cual se exhorta al señor presidente de la República a que se abstenga de intervenir por decreto los Poderes Judicial

y Legislativo de la provincia de Corrientes (2.386-D-92); del señor diputado Breard para el proyecto de resolución del que es coautor sobre interpelación al señor ministro del Interior a efectos de que informe sobre la situación institucional de la provincia de Corrientes (2.394-D-92), y del señor diputado de la Rúa para el proyecto de declaración de los señores diputados Muñoz y Balestra por el que se repudia la decisión del Poder Ejecutivo de extender la intervención federal en la provincia de Corrientes a los Poderes Legislativo y Judicial (2.382-D-92). (Página 1923.)

3. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia —especializadas— en los siguientes proyectos de ley: del Poder Ejecutivo (81-P.E.-91), del señor diputado Agúndez (106-D-92), del señor diputado Manny (607-D-92), del señor diputado Meneghini (690-D-92), del señor diputado Seguí (721-D-92), del señor diputado Bericua y otros (987-D-92), del señor diputado Galván (1.125-D-92), de la señora diputada Sureda (1.130-D-92), del señor diputado Castillo (O.A.) y otros (1.232-D-92), del señor diputado Berhongaray (1.345-D-92), del señor diputado Hernández (A.M.) (1.500-D-92) y del señor diputado Hernández (A.M.) y

otros (1.539-D.-92), sobre implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, a fin de viabilizar el juicio oral penal. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 1933.)

4. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 2037.)

B. Inserciones. (Pág. 2048.)

—En Buenos Aires, a los doce días del mes de agosto de 1992, a la hora 18 y 42:

1

MOCIONES

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Corresponde considerar en particular el proyecto de ley sobre creación de un Fondo Rotativo de Créditos Productivos destinados a las pequeñas y medianas empresas (expediente 755-D.-92).

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: es con el objeto de explicar cómo desearíamos que funcionara esta sesión de acuerdo con un intercambio de opiniones que hemos realizado entre los distintos bloques políticos de esta Cámara. Como primer punto, vamos a formular una moción de orden en los términos del artículo 108, inciso 7º, del reglamento para que se aplase la consideración del asunto en tratamiento.

Posteriormente promoveríamos que el cuerpo vote un apartamiento del reglamento para lo que se ha dado en llamar el tema Corrientes. Hemos convenido con los bloques que la totalidad del tiempo que debería insumir en esta reunión ese tema no exceda los treinta minutos, y que ningún bloque político pueda utilizar más de diez minutos para todas sus exposiciones. Seguramente habrá uno o más proyectos sobre los cuales esta Cámara deberá decidir.

Continuaríamos solicitando un apartamiento del reglamento con el objeto de tratar el dictamen recaído en los proyectos de ley sobre implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación a fin de viabilizar el juicio oral penal.

También deseo comentar que entre los distintos bloques políticos se ha conversado acerca de la posibilidad de hacer una sesión especial para el próximo miércoles para tratar los aspectos

parlamentarios vinculados al acuerdo que celebraran el conjunto de las provincias argentinas y el Poder Ejecutivo nacional sobre el financiamiento parcial del sistema jubilatorio.

Nuestro bloque pensaba tratar la cuestión sobre tablas en la fecha, pero eso no sería posible porque no disponemos de los votos suficientes para imponer una decisión de esta mayoría. De todas maneras, si habría acuerdo para considerarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

Creo que si lo exponemos, lo votamos y lo decidimos de acuerdo entre todos los bloques, reglamentariamente no sería necesario hacer una presentación formal, tomándose como solicitud nuestra propia exposición. De lo contrario, no habría inconvenientes para hacerlo como es habitual, mediante una presentación firmada por varios señores diputados.

Sintetizando, en primer lugar hago moción de orden para que se aplase la consideración del proyecto de ley por el que se crea un Fondo Rotativo para Créditos Productivos destinados a las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, formulo otra moción de orden para que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de tratar el asunto relacionado con la intervención a la provincia de Corrientes. En tercer lugar, otra moción de apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el dictamen sobre viabilización del juicio oral penal. Finalmente, solicito una sesión especial para el miércoles de la semana próxima para analizar los aspectos parlamentarios vinculados al acuerdo que celebraran el conjunto de las provincias argentinas y el Poder Ejecutivo nacional sobre financiamiento parcial del sistema jubilatorio.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: estamos de acuerdo con el camino señalado por el presidente del bloque oficialista. Respecto del proyecto de la señora diputada Troyano, nuestro bloque sin embargo disiente con el diferimiento pero acepta la circunstancia de que la mayoría, haciendo valer su número, así lo va a disponer; es decir que otros temas se traten primero. Por nuestra parte, considerábamos que el tema referido a las provincias revestía urgencia como para analizarlo lo más pronto posible.

En cuanto a lo relacionado con la situación de la intervención a la provincia de Corrientes, estamos de acuerdo con que el cuerpo se aparte del reglamento y lo considere en los términos anunciados por el presidente del bloque oficia-

reras, Castillo (O. A.), Ceballos, Clérici, Cossos Pérez, de la Rúa, Di Tulio, Dussol, Elias, Espeche, Feigueras, Fernández (A.), Fernández Gill, Fescina, Folloni, Fontela, Gallo, Galván, Garay, García de Novelli, Gauna, Germanó, Gómez Centurión, González (A. I.), González (L. M.), Hardy, Hernández (A. M.), Herrera (L. F.), Ibarreche, Iglesias, Jalil, Koth, Leconte, López (A. H.), López de Zavalía, Loutaif, Lynch, Manny, Marcos, Martín de Nardo, Martínez Raymond, Mendoza (M.), Molard, Molinas, Moreau, Moure, Muñoz, Natale, Novau, Olivera, Ortiz Maldonado, Parante, Parola, Piccinini, Pinto, Protili, Prone, Quezada, Rodríguez (R. E.), Roig, Saadi (L. A.), Saadi (R. E.), Sabio, Salvador, Sánchez Caldeau, Santín, Segú, Soria Acha, Spinosa, Storani, Surela, Topa, Vázquez (R.), Verdú, Vicchi y Zamora (L. F.).

—Votan por la negativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Alcalá, Alsogaray, Alvarez, Alvarez Echagüe, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (M. A.), Barberá, Baum, Becerra (N. E.), Bermúdez, Borda, Bordin Carosio, Bracchi, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.), Corchuelo Blasco, Crámaro, Crostelli, Cruz, Duvrieu, Fellner, Fernández (R. E.), Gan, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.), González (O. F.), González Cabañas, Green, Herrera (B. E.), Herrera Arias, Humada, Iribarne, Lamberto, López Arias, Machicote, Maggi, Manfredotti, Maqueda, Marcolli, Martínez, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michelli, Michitte, Monteverde, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Roy, Ruekauf, Sacks, Salusso, Scelzi, Sodero Nievas Soria, Sucaria, Toma Troyano, Uriondo, Vatacarcel, Varela, Venesia, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

—Se abstienen de votar los señores diputados Alende, García Cuerva, Gatti y Marcó.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: no deseo demorar a la Cámara. Sólo quiero señalar que si se atiende al orden cronológico, el primer proyecto sobre este tema fue presentado por el bloque Fuerza Republicana, que no fue tenido en cuenta.

No voy a solicitar su votación, porque temo por la exactitud del registro del tablero electrónico ya que un integrante de mi bloque me informa que no funcionó el botón de su banca en la primera votación y sin embargo no se registró ninguna abstención.

3

JUICIO ORAL PENAL

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia —especializadas—, en los proyectos de ley sobre implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, a fin de viabilizar el juicio oral penal.

(Orden del Día Nº 542)

Dictamen de comisión *

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el anteproyecto de dictamen formulado por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia —especializadas— sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo —mensaje 529— y los proyectos de ley de los señores diputados Manny, Meneghini, Seguí, Bericua y otros, Galván, Sureda, Castillo (O. A.) y otros, Berhongaray, Hernández (A. M.) y Hernández (S. A.) y otros por los cuales se propone la implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, a fin de viabilizar el juicio oral penal, y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en el informe adjunto y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 5 de agosto de 1992.

Oscar S. Lamberto. — Antonio I. Guerrero. — Eduardo P. Amadeo. — Juan G. Ayala. — Miguel A. Balestrini. — Carlos R. Beltrán. — Eduardo A. Endetza. — José L. Gioja. — Oscar F. González. — Jorge A. López. — Marcelo E. López Arias. — Saionón A. Michitte. — Carlos J. Scelzi. — Carlos E. Soria.

Anteproyecto de dictamen

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Justicia —especializadas— han considerado el mensaje 529 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo y los proyectos de ley del señor diputado Agúndez, del señor diputado Manny, del señor diputado Meneghini, del señor diputado Seguí, del señor diputado Bericua y otros, del señor diputado Galván, de la señora diputada Sureda, del señor diputado Castillo (O. A.) y otros, del señor diputado Berhongaray, del señor diputado Hernández (A. M.) y del señor diputado Hernández (S. A.) y otros, y han tenido presente el proyecto de ley del señor dipu-

* Artículo 90 del reglamento.

tado Sodero Nievas, respecto del cual el diputado Germanó y otros solicitan se los tenga por cofirmantes, todos propiciando la implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación a fin de viabilizar el juicio oral penal, y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Integración

Artículo 1º — Créase la Cámara Nacional de Casación Penal, que estará integrada por trece (13) miembros y funcionará dividida en cuatro (4) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia del Tribunal el miembro restante.

Secretarías - Creación

Art. 2º — Créase una secretaría general para la presidencia, cuatro (4) secretarías de Cámara y cuatro (4) prosecretarías de Cámara en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 3º — Créanse cuatro (4) fiscalías ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Transformanse dos (2) cargos de fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en cargos de fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Trasládase una secretaría con su dotación de personal, de las fiscalías nacionales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Creación de cargos

Art. 4º — Créanse trece (13) cargos de juez de Cámara de Casación, un (1) cargo de secretario general, cuatro (4) cargos de secretario de Cámara, cuatro (4) cargos de prosecretario de Cámara, dos (2) cargos de fiscal de Cámara de Casación, tres (3) cargos de secretario de Fiscalía de Cámaras, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara de Casación y un (1) cargo de secretario de Defensoría de Cámara.

TRIBUNALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal

Denominación - Integración

Art. 5º — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal conservará su actual denominación e integración,

Juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal

Denominación

Art. 6º — Los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Ministerio público - Supresión

Art. 7º — Suprimense dos (2) fiscalías nacionales que actúan ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Trasládase una (1) secretaría de fiscalía a las fiscalías ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los fiscales nacionales adjuntos de Cámara recibirán instrucciones —por escrito— y estarán subordinados al titular de la Fiscalía de Cámara.

Tribunales orales en lo Criminal Federal - Creación

Art. 8º — Créanse seis (6) tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Secretarías - Creación

Art. 9º — Créanse seis (6) secretarías en los tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal.

Ministerio público fiscal - Creación

Art. 10. — Créanse seis (6) fiscalías que, actuarán ante los tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal.

Defensoría oficial - Creación

Art. 11. — Créase una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara que actuará ante los tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Créanse tres (3) defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales federales de la Capital Federal que actuarán ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 12. — Las causas actualmente en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y ante los juzgados mencionados en el artículo sexto (6º), quedarán radicados ante los mismos. Aquellas en las que haya contestación del traslado por parte de la defensa se les aplicará el procedimiento establecido por la ley 2.372 y sus modificatorias. Las causas en las cuales dicho acto procesal no se haya producido, se tramitarán conforme a la ley 23.984, salvo que el procesado o acusado solicite la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias en el término de quince (15) días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

En ambos casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente, determinará el criterio de distribución equitativa de las causas ingresadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 13.— Créanse dieciocho (18) cargos de juez de Cámara, seis (6) cargos de secretario de Cámara, seis (6) cargos de fiscal de Cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, y tres (3) cargos de defensores de pobres, incapaces y ausentes.

TRIBUNALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DEL INTERIOR DEL PAÍS

Juzgados federales del interior del país con competencia penal

Denominación

Art. 14.— Los juzgados federales de Primera Instancia con competencia criminal y correccional, con asiento en el interior del país, mantendrán su actual denominación e integración. Aquellos juzgados con competencia exclusiva en lo criminal y correccional modificarán su denominación conforme lo dispuesto en la presente ley.

Cámaras Federales de Apelaciones del interior del país

Denominación - Integración

Art. 15.— Las cámaras federales de apelaciones del interior del país conservarán su actual denominación e integración con las excepciones establecidas en el artículo siguiente.

Tribunales orales en lo criminal federal del interior del país

Art. 16.— Créanse diez (10) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en los distritos judiciales de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta y Tucumán. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal correspondiente al distrito judicial de General Roca tendrá su asiento en la ciudad del mismo nombre.

Créanse cinco (5) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en el distrito judicial de San Martín.

Créanse dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en Córdoba.

Transfórmase una de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en Tribunal Oral en lo Criminal Federal con sede en dicha ciudad.

Créase una secretaría para actuar ante cada uno de los tribunales orales que se crean por el presente artículo.

Créanse en el distrito judicial de Rosario dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en la ciudad de Rosario, y uno (1) con asiento en la ciudad de Santa Fe. Transfórmense tres (3) vocalías

de Cámara y una secretaría de Cámara creadas por ley 23.870 en vocalías ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario creadas por el párrafo anterior y en una secretaría para actuar ante el mismo.

Transfórmense dos (2) cargos de vocal de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en vocalías ante el Tribunal Oral creado por la presente ley en su distrito.

Trasládase una secretaría de aquella Cámara para actuar ante este tribunal.

Créanse dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en la ciudad de La Plata. Transfórmense tres (3) vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en vocalías ante los tribunales orales que se crean.

Créase una secretaría y trasládase una secretaría de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, para que actúen ante los dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hará saber al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de la creación de un número mayor de órganos jurisdiccionales federales y el lugar de funcionamiento.

Ministerio público fiscal

Art. 17.— Créanse veintiuna (21) fiscalías, que actuarán ante los tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país.

Defensorías

Art. 18.— Créase una defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara ante cada uno de los tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país quienes también desempeñarán las funciones que encomiendan los artículos 411 y 413 de la ley 23.984 a los asesores de menores.

Causas en trámite

Art. 19.— Las causas en trámite ante los juzgados federales y cámaras federales de apelaciones a que se refieren los artículos 14 y 15 serán sustanciados conforme lo indica el artículo 12 de la presente ley.

Creación de cargos

Art. 20.— Créanse cincuenta y dos (52) cargos de juez de Cámara, veintidós (22) cargos de fiscal de Cámara, veintidós (22) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara y veinte (20) cargos de secretario de Cámara.

Creación e implementación de otros tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país

Art. 21.— Créase un tribunal oral en lo Criminal Federal con asiento en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los tribunales que se crean por esta disposición comenzarán a funcionar en un plazo que no excederá al 1º de abril de 1993.

Creación de cargos

Art. 22. — Créanse treinta y tres (33) cargos de juez de Cámara once (11) cargos de fiscal de Cámara, once (11) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara y once (11) de secretarios de Cámara.

CAPÍTULO II

TRIBUNALES NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Denominación - Integración - Transformación

Art. 23. — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal conservará su actual denominación. Estará integrada por dieciséis (16) miembros y funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante.

Transfórmense dos (2) salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionará las salas mencionadas precedentemente.

Causas en trámite

Art. 24. — Las causas en trámite ante las dos (2) salas que se transforman por el artículo anterior se distribuirán en forma equitativa entre las cinco (5) salas que continúan integrando la Cámara citada. En todas las que haya contestación del traslado por parte de la defensa se continuará con el procedimiento de la ley 2.372 y sus modificatorias. A las restantes se les aplicará el procedimiento establecido en la ley 23.984, salvo que el procesado o el acusado solicitare la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.984.

EN LO CRIMINAL

Juzgados Nacionales en lo Criminal de instrucción de la Capital Federal

Denominación

Art. 25. — Los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción en la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal.

Transformación

Art. 26. — Excepto los mencionados en el artículo 48, transfórmense los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia en juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción números 1, 9, 16, 32 y 34 a 49 de la Capital Federal.

Secretarías - Traslado

Art. 27. — Trasládanse veinte (20) secretarías de los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción a los veinte (20) nuevos juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción resultantes de la transformación dispuesta en el artículo anterior, lo que se hará efectivo en forma coincidente con la entrada y funcionamiento de estos últimos.

En la oportunidad prevista en el artículo 35, trasládanse nueve (9) secretarías de los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción a las fiscalías que deberán actuar ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción.

Ministerio público fiscal - Actuación - Creación

Art. 28. — Las fiscalías ante los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal números 1 al 26, actuarán ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción.

Créanse a esos mismos efectos veintitrés (23) fiscalías que se identificarán con los números 27 al 49.

Secretarías - Creación - Integración

Art. 29. — Créanse cuarenta y nueve (49) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el artículo anterior, que se integrarán con las secretarías que se trasladan en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 33.

Personal

Art. 30. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación, podrá disponer la reasignación del personal de todas las fiscalías, de modo tal que éstas tengan dotaciones equivalentes de personal.

Defensorías oficiales

Art. 31. — Las defensorías oficiales ante los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal actuarán ante los juzgados nacionales en lo Criminal Nacional de Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 32. — Los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal continuarán con la sustanciación de las causas radicadas ante los mismos, y conservarán las dos (2) secretarías que los integran en la actualidad, hasta que se operen los traslados dispuestos en el artículo 27. Las causas radicadas ante las nueve (9) secretarías que se trasladan a las fiscalías, serán distribuidas en forma equitativa entre las cuarenta y nueve (49) secretarías restantes, según el criterio que determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Juzgados de sentencia - Traslados de secretarías

Art. 33. — Cuando se haga efectiva la transformación dispuesta en el artículo 26, los titulares de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia pasarán a desempeñarse como jueces nacionales en lo criminal de instrucción.

Simultáneamente con lo dispuesto en el párrafo que antecede, las secretarías respectivas se trasladarán a las fiscalías mencionadas en el artículo 28.

Causas en trámite ante juzgados de sentencia

Art. 34. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia continuarán con la sustanciación de todas las causas radicadas ante los mismos en las que haya contestación del traslado por la defensa según el procedimiento establecido por la ley 2.372 y sus modificatorias, hasta su conclusión definitiva. Las causas en las cuales ese acto procesal no se haya producido se remitirán a los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias dentro de los quince (15) días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.934.

Art. 35. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionará diez (10) de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia, a los fines establecidos en el artículo anterior. Los diez (10) juzgados restantes se transformarán, a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.934, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26; sus titulares y secretarías tendrán el destino que les asigna el artículo 33, conforme lo determine el órgano judicial competente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijará el criterio con que se efectuará la distribución equitativa de las causas radicadas ante estos últimos juzgados entre los diez (10) primeros, y les fijará un plazo prudencial para el cumplimiento de su cometido.

Tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal

Art. 36. — Créanse treinta (30) tribunales orales en lo Criminal para la Capital Federal. Dos (2) de ellos se integrarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 segundo párrafo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá disponer la reasignación de su personal en función de las necesidades de los restantes tribunales orales.

Art. 37. — Créanse treinta (30) secretarías ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal. Dos (2) secretarías de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se transfieren a los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Ministerio público fiscal

Art. 38. — Créanse treinta (30) fiscalías ante los tribunales orales de la Capital Federal.

Defensorías oficiales

Art. 39. — Créanse diez (10) defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital.

Creación de cargos - Integración

Art. 40. — Créanse ochenta y cuatro (84) cargos de juez de Cámara. Los restantes cargos de juez de Cámara se integrarán con seis (6) cargos de vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional de la Capital Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23. Los veinte (20) cargos de juez de primera instancia para los nuevos juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, procedentes de la transformación dispuesta por el artículo 36, se integran con los veinte (20) cargos de juez de primera instancia correspondientes a los titulares de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia, cuya transformación dispone el artículo citado.

Art. 41. — Créanse treinta (30) cargos de fiscal de Cámara, diez (10) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, veintitrés (23) cargos de fiscal de primera instancia y veintiocho (28) cargos de secretario de Cámara. Los cuarenta y nueve (49) cargos de secretario de primera instancia para las secretarías que se crean por el artículo 29 ante las fiscalías que deben actuar ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal se integran con los cuarenta y nueve (49) cargos de secretario de primera instancia correspondientes a las secretarías que se trasladan en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 33.

EN LO CORRECCIONAL

Denominación - Creación

Art. 42. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional letras G, H, I, J y N, se denominarán juzgados nacionales en lo correccional y se enunciarán con los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Créanse nueve (9) juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, que se enunciarán con los números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que contarán con dos (2) secretarías cada uno.

Secretarías - Traslado

Art. 43. — Los juzgados nacionales en lo correccional números 1, 2, 3, 4 y 5 conservarán dos de las secretarías que poseen actualmente.

Las restantes secretarías con todo su personal, a opción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a integrar los juzgados que se crean números 6, 7, 8, 9 y 10.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 44. — Créanse catorce (14) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal. Créanse catorce (14) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el presente artículo.

Defensorías - Traslado

Art. 45. — Créanse siete (7) defensorías de pobres, incapaces y ausentes que actuarán ante los juzgados nacionales en lo Correccional de la Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Causas en trámite

Art. 46. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional remitirán a los juzgados nacionales en lo correccional que se crean por

la presente ley, para su tramitación definitiva, las causas radicadas ante los mismos correspondientes a las secretarías que se trasladan conforme lo dispuesto por el artículo 43.

Las causas radicadas en los juzgados mencionados en el párrafo precedente, en las que haya contestación del traslado de la defensa, serán tramitadas conforme el procedimiento establecido en la ley 2.372 y sus modificatorias. Las causas en las cuales dicho acto procesal no se haya producido, se tramitarán conforme a la ley 23.984, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias en el término de quince (15) días a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 47. — Créanse nueve (9) cargos de juez de primera instancia, catorce (14) cargos de fiscal de primera instancia, siete (7) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes y veintidós (22) cargos de secretario de primera instancia.

TRIBUNALES DE MENORES DE LA CAPITAL FEDERAL

Transformación

Art. 48. — Transfórmense los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia letras M y R, los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de Instrucción números 1, 9 y 16 y los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional letras L y O en juzgados nacionales de menores números 1 a 7, respectivamente.

Los juzgados mencionados precedentemente pasarán a los nuevos destinos con su dotación completa de personal, en la forma que lo disponga esta ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Secretarías

Art. 49. — Transfiérense a los juzgados nacionales de menores, veintiún (21) secretarías de las que integran actualmente los juzgados nacionales de primera instancia a que se refiere el artículo 48.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 50. — Créanse siete (7) fiscalías ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal.

Créanse siete (7) secretarías ante las fiscalías creadas en el presente artículo.

Defensoría oficial - Creación

Art. 51. — Créanse una defensoría de pobres, incapaces y ausentes ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Tribunales orales de menores - Creación

Art. 52. — Créanse tres (3) tribunales orales de menores para la Capital Federal que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Secretaría - Creación

Art. 53. — Créase tres (3) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

Ministerio público o fiscal - Creación

Art. 54. — Créanse tres (3) fiscalías que estarán ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

Defensoría oficial - Creación

Art. 55. — Créase una defensoría de pobres, incapaces y ausentes de cámara ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación.

Asesoría de menores - Creación

Art. 56. — Créanse cuatro (4) asesorías de menores que actuarán en los supuestos previstos por el capítulo II del título II del libro III del Código Procesal Penal de la Nación, cualquiera sea el tribunal ante el cual se sustancia el proceso.

Superintendencia del Servicio Social Tutelar - Creación

Art. 57. — Créase la Superintendencia del Servicio Social Tutelar en el ámbito que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Equipo Interdisciplinario para Tribunales de Menores - Creación

Art. 58. — Créanse tres (3) equipos interdisciplinarios para los tribunales de menores que cumplirán las funciones establecidas en el artículo 14 de la ley 24.050.

Causas en trámite

Art. 59. — Las causas actualmente en trámite ante los juzgados enunciados en el artículo 48 quedarán radicadas ante los nuevos juzgados nacionales de Menores a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias en el término de quince (15) días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinará el criterio de distribución equitativa de las causas que ingresen a los juzgados nacionales de Menores, a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 60. — Créanse nueve (9) cargos de juez de Cámara, tres (3) cargos de fiscal de Cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, cuatro (4) cargos de asesor de Menores y tres (3) cargos de secretario de Cámara.

Créanse siete (7) cargos de fiscal de Primera Instancia, siete (7) cargos de secretario de Primera Instancia y un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes.

Créanse un (1) cargo de superintendente del servicio social tutelar y catorce (14) cargos de asistentes sociales tutelares. Créanse tres (3) cargos de médico especializado en psiquiatría infanto juvenil, tres (3) cargos de

psicólogo especializado en problemas infanto juveniles y seis (6) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infanto juveniles.

EN LO PENAL ECONOMICO

Denominación - Integración

Art. 61. — Los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Penal Económico y se integrarán con dos (2) secretarías cada uno.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 62. — Créanse cuatro (4) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo Penal Económico de la Capital Federal, que actuarán conjuntamente con las fiscalías existentes en el fuero.

Créanse ocho (8) secretarías que actuarán en cada una de las fiscalías del fuero penal económico.

Defensorías

Art. 63. — Las actuales defensorías de pobres, incapaces y ausentes continuarán actuando ante los juzgados nacionales en lo Penal Económico y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal

Denominación - Integración

Art. 64. — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal conservará su actual denominación.

Una sala se integrará con tres (3) jueces de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicará al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de la creación de la sala restante de dicha Cámara.

Transfórmense dos (2) salas de la citada Cámara en tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionará los jueces de Cámara que pasarán a cumplir funciones ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Secretarías

Art. 65. — El personal de una de las actuales salas a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguirá desempeñándose en la Cámara.

El resto pasará a desempeñarse en los tribunales orales en lo Penal Económico que se crean por esta ley conforme lo establecido por el artículo 66.

Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal

Integración

Art. 66. — Créanse cuatro (4) tribunales orales en lo Penal Económico para la Capital Federal, que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Créanse ocho (8) cargos de juez de Cámara. Los cuatro (4) cargos restantes se integrarán con los procedentes de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Secretarías - Creación

Art. 67. — Créanse dos (2) secretarías en los tribunales orales en lo Penal Económico de Capital Federal. Trasládense dos (2) secretarías de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su dotación completa de personal, a los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal que se crean por esta ley.

Ministerio público fiscal - Creación

Art. 68. — Créanse cuatro (4) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales en lo penal económico de Capital Federal.

Defensorías - Creación

Art. 69. — Créanse dos (2) defensorías que actuarán ante los tribunales orales en lo penal económico de Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 70. — Los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal continuarán con la tramitación de las causas en las que se haya producido la contestación del traslado de la defensa, al momento de entrada en vigencia de la ley 23.984 hasta su conclusión definitiva, conforme lo determina el artículo 536 de dicha ley. Cuando dicho acto no se haya producido las causas se tratarán conforme a la ley 23.984, salvo que el procesado o acusado solicite la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias en el término de quince (15) días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

Las salas que se transforman en tribunales orales en lo Penal Económico remitirán sus causas para la tramitación correspondiente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Creación de cargos

Art. 71. — Créanse ocho (8) cargos de juez de Cámara, cuatro (4) cargos de fiscal de Cámara, dos (2) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, cuatro (4) cargos de fiscal de primera instancia, dos (2) cargos de secretario de Cámara, ocho (8) cargos de secretario de primera instancia y seis (6) cargos de peritos contadores para el fuero penal económico de la Capital Federal.

Juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal

Art. 72. — Créanse tres (3) juzgados nacionales de ejecución penal para la Capital Federal, que contarán con una (1) secretaria cada uno. Tendrán la competencia territorial correspondiente al distrito judicial de

Capital Federal, conforme lo determina la ley de organización del Poder Judicial de la Nación para la implementación del procedimiento penal oral.

Las funciones que establece el Código Procesal Penal de la Nación para el juez de ejecución penal serán ejercidas por el tribunal que se crea por esta ley.

Secretarías

Art. 73. — Créanse tres (3) secretarías que actuarán ante los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal que se crean por la presente ley.

Causas con sentencia condenatoria firme

Art. 74. — A partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984 los juzgados nacionales remitirán a los juzgados nacionales de ejecución penal todas aquellas causas con sentencia firme en las que hubiere condena, conforme al modo de distribución que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente determine para los nuevos juzgados de ejecución.

Juez de ejecución del interior del país

Art. 75. — Las funciones del juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas, en el interior del país, por un juez del tribunal oral respectivo, conforme lo determine el órgano judicial competente.

Sus decisiones serán recurribles ante la Cámara Federal de Apelaciones cabecera del distrito o ante el órgano judicial competente, según el caso.

En los casos de suspensión del proceso a prueba, las ejercerá el juez que dictó el beneficio.

Causas con sentencia condenatoria firme

Art. 76. — A partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, los juzgados federales del interior del país remitirán, cuando corresponda, al miembro del tribunal oral respectivo que cumpla la función de juez de ejecución, todas aquellas causas con sentencia condenatoria firme.

Creación de cargos

Art. 77. — Créanse tres (3) cargos de juez de primera instancia, un (1) cargo de fiscal de primera instancia, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de primera instancia, que actuarán ante los juzgados de ejecución penal de la Capital Federal, y cuatro (4) cargos de secretario de primera instancia. Una de estas secretarías actuará ante la fiscalía que se crea por el presente artículo.

Créanse dos (2) cargos de médico, dos (2) cargos de médico psiquiatra, dos (2) cargos de psicólogos y cuatro (4) cargos de asistente social para el Equipo Interdisciplinario de los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la Capital Federal.

Créanse diecisiete (17) cargos de secretario de primera instancia para las oficinas que establece el artículo 29, párrafos tercero y cuarto de la ley orgánica respectiva en las unidades penitenciarias número 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 30 y 32.

En lo penal de rogatorias - Denominación - Integración

Art. 78. — El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias conservará su actual denominación e integración.

Procuración General de la Nación

Art. 79. — Créanse dos (2) cargos de procurador fiscal con atribuciones y competencias conforme lo establecido por la ley 15.464 uno para las causas penales de Capital Federal y otro para las causas penales del interior del país, y dos (2) cargos de secretario de procurador fiscal.

CAPÍTULO III

Policía Judicial - Secretaría - Creación

Art. 80. — Créase la Policía Judicial en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Créase la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales.

La Policía Federal cumplirá con las funciones asignadas a la Policía Judicial por la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 81. — Créase un (1) cargo de director de la Policía Judicial y un (1) cargo de secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales.

Créanse cincuenta y dos (52) cargos de secretario de primera instancia que cumplirán las funciones de asistentes jurídicos de la prevención.

Oficina de Asesoramiento u Asistencia a Víctimas y Testigos

Art. 82. — Créase la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a la Víctima y Testigo.

Créase un (1) cargo de director de la Oficina de Asesoramiento a Víctima y Testigo.

Créanse dos (2) cargos de trabajadores sociales, dos (2) cargos de psicólogo y dos (2) cargos de abogados para la integración del equipo interdisciplinario mencionado en el artículo 40 de la ley 24.050, juntamente con el personal administrativo, técnico y de mastranza que le asigne la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 83. — Créase una (1) Oficina de Administración Judicial, una (1) Dirección de Informática Jurídica y un (1) Archivo General.

Cuerpo médico forense

Art. 84. — Créanse seis (6) cargos de médico forense, dos (2) cargos de médico anatómo patólogo, dos (2) cargos de perito químico y un (1) cargo de odontólogo con orientación en medicina legal.

Creación de cargos

Art. 85. — Créanse los cargos de personal administrativo, técnico, de servicio y de mastranza en los distintos órganos que se detallan en los anexos I a X que forman parte integrante de la presente ley.

Art. 86. — Créase una prosecretaría de primera instancia ante cada uno de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, correccional, de menores, en

lo penal económico, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y en los juzgados federales del interior del país.

Art. 87. — Transformanse los actuales cargos de prosecretario administrativo de los juzgados a que alude el artículo anterior, en cargos de prosecretario de primera instancia.

Modificaciones

Art. 88. — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 24 de la ley 23.984 por el siguiente: "De las cuestiones de competencia que se planteen entre ellos".

Sustitúyese el inciso 1º del artículo 55 de la ley 23.984, por el siguiente: "Si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del ministerio público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito, o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas".

Sustitúyese el artículo 187 de la ley 23.984 por el siguiente: "Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligente-mente serán sancionados, salvo que se aplique el Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda parte o arresto de hasta 15 días, recurribles —dentro de los tres días— ante el órgano judicial que corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la Policía o la fuerza de seguridad de que se trate".

Agrégase como último párrafo del artículo 196 de la ley 23.984 el siguiente: "Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la misma facultad que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción".

Agrégase al final del artículo 536 de la ley 23.984, la frase siguiente: "o cuando el procesado o acusado lo solicitare dentro de los quince (15) días de la entrada en vigencia de este Código".

Art. 89. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 3º de la ley 24.050, por el siguiente: "Sin perjuicio de la competencia territorial de los tribunales orales en lo criminal federal que se instalarán en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, a los efectos de la organización judicial de los tribunales nacionales en materia penal, el territorio de la República se dividirá en los distritos judiciales que la presente ley y leyes especiales establezcan, a saber:"

Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.050 por el siguiente: "La Cámara Nacional de Casación Penal estará integrada por trece (13) miembros y funcionará dividida en cuatro (4) salas de tres miembros cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el juez restante.

Tendrá competencia territorial en toda la República considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial. En razón de la materia, tendrá la competencia determinada por el Código Procesal Penal y leyes especiales. Una de las salas juzgará de los recursos previstos por el artículo 445 bis de la ley 14.029 (Código de Justicia Militar)".

Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 18 de la ley 24.050, por el siguiente: "Estará integrada por dieciséis (16) miembros y funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante".

Art. 90. — Además de la competencia que les atribuye el artículo 16 de la ley 24.050 y con la salvedad derivada de lo establecido en el artículo 75 de la presente ley, los tribunales orales en lo criminal federal con asiento en las provincias conocerán en los supuestos establecidos en el artículo 24 de la ley 23.984, excepto en aquellas provincias donde funcionen cámaras federales de apelaciones.

Disposiciones transitorias

Art. 91. — Facúltase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a designar el personal necesario y a dictar las normas complementarias que posibiliten la integración escalonada y el funcionamiento de los órganos previstos en la ley 24.050, en todo aquello no regulado por la presente, pudiendo delegar esa facultad en la Cámara Nacional de Casación Penal, en las cámaras nacionales de apelaciones o en el tribunal oral respectivo.

Financiamiento

Art. 92. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, en lo que hace a la instalación y funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, sus fiscalías y defensorías (anexo I); quince (15) tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, sus fiscalías y defensorías (anexo IV); dos (2) tribunales orales de menores; una (1) asesoría de menores (anexo VI); dos (2) tribunales orales en lo penal económico, sus fiscalías y defensorías (anexo VII); dos (2) tribunales orales federales de la Capital Federal (anexo II); y un (1) tribunal oral por cada distrito judicial del interior del país con sus fiscalías y defensorías (anexo III); tres (3) jueces nacionales de ejecución penal con su fiscalía y defensoría (anexo VIII); dos (2) cargos de procurador fiscal con sus secretarías en la procuración general (anexo VIII); cincuenta y dos (52) cargos de secretario de primera instancia para la Policía Judicial y un (1) administrador judicial (anexo X), todos con sus respectivas dotaciones, se financiarán con los recursos establecidos en los artículos 2º y 3º de la ley 23.853, imputándose a los créditos presupuestarios del ejercicio 1992.

Respecto de la instalación y funcionamiento de los demás órganos que prevé la presente ley, quedarán imputados al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente al año 1993, debiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptar los recaudos necesarios para ello.

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, fijará el plan de entrada en funcionamiento, atendiendo a las necesidades del servicio de Justicia.

Art. 93. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación distribuirá al personal actualmente existente en el Poder Judicial de la Nación de modo que permita la instalación de todos los órganos creados por la presente ley.

Art. 94. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio M. Hernández. — Juan O. Gauna.
— Jorge R. Marcó. — Alberto D. Piotti.
— Enrique A. Bischof. — Osvaldo A. Bracchi. — José J. Manny. — Jorge A. Azúndez. — César Arias. — Juan C. Ayala. — Angel M. Bassani. — Juan P. Baylac. — Carlos A. Becerra. — Carlos E. Branda. — Mario C. Brook. — Porfirio M. Carreras. — Raúl A. Galván. — Nicolás A. Garay. — Alberto R. Germanó. — Dámaso Larraburu. — Alcides H. López. — Marcelo E. López Arias. — Juan C. Maqueda. — Martín Mendoza. — Javier R. Meneghini. — Ricardo F. Molinas. — Miguel A. Ortiz Pellegrini. — Leopoldo M. Orquín. — Hugo B. Rodríguez Sañudo. — Angel R. Ruiz. — Carlos E. Soria. — Néstor A. Varela. — Jorge R. Yoma.

En disidencia:

Víctor H. Soderó Nievas. — Juan P. Caffero. — Orlando J. Gallo.

En disidencia parcial:

Gerardo P. Profili.

En disidencia total:

Daniel M. Salvador.

INFORMES

1

Honorable Cámara:

Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ha procedido al estudio y análisis del anteproyecto de dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia —especializadas— sobre el proyecto de ley, por el que se propicia la implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación a fin de viabilizar el juicio oral penal, y otras cuestiones conexas; y no teniendo que formular objeciones al mismo desde el punto de vista presupuestario, solicita a la Honorable Cámara la sanción del proyecto de ley.

Oscar S. Lamberto.

2

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, en su carácter de especializadas, han considerado el pro-

yecto de implementación del juicio oral enviado por el Poder Ejecutivo y los que en consecuencia presentaron los señores diputados.

Las modificaciones que se realizaron al texto original, fueron incorporadas respetando al máximo posible el criterio de economía en los gastos, de modo de no aumentar desmesuradamente los que ya estaban previstos por el Poder Ejecutivo.

En líneas generales, las modificaciones fueron las siguientes:

1º — Se crea una sala más en la Cámara de Casación, en previsión de una gran cantidad de trabajo proveniente del recurso que prevé el artículo 445 bis del Código de Justicia Militar.

2º — Se da efectivo y completo cumplimiento a la obligación constitucional de efectuar los juicios criminales en la misma provincia donde se hubiese cometido el delito (artículo 102 de la Constitución Nacional).

Ello se logra:

a) Creando un tribunal oral de juicio en cada provincia;

b) Dotando a ese tribunal de las competencias que el Código otorga a las cámaras de apelaciones.

Así, toda la tramitación del proceso criminal se desarrollará dentro de cada provincia y por jueces asentados en ella.

3º — Se mantiene la estructura de la Cámara Federal de Córdoba, creándose por separado dos tribunales orales, necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema. Las estadísticas de trabajo que se evaluaron, demostraron la inconveniencia de la propuesta original.

4º — Dentro de la circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe, se creó un tribunal oral en la ciudad de Santa Fe además de los originalmente previstos para la ciudad de Rosario.

5º — Se dota de un defensor oficial a cada tribunal oral federal con asiento en las provincias. De este modo se garantiza el correcto servicio de la defensa pública, además de impedirse que la realización de los juicios se retrase por insuficiencia de defensores oficiales.

6º — En la Cámara del Crimen de la Capital Federal se mantienen en funcionamiento dos salas más de las previstas originalmente. Para esta decisión se valoró el porcentaje de trabajo que disminuirá con el nuevo sistema.

7º — Se mejora la dotación de la justicia de instrucción en la Capital Federal. Se ha considerado que el sistema no funcionará como es esperable sino sobre la base de una eficiente investigación e instrucción de los sumarios, y que la estructura originalmente prevista no era suficiente para ello.

8º — También se mejora la dotación de la justicia correccional de la Capital Federal. Las proyecciones efectuadas acerca del trabajo que va a recibir esta justicia en razón de la reforma de competencia dispuesta por el código, hacía conveniente prevenir un probable desborde de su capacidad de respuesta.

9º — Se aumenta también la dotación general de la defensa pública en el ámbito de la Capital Federal,

10. — Finalmente, también se mejora la dotación de las estructuras de apoyo al servicio de justicia, como lo son:

a) Los equipos interdisciplinarios que actuarán para los juzgados de ejecución penal y para la oficina de asesoramiento y asistencia a víctimas y testigos;

b) El cuerpo médico forense;

c) El cuerpo de peritos contadores para el fuero penal económico.

Las comisiones de Legislación Penal y de Justicia comparten el objetivo de instalar sin demora el juicio penal oral en el ámbito de la Nación, y solicitan en consecuencia la sanción de este proyecto de ley.

Antonio M. Hernández.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA DEL SEÑOR DIPUTADO SODERO NIEVAS

Señor presidente:

I) En los fundamentos del proyecto de dictamen se ha omitido considerar y citar el expediente 1.679-D-92, por el que los diputados Alberto Germanó, Jorge O. Folloni, Ricardo Molinas, Raúl E. Rodríguez, Orlando Gallo y Luis F. Herrera, piden ser tenidos como coautores del proyecto 61-D-92 del suscrito.

Además no se da ninguna fundamentación a las modificaciones introducidas al proyecto original del Poder Ejecutivo. Nos parece una falta de respeto hacia el otro poder; toda vez que tengamos en cuenta la debida fundamentación que toda innovación representa y los beneficios para el Estado y los justiciables. En tal sentido incorporamos una separata con la debida introducción al tema.

II) En lo que concierne al dictamen específicamente, observamos los siguientes puntos:

Es incorrecto el artículo 17 por la cantidad de cargos que figuran en el mismo, dado que, si se verifica el artículo 16 que crea los tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país se verificará que los fiscales necesarios para cumplir con los tribunales que se crean son veintitrés (23) y no 21 como figuran en el anteproyecto.

Se incurre en el mismo error en el artículo 20 al referirse a los cargos de fiscal de Cámara, pues figuran 21 y corresponden 23.

Lo mismo sucede con los cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara. Figuran 21 y deben ser 23.

Idéntico error se comete con los 20 cargos de secretario de Cámara que deben ser 22 y no 20 como figuran.

En el mismo artículo 20 figuran 52 cargos de juez de Cámara debiendo ser 58.

Hay tres artículos correlacionados (27, 28, 29), y a ellos se suman los artículos 33 y 35, que se refieren a la etapa intermedia, es decir, la que va a ocurrir desde el 5 de septiembre en adelante, suprimiendo diez (10), juzgados de sentencia y pasándolos o transformándolos en juzgados de instrucción. Es decir, que en ese momento va a haber funcionando treinta y nueve (39) juzgados, de los cuales diez (10), van a tener dos secretarías y los veintinueve (29) restantes una (1). Esto está en contra de la ley 24.050 (artículo 22, *in fine*), que establece que los juzgados de instrucción contarán

con una (1) secretaría. Al mismo tiempo se pretende por parte del Poder Ejecutivo implementar 39 fiscalías con una secretaría cada una, pero en el anteproyecto sólo figuran para esta etapa de transición 29 secretarías, producto de lo siguiente: 9 secretarías que vienen de los juzgados de instrucción y 20 de los juzgados de sentencia que se transforman. En conclusión: nos encontramos que de las 39 fiscalías para ese momento (previstas para ese momento), solamente 29 tendrán secretaría y las diez restantes, ninguna.

III) Otros aspectos referidos al mismo tema:

Esta transformación que la ley pretende hacer (ante el proyecto) el 5 de septiembre carece de financiamiento, pues en el artículo 92 no está previsto para el año 1992 el gasto que representan los cargos de fiscales (13) a crear y, obviamente, las diez (10) secretarías que harían falta, sencillamente porque no están creadas.

Habría que agregar en el artículo 93, último párrafo *in fine*, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá los cargos necesarios para que los organismos que se crean por la presente ley sean suficientes teniendo como antecedente la ley 24.091.

IV) La Cuarta Sala de la Cámara Nacional de Casación Penal desvirtúa nuestro proyecto, pues los recursos referidos a casación, revisión e inconstitucionalidad ocurridos en ámbito militar o por personal militar en actos de servicio, se distribuirán entre todas las salas, por lo que, en definitiva, no se logrará la especialización como existe en el derecho comparado. En efecto, vemos que los países líderes tienen tribunales especializados en el tema militar y dentro de su estructura el Poder Judicial, integrados por civiles. Así vemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América el máximo tribunal militar es la Corte de Apelaciones Militares, la que se encuentra integrada por tres civiles. Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América es necesario destacar que éste es el sistema que adopta el país que tiene el ejército más importante del mundo, por lo que demuestra a las claras la utilidad de tal organización judicial. Otro ejemplo sería el caso de la Unión Soviética (actualmente Comunidad de Estados Independientes). El máximo tribunal del Soviet Supremo está integrado por tres salas: una civil, una criminal y la restante militar. En ambos casos con competencias mucho más amplias que en nuestro proyecto.

Esto es demostrativo de que no se trata de diferencias ideológicas, sino que ambos países han adoptado el sistema jurídico más eficiente en orden a los valores de justicia y eficacia.

En los últimos doce meses, lo que se le suprime a esta sala militar, según el anteproyecto, serían 1.200 causas aproximadamente, a saber: 200 causas son de origen correspondiente a la justicia militar, 300 causas correspondientes a la justicia federal. Ambas cifras corresponden a la fuerza ejército. A estas cifras hay que agregar otras 700 causas correspondientes a las demás fuerzas.

La redacción del anteproyecto, en cuanto limita la competencia a los supuestos del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar (artículo 89), deja sin las garantías apelativas y permite la confusión de temas

entre las restantes salas, por lo que lejos de especialización y uniformidad de criterios, veríamos reflejados en la Cámara Nacional de Casación Penal la actual dispersión de criterios jurisprudenciales que provienen de las cámaras federales de todo el país, y que provocarían en consecuencia reiterados pronunciamientos plenarios.

V) Faltan los anexos que son parte de la ley.

VI) Falta el artículo 94: "Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional".

VII) Reemplazar en el artículo 491, segundo párrafo, de la ley 23.984, la expresión "recurso de casación" por "recurso de apelación".

Victor H. Soderro Nievas.

Exposición de motivos que debe agregarse al proyecto de implementación de la justicia oral penal

Luego de un profundo estudio, teniendo en cuenta la necesidad de adecuar el proyecto del Poder Ejecutivo a la realidad judicial de todo el país, se lo ha perfeccionado al mismo con vista a lograr un mejoramiento sustancial en el servicio de prestación de justicia a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal el próximo 5 de septiembre del corriente año.

Las principales modificaciones sobre el proyecto oficial consisten en:

1º — Cámara Nacional de Casación Penal.

Ampliación de la Cámara Nacional de Casación Penal. A tal efecto se ha creado una nueva sala elevando su número total a cuatro salas. Dado que se estima que las tres proyectadas son totalmente insuficientes.

Además, sin modificar la competencia de la Cámara Nacional de Casación Penal tal como está determinada por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, se le ha conferido a una de sus salas toda la temática referida al concurso previsto por el artículo 445 bis del Código de Justicia Militar y los demás recursos ocurridos en el ámbito militar o por personal militar en acto del servicio, entendiéndose que, de esta manera, las demás salas se podrán ocupar libremente de las causas penales sin la interferencia de estas causas militares que, de no ser así, deberán ser juzgadas por cada una de las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, impidiendo su normal funcionamiento dado el volumen de causas presentadas.

A la fecha existen cerca de 1.200 militares sometidos a procesos que en definitiva, deberán ser juzgados por la Cámara de Casación, por aplicación del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar, lo que por sí solo, habla de la necesidad de adoptar la solución propuesta. Sin perjuicio de este dato estadístico, es de hacer notar que en el ámbito militar a los últimos doce meses entre causas de la justicia militar y causas federales totalizan aproximadamente 1.200, lo que por sí solo habla de la conveniencia de la modificación adoptada.

Soluciones similares existen en otros países, caso de Estados Unidos, donde existe una Corte de Apelaciones Militares integrada por tres civiles dentro del Poder Judicial. También en la Unión Soviética el máximo tribunal se encuentra integrado por tres salas, una civil, otra criminal y la tercera militar.

En Italia el Tribunal Supremo Militar incluye en su composición a ocho miembros de la Corte Suprema de Casación.

Criterios parecidos adoptó España, pues en su Tribunal Supremo la Sala V tiene una sala militar que implica criterios similares a los enunciados.

Otra gran cantidad de países adoptaron similares criterios sometiendo al personal militar a tribunales civiles.

2º — El proyecto preveía para la Cámara Nacional de Casación sólo dos fiscales. Al respecto se ha considerado que cada sala debe tener su propio fiscal, dado el volumen de trabajo previsto, por ello se ha aumentado su número a cuatro fiscales, a razón de uno por cada una de las salas de Cámara de Casación.

3º — Tribunales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal.

Se ha aumentado el número de defensores oficiales por considerar insuficiente el número previsto, a tal efecto, se han agregado tres nuevos cargos de defensor que actuarán ante los doce juzgados federales (hoy llamados de primera instancia).

4º — Tribunales en lo criminal y correccional federal del interior del país.

Se ha tratado de cumplir con lo requerido por el artículo 102 de la Constitución Nacional. A tal efecto se ha previsto que cada provincia cuente, cuando menos con un tribunal oral federal del crimen. Sin perjuicio de aquellas jurisdicciones, caso de Córdoba, donde se ha implementado dos tribunales orales sin quitarle a la actual estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ninguna de sus salas actualmente en funcionamiento.

El criterio seguido para dar solución a esta necesidad —de por lo menos un tribunal por provincia— ha sido el de que a partir del 5 de septiembre de 1993 se cree un tribunal oral en cada uno de los quince distritos judiciales del interior del país. Y en aquellos distritos judiciales que abarcan más de una provincia se ha previsto que los demás tribunales comenzarán a funcionar a más tardar el 1º de abril de 1993.

Por último, se ha dispuesto que cada tribunal oral federal en el interior —donde no exista cámara federal de apelaciones— sea competente para resolver los recursos contra las resoluciones de los jueces federales, evitándose de esta manera que sea necesario enviar un expediente en apelación a una cámara federal de otra provincia tal como está previsto en el régimen procesal que comenzará a regir en septiembre próximo.

5º — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal.

El proyecto dejaba sólo tres de las actuales salas que componen la Cámara Nacional de Apelaciones transformando las cuatro salas restantes en tribunales orales del crimen.

Se ha modificado el mismo, dejando cinco salas en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, entendiéndose que, de esta manera, si bien es cierto que no tendrá competencia en materia de sentencias definitivas, no es menos cierto que el 80 % de los recursos planteados ante las mismas corresponden a sentencias interlocutorias por lo que, de aceptarse el criterio original del proyecto las tres salas serían insuficientes. De este

manera, dejando cinco salas de las tres previstas, entendemos se mejorará mucho más el sistema en materia de revisión de resoluciones interlocutorias.

6º — Juzgados nacionales de instrucción en lo criminal de la Capital Federal.

El proyecto tenía previsto aumentar los actuales 29 juzgados de instrucción a 39 pero con una sola secretaria. Además aumentaba los fiscales a 39 y les agregaba una secretaria de juzgado con todo su personal. Al respecto, se ha creído conveniente no disminuir las unidades operativas. Puesto que se producía una notable merma en las secretarías de juzgado existentes actualmente, dado que, de 58 que existen a la fecha se las disminuía a 39 a todas luces insuficiente.

Por ello se han aumentado en dos etapas los juzgados de instrucción actuales de 29 a 49 dejándolos con una sola secretaria y a la vez se ha elevado el número de fiscales, también a 49 fiscales con un secretario cada uno.

Se ha previsto que con los juzgados de sentencia que se suprimen y con sus secretarías se podrá cumplir sin gastos este notorio mejoramiento de la justicia de instancia.

7º — Correccional.

El proyecto preveía desdoblar los cinco actuales juzgados correccionales de la Capital que cuentan con 4 secretarías en diez juzgados con dos secretarías.

Al respecto se ha preferido elevar su número a 14 por entenderse que la actual demanda de este tipo de delitos hace necesario aumentar el número de juzgados previstos.

También se ha aumentado el número de fiscales a razón de uno por juzgado correccional elevando su número a 14 y finalmente se aumentó el número de defensores a razón de dos por cada juzgado correccional.

8º — Entre otras reformas de menos importancia debemos destacar que ha creado dos cargos de procurador fiscal en la Procuración General de la Nación, se han establecido nuevos cargos de médicos forenses y médicos anatomopatólogos, peritos químicos y peritos contables, también se ha aumentado el personal de la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a Víctima y Testigo; se ha aumentado el personal del equipo interdisciplinario para tribunales de menores, todos cargos no previstos en el proyecto original pero que se consideran absolutamente indispensables para el eficaz funcionamiento de la justicia oral penal que se desea implementar.

9º — Se ha creído conveniente, a efectos de asegurar garantías constitucionales que, el acusado o procesado pudiera optar dentro de un plazo de quince días por el régimen procesal actualmente vigente, no sometiendo por lo tanto al juicio oral y público. Se ha entendido que este criterio respeta al máximo la defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional) dejando librado al interesado la evaluación sobre cuál es el régimen jurídico que más le conviene en las causas, a las que se encuentra sometido.

Deseamos destacar que, al modificar un régimen procesal por otro se edifica el sistema de valoración de las pruebas, así el régimen de "pruebas legales" es sustituido por el de la "sana crítica". Por ello a efectos de evitar planteos de inconstitucionalidad se ha establecido la opción a la que hicimos referencia anteriormente.

10. — La estructura de la ley 24.091 —a nuestro criterio— marca con relación al personal necesario, la adecuada implementación por lo que, dejamos como modelo, en base a las facultades de la CSJN la cobertura de los cargos que resulten necesarios para la eficiencia del sistema.

11. — Estimamos que, con las nuevas estructuras propuestas se respeten los límites presupuestarios del proyecto oficial, lográndose en definitiva un mejoramiento sustancial al proyecto original y, de esta manera habremos cumplido adecuadamente el mandato constitucional que nos impone "afianzar la justicia" en beneficio de todos nuestros representados.

Víctor H. Sodero Nievas.

ANEXO I

Partida presupuestaria 1992

Cámara Nacional de Casación Penal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara de casación	13
Secretario general	1
Secretario de cámara	4
Prosecretario de cámara	4
Fiscal de cámara de casación	2
Secretario de Fiscalía de cámara	3
Defensor de cámara de casación	1
Secretario de defensoría de cámara	1

Personal administrativo

Prosecretario administrativo	7
Oficial superior	7
Auxiliar superior (relator)	10
Auxiliar superior de 6º	7
Auxiliar principal de 5º	7

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7º	12
--------------------------------	----

Total 85

ANEXO II

Partida presupuestaria 1992/93

Tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	18
Fiscal de cámara	6
Defensor oficial de cámara	1
Secretario de cámara	6
Defensor de pobres, incapaces y ausentes	3

Total 34

ANEXO III

Partida presupuestaria 1992

Tribunales orales en lo criminal federal del interior

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	58
Fiscal de cámara	23

Defensor oficial de cámara	23
Secretario de cámara	20
<i>Personal administrativo y técnico</i>	
Prosecretario administrativo (ujieres)	17
Prosecretario administrativo (oficial 1º)	81
Auxiliar superior	81
Auxiliar superior de 6ª	30
Auxiliar superior de 5ª	20
<i>Personal de servicio</i>	
Auxiliar principal de 7ª	19
Total	372

Partida presupuestaria 1993

Tribunales orales en lo criminal federal
del interior a implementar

<i>Magistrados y funcionarios</i>	
Juez de cámara	33
Fiscal de cámara	11
Defensor oficial de cámara	11
Secretario de cámara	11

<i>Personal administrativo y técnico</i>	
Prosecretario administrativo (ujieres)	11
Prosecretario administrativo (oficial 1º)	44
Auxiliar superior	44
Auxiliar superior de 6ª	11
Auxiliar superior de 5ª	11

<i>Personal de servicio</i>	
Auxiliar principal de 7ª	11
Total	196

ANEXO IV

Partida presupuestaria 1992/93

Tribunales orales criminales de Capital Federal

<i>Magistrados y funcionarios</i>	
Juez de cámara	84
Fiscal de cámara	30
Defensor oficial de cámara	10
Secretario de cámara	28

<i>Personal administrativo</i>	
Prosecretario administrativo (oficial 1º)	30
Auxiliar superior (relator)	30

<i>Personal de servicio</i>	
Auxiliar principal de 7ª	30
Subtotal	242

Ministerio público fiscal de instrucción

<i>Funcionarios</i>	
Fiscal de primera instancia	23
Total	275

ANEXO V

Partida presupuestaria año 1993

Juzgados correccionales de Capital Federal

<i>Magistrados</i>	
--------------------	--

Juez de primera instancia	9
---------------------------------	---

Ministerio público ante los juzgados nacionales
de la Capital Federal

Funcionarios

Fiscal de primera instancia	14
Secretario de primera instancia	22

Subtotal 45

Defensoría de pobres, incapaces y ausentes

Funcionarios

Defensores de pobres, incapaces y ausentes	7
--	---

Total 52

ANEXO VI

Partida presupuestaria 1992/93

Tribunales orales de menores de Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	9
Fiscal de cámara	3
Defensor oficial de fiscalía de cámara	1
Asesor de menores de 2ª instancia	4
Secretario de cámara	3

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo (oficial 1º)	3
Auxiliar superior (relator)	3
Auxiliar superior de 6ª	3
Auxiliar principal de 5ª	3

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	3
Total	35

Equipo interdisciplinario para tribunales de menores

Médico especializado en psiquiatría infanto juvenil (fiscal de 1ª instancia)	3
Psicólogo especializado en problemas infanto juveniles (fiscal de 1ª instancia)	3
Asistentes sociales con título habilitante especializa- dos en problemas infanto juveniles (secretario de 1ª instancia)	6

Subtotal 12

Cuerpo médico forense

Médico forense (fiscal de 1ª instancia)	6
Médico anatomopatólogo (fiscal de 1ª instancia)	2
Perito químico (fiscal de 1ª instancia)	2
Odontólogo orientación medicina legal (fiscal de 1ª instancia)	1

Subtotal 11

Total 96

ANEXO VII

Partida presupuestaria 1992/93

Tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	8
Fiscal de cámara	4
Defensor oficial de cámara	2
Secretario de cámara	2

Personal administrativo

Prosecretario administrativo (oficial 1º)	4
---	---

Subtotal 20

Ministerio público ante los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal

Funcionarios

Fiscal de 1ª instancia	4
Secretario de 1ª instancia	8

Subtotal 12

Peritos contadores del fuero penal económico

Perito contador (secretario de 1ª instancia)	6
--	---

Total 38

ANEXO VIII

Partida presupuestaria 1992/93

Juzgados nacionales de ejecución penal

Magistrados y funcionarios

Juez de 1ª instancia	3
Fiscal de 1ª instancia	1
Defensor oficial de 1ª instancia	1
Secretario de 1ª instancia	4

Oficina de ejecución penal

Secretario de 1ª instancia	17
----------------------------------	----

Equipo interdisciplinario de ejecución penal

Médico (secretario de cámara)	2
Médico psiquiatra (fiscal de 1ª instancia)	2
Psicólogo (secretario de cámara)	2
Asistente social (secretario de 1ª instancia)	4

Subtotal 36

Partida presupuestaria 1992

Procuración General de la Nación

Procurador fiscal (juez de cámara)	2
Secretario procurador fiscal CSJN (juez de 1ª instancia)	2
Auxiliar superior (relator)	4

Subtotal 8

Total 44

ANEXO IX

Policía judicial

Personal superior

Director de policía judicial (fiscal de 1ª instancia)	1
Secretario de sumario y asuntos judiciales (secretario de cámara)	1
Secretario de 1ª instancia	52

Total 54

ANEXO X

Partida presupuestaria 1992/93

Oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y al testigo

Personal superior

Director (fiscal de 1ª instancia)	1
Asistencia social (secretario de 1ª instancia)	2
Psicólogo (secretario de 1ª instancia)	2
Alojado (secretario de 1ª instancia)	2

Administración judicial

Personal superior

Administrador judicial (secretario de cámara)	1
--	---

Archivo general

Personal superior

Director (secretario de cámara)	1
---------------------------------------	---

Dirección de informática jurídica

Personal superior

Director (secretario de cámara)	1
---------------------------------------	---

Total 10

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA DEL SEÑOR DIPUTADO CAFIERO

Señor presidente:

La implementación del juicio oral es una valiosa aspiración de quienes desean un funcionamiento de la justicia, acorde a los tiempos actuales, eficaz y garantizadora.

Sin duda, el proceso de oralización es un avance, que fue apoyado por todos los sectores, en la esperanza de modificar sustancialmente la administración de justicia en el país. Los ejemplos de las jurisdicciones provinciales que tienen este procedimiento, abundan en cuanto a sus virtudes, y a la aceptación social de este modelo.

En este sentido, el proyecto de ley que pone en marcha la implementación del juicio oral, viene a desarrollar una etapa sustancial, cual es la de arbitrar los medios humanos y los recursos financieros que paulatinamente irán satisfaciendo los objetivos de la ley 23.894.

Pero para cumplir estos objetivos debemos disentir del proyecto generado en el seno de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal, en tanto no se advierte en los mismos una adecuada evaluación del estado de cosas que caracteriza a nuestra actual justicia, y los

condicionamientos que caracterizan a la tramitación y las decisiones, objetivamente muy lejanas de los ideales de transparencia y seguridad jurídica a los que se pretende proveer con esta nueva ley.

Concretamente y atendiendo a tales objetivos básicos se proponen las siguientes modificaciones al orden proyectado: 1º) La modificación de la segunda parte del primer párrafo del artículo 12, quedando redactada en los siguientes términos: "Se les aplicará el procedimiento establecido por ley 2.372 y sus modificatorias sólo a aquellas causas en las que haya contestación del traslado por parte de la defensa". 2º) La supresión de la tercera parte del primer párrafo del artículo 12, así como de los artículos 34, 46 y 59 en sus partes concordantes en cuanto se establece la facultad del acusado a procesado de solicitar la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias dentro del plazo de quince días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984. 3º) Se propone como artículo 95 la norma expresa para que el pliego correspondiente a los jueces que reciban acuerdo para su designación a partir de la entrada en vigencia de esta ley, sea tratado en sesión de carácter público del Honorable Senado de la Nación, debiéndose publicar previamente la nómina de candidatos propuestos, a fin de que los ciudadanos puedan conocer y eventualmente objetar fundadamente los mismos.

La modificación de la segunda y tercera parte del primer párrafo del artículo 12 en los términos expuestos, se funda en primer término en el argumento central de los que dan base a la nueva ley.

En tal sentido basta con limitarse a recordar el concepto, según el cual, mediante el procedimiento oral el procesado está sometido a un juicio más imparcial, asegurando el máximo de inmediación y la publicidad del proceso.

De lo expuesto surge por un lado que la oralidad importa para el procesado un reaseguro de sus derechos constitucionalmente garantizados, en cuanto implica reducir al máximo posible la eventual vulneración de los mismos por las partes intervinientes sujetas como están todas a los efectos de la transparencia que es característica esencial obvia del proceso hablado y sin restricciones de difusión pública.

Entonces el texto cuya modificación se propugna resulta por completo contradictorio en su intencionalidad con aquel que es el eje elemental de todo el proyecto.

No resulta explicable a primera vista —y tampoco parece pueda llegar a serlo en ninguna instancia de análisis—, que puedan existir casos concretos en que la buena administración de justicia con lo que ello importa en términos de garantías para los derechos del procesado y para los de la sociedad que los juzga, se vea favorecida mediante la aplicación del procedimiento escrito.

Precisamente, es la falta de publicidad y transparencia generada durante la vigencia del procedimiento escrito, lo que llevó a considerarlo una fuente de inseguridad jurídica en tanto su déficit implicaron la consumación de arbitrariedades que alternativamente podían perjudicar derechos propios del procesado en algunos casos, o los de la sociedad en otros lo que puede sintetizarse en dos imágenes extremas pero grá-

ficas cuales son las del inocente condenado y el culpable impune.

En ese orden de ideas considero que puede concluirse que los pasajes cuestionados del artículo 12, constituyen un intento de eludir la solución que con la nueva ley se busca implementar en lo que hace a los procesos actualmente en trámite.

Al respecto es como si para el trámite de algunas causas debiese esperarse racionalmente, que un sistema procesal anacrónico mayoritariamente considerado deficitario en cuanto al reaseguro de la vigencia de garantías constitucionales para derechos particulares y generales pudiese resultar en algunos casos, exactamente lo contrario, no es sólo contradictorio sino también sugestivo.

Cabe preguntarse por qué razón una persona procesada habría de optar en la alternativa entre un sistema con las características ya señaladas del oral y otro como el escrito, cuando es el primero el que mejor responde al efectivo ejercicio de sus derechos garantizados.

La señalada contradicción sólo resultaría aparente en el caso en que se admita que el anacronismo, el consecuente retardo en el diligenciamiento de medidas procesales, la prolongación y demora en el cierre de cada una de las etapas del proceso y en definitiva la supresión del debido impulso de la causa pudiese redundar en favor del procesado, constituyendo un *bill de impunidad* a cuenta de los derechos del resto de la sociedad.

Con respecto a la ley procesal penal aplicable Maier nos indica que "un proceso es una secuencia de actos singulares, determinados por la ley (por ejemplo acusación, apertura del juicio, actos varios que integran la preparación del debate, debate, sentencia, recurso, etcétera) es perfectamente posible que la ley nueva rija los actos que, en el procedimiento sean llevados a cabo con posterioridad a su vigencia y que la ley antigua continúe rigiendo los actos realizados según ella, con anterioridad a su derogación, y que, consecuentemente, cada uno de esos actos sea valorado conforme a la ley vigente a la época de su realización, incluso ésta sería la situación ideal".

Es amplio el consenso sobre la necesidad de asegurar publicidad y transparencia en la designación de los magistrados.

Podrá decirse que este proyecto de ley es ajeno a esa problemática, pero nos preguntamos cuándo habrá una mejor oportunidad para debatir el actual funcionamiento de la justicia y en particular de la credibilidad social de sus miembros y sus decisiones.

Más aún, si estamos creando cargos judiciales por qué no analizar lo que la sociedad reclama: una acción de este Congreso.

Cuando se observa que una gran cantidad de pedidos de juicio político se acumulan y se traban en la Cámara baja mientras se siguen aprobando secretamente los acuerdos para cubrir las vacantes judiciales en la Cámara alta, mientras en investigaciones y encuestas sociales se constata que el nivel de confianza que despierta el Poder Judicial es muy bajo entre los más variados sectores de la población, corresponde considerar reunidas las razones de oportunidad para que la idoneidad y probidad de los aspirantes a instrumentar la nueva ley deba ser considerada un requisito previo que satisfaga los presupuestos de confiabilidad que sólo

la publicidad del mecanismo de acuerdo puede cumplir.

La sospecha de que existe una combinación perjudicial para los intereses del país entre el gobierno y algunos magistrados, debe pautar la acción a seguir. Una auténtica lucha contra la corrupción requiere de un Poder Judicial independiente del Poder Ejecutivo, que lo haga respetable y respetado para los justiciables y garantice la celeridad y seguridad jurídica.

Para comenzar esa tarea debemos eliminar las sesiones secretas en las que se discuten los pliegos y adoptar un sistema de publicidad acorde al régimen republicano de gobierno. La naturaleza de las sesiones secretas también debe ser hecha pública: se trata de actos legislativos inconstitucionales.

Resulta un dato objetivo y a esta altura intolerable que el descrédito de algunos magistrados afecta a otros que se desempeñan honrosamente y que resultan permanentemente afectados.

Por ello proponemos, incorporar una norma que alcance a todos los jueces a designar y propiciamos un sistema de publicidad y oposición para lograr un Poder Judicial independiente y a la altura de las promesas democráticas con las cuales todavía se está en deuda.

Juan P. Cafiero.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA TOTAL DEL SEÑOR DIPUTADO SALVADOR

Señor presidente:

A través de los expedientes arriba mencionados se propicia la implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación a fin de viabilizar el juicio oral penal y las cuestiones conexas.

Los proyectos en consideración merecieron un tratamiento amplio, serio y pormenorizado por parte de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia de la Honorable Cámara, arribándose a un texto que da adecuada respuesta a la mayoría de las inquietudes planteadas y que constituye un instrumental idóneo para poner, de una vez por todas, en funcionamiento el procedimiento oral en el ámbito de la Justicia Penal.

De lo señalado precedentemente, se colige que no existe objeción alguna en punto a la técnica jurídica explicitada en el proyecto en análisis. Empero, la falta de adecuada respuesta a una cuestión esencial, íntimamente ligada al proyecto en trámite, impulsa al suscripto a sostener esta disidencia total.

Se trata de un tema de trascendencia institucional que no puede ser obviado, ni mucho menos considerado eufemísticamente, sino que debe ser abordado con la valentía y honestidad que la sociedad entera reclama.

A nadie escapa que, como consecuencia necesaria de la ejecución de esta proyectada ley de implementación, se deberán proveer los cargos de Jueces Nacionales para asumir los tribunales y juzgados que la norma crea.

Para ser absolutamente claros, se deberá designar cerca de doscientos cincuenta jueces nacionales.

Evidentemente que tal circunstancia, devivada como he señalado de la legislación en examen, constituye un acto sobre cuyas implicancias políticas e institucionales es preciso considerar.

Si hemos reclamado en diversas oportunidades por la independencia del Poder Judicial, no podemos perma-

necer impasibles ante esta situación que puede comprometer ese valor básico de la democracia.

Ha dicho Montesquieu: "Si el poder de juzgar estuviera unido con el legislativo la vida y la libertad de los súbditos verían expuestas a una acción arbitraria, porque el juez sería entonces el legislador. Reunido al ejecutivo, el juez podría proceder con toda la violencia de un opresor".

El espíritu que informa nuestra Constitución, en este aspecto coincidente con la Constitución Norteamericana fue el de crear un poder independiente y supremo dentro de la esfera de acción prevista por la Ley Fundamental.

Cuando se trata de efectivizar estos principios, es decir, cuando debemos pasar de las formulaciones genéricas al ámbito de las efectividades conducentes, muchas veces se adopta el camino de la elipsis o de escapar con discursos grandilocuentes al abordamiento puntual del tema.

Si queremos un Poder Judicial independiente no podemos admitir que los jueces nacionales a designarse por disposición del proyecto en análisis, lo sean a través de un procedimiento secreto que ha sido cuestionado por la inmensa mayoría de partidos integrantes del arco político nacional.

No admito que se pretenda escindir este tema de la consideración del Régimen de Implementación del Juicio Oral. La intención de efectuar una "prolija" divisoria de aguas no es otra cosa que hacernos los distraídos y mirar hacia el costado.

En función de lo señalado, y sin perjuicio de la eventual consideración del sistema de nombramiento de los jueces, se tornaba necesario emitir una clara señal de transparencia a la sociedad frente al inminente nombramiento de más de doscientos cincuenta jueces.

Se reclamaba, en tal sentido, la necesidad de un pronunciamiento unánime de esta Honorable Cámara, que se sancionase conjuntamente con el proyecto de Ley de Implementación, por el cual se explicitase la voluntad de este cuerpo de suprimir el tratamiento secreto de los pliegos para el nombramiento de jueces por parte del Honorable Senado de la Nación.

Si la doctrina nacional y extranjera, los partidos políticos en su mayoría y la opinión pública son coincidentes en el sentido que el sistema vigente de nombramiento de jueces presenta grandes inconvenientes, entre los que señalamos que contribuye en gran proporción a aumentar la preponderancia del Poder Ejecutivo, en cuanto lo faculta en forma exclusiva a presentar al Senado los candidatos a cargos judiciales y reduce el papel de este cuerpo a la aceptación o rechazo de los propuestos; no se explica, bajo ningún punto de vista que no se haya completado adecuadamente este arduo trabajo parlamentario con el reclamo firme de un tratamiento público de las nuevas designaciones.

Cuando se reclama transparencia no puede haber subterfugio.

La negativa a aceptar este planteo tiende a crear dudas serias en punto al criterio que se va a adoptar en el nombramiento de los nuevos jueces. Esas dudas sólo podían quedar despejadas, no sólo para el suscripto, sino fundamentalmente para el pueblo, con una resolución clara y concluyente de la Honorable Cámara.

peticionando que estos nuevos funcionarios sean designados por el Honorable Senado en sesiones públicas, levantando de una vez por todas un procedimiento secreto que sólo sirve para sembrar fundada desconfianza en el pueblo.

Frente a la actitud mayoritaria de implementar el procedimiento oral sin consultar este reclamo de honda raíz republicana, me veo ante el imperativo ético de rechazar *in totum* el proyecto habida cuenta que no voy a consentir nombramientos en estas condiciones.

En la actual coyuntura se encuentra cuestionada la independencia del Poder Judicial. Hemos advertido antes que ahora que la actitud del Poder Ejecutivo en la materia no se caracteriza, de manera alguna, por privilegiar las condiciones de integridad, idoneidad, independencia y pluralismo en la integración de las magistraturas judiciales. La integración de la Corte Suprema de Justicia constituye la prueba irrefutable de lo expresado. Frente a este dato sustancial, la pretensión de sancionar una ley de la que emergen nombramientos numerosos de magistrados sin garantizar imparcialidad y pulcritud en esas designaciones, constituye una nueva explicitación de un proceder ajeno a las prácticas republicanas.

No se trata, como hemos dicho, de designar una docena de jueces, nos hallamos ante el nombramiento simultáneo de una cantidad sin precedentes de magistrados y funcionarios, y la integración de órganos como el Tribunal de Casación Penal y los tribunales de instancia única que definirán por décadas el perfil del fuero penal. Es decir, que mediante estos nombramientos se estará delineando el funcionamiento de las garantías individuales de los ciudadanos por largo tiempo. Ello no puede ni debe hacerse mediante el actual sistema secreto, anacrónico y poco confiable.

Frente a un Poder Ejecutivo que ha explicitado en los hechos una actitud de menosprecio hacia la independencia del Poder Judicial, y con un sistema que funciona en un ámbito vedado a la opinión pública, es dable esperar resultados desastrosos para el funcionamiento de uno de los poderes de la democracia.

La Honorable Cámara de Diputados se encuentra facultada para dotar en forma rápida y efectiva de una metodología que asegure la publicidad y transparencia en el proceso de nombramiento de jueces nacionales. No se trata de una cuestión técnica intrincada, se trata de poner en movimiento la voluntad política firmemente encaminada a dotar de sentido republicano a un acto de tanta trascendencia como lo es la conformación del Poder Judicial.

Por las razones expuestas dejo fundada mi disidencia total.

Daniel M. Salvador.

ANTECEDENTES

1

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 27 de marzo de 1992.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto

de ley mediante el cual se propone la implementación del juicio oral y de las instituciones incorporadas en las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.

Las instituciones sociales son sistemas dinámicos con una organización que produce resultados determinados. Mediante el Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación con competencia penal, se han definido las condiciones básicas —reglas y estructura— a partir de las cuales podemos construir, en función de los recursos humanos y materiales asignados, un sistema judicial que produzca diversos resultados observables.

El diseño del nuevo sistema judicial en materia penal por fin se concreta mediante este proyecto, donde podrá observarse una constante correspondencia entre los recursos asignados con los resultados esperados (rendimiento) de la nueva organización. Esta compleja y delicada operación ha sido guiada por los lineamientos políticos criminales impulsados por el Ministerio de Justicia en la materia.

La implementación de aquel diseño tiene no menos de cuatro dimensiones. El plano jurídico se encuentra integrado —principalmente— por las leyes 23.984 y 24.050, el presente proyecto de ley, que será remitido juntamente con el proyecto de ley especial de suspensión del proceso a prueba, y el proyecto de penas alternativas a la pena privativa de la libertad. Dichos proyectos transformarán profundamente el funcionamiento de los sistemas judiciales en materia penal, especialmente porque les permitirán atender con su recurso más valioso (la oralidad) las causas más graves y complejas, sin impedir por ello que los demás casos que ingresen al sistema cuenten con una respuesta estatal especial.

Las otras dimensiones se relacionan con la infraestructura y asistencia tecnológica con que contarán los operadores del nuevo sistema, el perfil de los jueces, funcionarios y empleados que lo encarnarán, así como la capacitación de los mismos. Es importante destacarlo aquí pues la interrelación de cada una de estas fases de la implementación ha sido considerada con especial atención al momento de dimensionar la nueva estructura judicial.

Resulta fundamental destacar que la reforma de la administración de justicia involucra un significativo cambio cualitativo en las reglas de juzgamiento de un individuo en el orden nacional. Ello se complementa con una serie de nuevas instituciones que le permitirán al Poder Judicial de la Nación alcanzar un estado óptimo de funcionamiento. Pero además, las definiciones del presente proyecto garantizan que el nuevo sistema judicial en materia penal, una vez estabilizado —superada la etapa del arranque— pueda producir resultados de justicia como los que hoy presentan a la sociedad organizaciones judiciales con oralidad experimentada del interior del país, y a la vez, más allá del pleno respeto de las exigencias del debido proceso —cambio cualitativo— (Constitución Nacional, artículo 18), que el nuevo sistema judicial funcionará, en términos de rendimiento, mejor que el actual sistema escrito.

En función de dicho supuesto se analizó estadísticamente la realidad criminológica de Capital Federal, el funcionamiento real de los distintos tribunales que integran el Poder Judicial de dicha circunscripción, y el funcionamiento real del sistema oral de la provincia de Córdoba (1940) y de Mendoza (1950) teniendo siempre en consideración la cantidad de órganos judiciales existentes en cada distrito.

La fuente de información principal de dichos análisis fueron los informes oficiales de las oficinas de superintendencia de los tribunales respectivos, y cuando fue necesario, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección Nacional de Política Criminal, procedió directamente a realizar estudios especiales para confirmar la validez de aquéllos.

Sin perjuicio de poner a disposición de vuestra honorabilidad todos los estudios practicados, merecen presentarse aquí los siguientes:

1) Cantidad de causas ingresadas por fuero durante 1990 en Capital Federal (ver apéndice 1).

En dicho año el sistema escrito de dicha circunscripción se comportó como lo muestran los gráficos incorporados en el apéndice 2 y 3.

Como en el año 1991 se produjeron modificaciones en la competencia del fuero penal económico, respecto de él se presenta —en el apéndice 4— un análisis particularizado de las causas entradas y resoluciones dictadas en dicho período.

2) Cantidad de acusaciones por fiscal producidas en el sistema escrito del fuero en lo criminal y correccional de la Capital Federal durante 1990 (ver apéndice 5).

3) Cantidad de causas remitidas a juicio por tribunal en la ciudad de Mendoza durante 1990 (ver apéndice 6).

4) Cantidad de sentencias dictadas con debate por los tribunales orales de la ciudad de Córdoba y de Mendoza en el período 1985-1990 (ver apéndice 7).

Por otra parte, es importante destacar en esta oportunidad que la implementación de cada fuero de Capital Federal —discriminando por materia cuando resultó necesario— fue analizada en particular, a partir de las características criminológicas, de los recursos humanos y funcionamiento real actual, propios de cada uno de ellos.

En lo que respecta al interior del país, a fin de asignar racionalmente los recursos para la oralidad, se practicaron los siguientes análisis:

1) Cantidad de población por distrito judicial (ver apéndice 8).

2) Cantidad de causas entradas por distrito judicial (ver apéndice 9).

3) Cantidad de presos y condenados por distrito judicial (ver apéndice 10).

El procesamiento de dicha información ha permitido fundar la creación de tribunales orales teniendo en cuenta la entidad de cada distrito judicial. Sin embargo merece ser destacado que el paso dado mediante el presente proyecto a fin de instalar la oralidad en la justicia federal del interior del país, debe ser completado con el cabal cumplimiento del artículo 102 de la Constitución Nacional, que en esta etapa será satisfecho por la ejecución de lo previsto en el artículo 4º párrafo segundo y tercero de la ley 24.050, y por una reforma profunda del actual mapa judicial.

No es objetivo principal del presente proyecto asignar recursos donde hoy no existen ni incrementar los actualmente existentes. El máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el Poder Judicial de la Nación y una absoluta austeridad en la generación de las nuevas estructuras, han sido los criterios que han reinado en cada decisión. A lo largo de todo el proyecto se ha trabajado sobre la idea de construir estructuras probables y mínimas que permitan obtener los resultados buscados por la transformación de la justicia penal, para lo cual también se ha considerado la cantidad de empleados que tienen los órganos de los sistemas orales tomados como referencia.

Por otra parte, se ha escalonado el gasto de la implementación (artículo 87) en dos períodos presupuestarios (1992 y 1993).

No obstante lo dicho, y sin perjuicio de que la autoridad competente en una etapa posterior gestione incrementar los recursos asignados en este proyecto, podemos adelantar que a través del mismo se racionaliza e incrementa notablemente la estructura del Poder Judicial de la Nación. Además, como consecuencia del cambio cualitativo apuntado, que reduce sustancialmente la posibilidad de la delegación, se ha instrumentado una política generadora de cargos jurisdiccionalmente valiosos, es decir, de jueces, fiscales, defensores, secretarios y auxiliares especializados. En el apéndice 11 se pueden observar las proporciones actuales de la planta de personal que en Capital Federal contiene el sistema escrito, las correspondientes a los cargos nuevos previstos para dicho distrito por el proyecto de implementación y el estado final de la misma, una vez que se haya ejecutado.

Es fundamental distinguir conceptualmente la transición de las causas, de la integración de los órganos judiciales del nuevo sistema. En cuanto al primer punto, como el artículo 536 de la ley 23.984 opera de muy diversas maneras según el fuero y el desarrollo procesal de las causas tramitadas ante los mismos, y especialmente dada la complejidad de las situaciones involucradas, en el presente proyecto se regulan puntualmente (interpretación legislativa), inclusive la de las causas con sentencia condenatoria firme.

Por otra parte, la integración de los órganos del nuevo sistema judicial debió adaptarse a las características especiales de la transición de las causas en cada uno de los fueros y a los recursos humanos actualmente existentes.

A ello se sumó la necesidad de mantener órganos judiciales asignados con exclusividad para continuar aplicando, cuando corresponda, el Código actual de Procedimientos en Materia Penal (ley 2.372 y sus modificatorias).

La técnica legislativa utilizada en esta cuestión discrimina el tratamiento de los órganos (tribunales, fiscalías, defensorías, secretarías, etcétera) del correspondiente a los cargos que los integran y que se detallan específicamente en los anexos adjuntos (juez de cámara, fiscal de cámara, defensor oficial, secretario, empleados, etcétera), sin que lo normado a estos fines involucre la persona de quien hoy ocupa el cargo e integra el órgano en cuestión. Vale destacar aquí que el proyecto sólo se expide sobre los trasposos de personal en áreas neurálgicas del sistema judicial, donde la

implementación tendrá una elevada complejidad, dejando las demás situaciones para que las resuelva el órgano judicial competente, a quien se faculta por el artículo 86 a designar el personal necesario y a dictar las normas complementarias para posibilitar la implementación del nuevo sistema judicial.

La propuesta contenida en el proyecto se ensambla con un profundo reacomodamiento de los actuales empleados del Poder Judicial de la Nación en función de las necesidades del nuevo sistema judicial, y de allí que el artículo 88 establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación distribuirá el personal actualmente existente del modo que permita la instalación de todos los órganos creados.

A continuación se describirá con mayor especificidad cada una de las cuestiones reguladas en el proyecto de ley que se remite.

I. — Cámara Nacional de Casación Penal

Conforme lo establece la ley orgánica 24.050 la Cámara Nacional de Casación Penal estará integrada por diez (10) jueces y funcionará dividida en tres (3) salas compuestas, cada una de ellas, por tres (3) miembros. Dicho tribunal contará con un presidente, que tendrá principalmente a su cargo todas las funciones vinculadas a la superintendencia, y las que le asigne el reglamento respectivo. De allí que se ha previsto una estructura administrativa especial, a partir del secretario general, con cinco (5) asistentes para las diversas actividades que desde este órgano se desarrollarán.

Cada una de las salas mencionadas por el artículo 1º de la presente ley, poseerá una dotación reforzada de funcionarios y de personal. Cabe acotar que, a los efectos de determinar la composición de la Cámara Nacional de Casación Penal, se han tenido presentes los planteles que conforman a los tribunales superiores provinciales de competencia y funciones similares.

Dicho plantel, coadyuvará en las actividades específicamente jurisdiccionales de la Cámara Nacional de Casación Penal, consistentes en el tratamiento de los recursos de inconstitucionalidad, casación, revisión y el previsto por el artículo 445 bis del Código de Justicia Militar —ley 14.029—, según lo establece el artículo 23 de la ley 23.984, el dictado de sentencia plenaria en los supuestos previstos en los artículos 10 y 11 de la ley 24.050. Es por ello que se ha previsto para cada una de las salas un (1) secretario de Cámara y un (1) prosecretario de Cámara. En cuanto al personal administrativo y técnico, en virtud de que la competencia territorial del tribunal se extiende a toda la República, se ha estimado conveniente elevar su número a seis (6). Se ha considerado imprescindible que cada una de las salas pueda ser asistida por un auxiliar superior en la elaboración de los votos, y de allí que sumado al personal jerárquico recién mencionado también se ha previsto en el anexo I la creación de tres (3) cargos de dicha categoría. El restante personal administrativo y técnico estará integrado por cargos de diferentes categorías en función de la distribución interna de personal que realice la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En otro orden de ideas, se prevé la composición de dos (2) fiscalías que actuarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Estarán integradas por dos (2) fiscales, los cuales actuarán indistintamente ante las tres (3) salas previstas para dicho tribunal. Dichos cargos proceden de la transformación operada en virtud del artículo 3º del presente proyecto de ley. Cada fiscal será asistido por un secretario de Cámara. En el anexo I se prevé un cargo para esta función, mientras que los restantes (un cargo de secretario de Cámara y una planta administrativa compuesta por seis (6) empleados) proceden de una secretaría de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (artículo 3º) generada por el proyecto de creación de juzgados y fiscalías federales, que ya cuenta con sanción parlamentaria (ver Orden del Día Nº 1.842/91 Honorable Cámara de Diputados de la Nación). Sin perjuicio de ello, dicho plantel podrá ser complementado con los cargos que disponga la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte se ha considerado que no es necesaria la creación de una defensoría oficial para actuar con exclusividad ante dicho tribunal, dado que la asistencia letrada de los recursos que deberán resolverse en esta sede, proviene de quien actuó en el juicio tramitado en una instancia inferior. Por lo tanto será el defensor respectivo el que planteará y sostendrá las impugnaciones introducidas.

En el caso de los recursos procedentes del interior del país, la función del defensor oficial ante la Cámara Nacional de Casación Penal será desarrollada por el defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (artículo 18).

En el apéndice 12 se expone la composición del plantel de magistrados, funcionarios y empleados de la Cámara y de las fiscalías que actuarán ante ella y una planta administrativa básica que puede servir de guía para su futura estructuración.

Finalmente vale señalar que por el artículo 87 del proyecto, la Cámara Nacional de Casación Penal se financiará con imputación a la partida presupuestaria correspondiente a 1992.

II. — Fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal

Este fuero estará integrado por doce (12) juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal, cada uno de los cuales contará con dos (2) secretarías, doce (12) fiscalías que actuarán ante cada uno de ellos, una (1) Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal integrada por dos (2) salas de tres (3) miembros cada una, una (1) fiscalía que actuará ante ella, integrada por un (1) fiscal titular y tres (3) fiscales adjuntos, seis (6) tribunales orales en lo criminal federal, seis (6) fiscalías de cámara y una (1) defensoría oficial que actuarán exclusivamente en el juicio oral y sus proyecciones (ver apéndice 13).

Se prevé la integración de dichos cargos mediante la utilización de la actual planta de magistrados, funcionarios y empleados, de los cargos generados por el proyecto de creación de juzgados y fiscalías federales, sancionado ya por ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación (ver Orden del Día Nº 1.842/91 y apéndice 14), excluidos aquellos que pasan a integrar las fiscalías ante la Cámara de Casación, y por los cargos detallados en el anexo II del presente proyecto.

En lo que respecta a la constitución de los juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, el mecanismo de ampliación de los mismos está descrito en los artículos 1º al 7º del proyecto de creación de juzgados y fiscalías federales (ver Orden del Día 1.842/91), incluso en lo atinente a las fiscalías y a la Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes. El proyecto de implementación que en esta oportunidad se remite al Honorable Congreso de la Nación, supone la existencia de dichos órganos con la estructura que a partir de aquel proyecto —que cuenta con aprobación presupuestaria— se deduce.

De este modo quedarán constituidos doce (12) juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal con dos (2) secretarías cada uno, cada una de las cuales contará con seis (6) empleados administrativos, de diversa categoría, según lo defina el órgano judicial competente (ver apéndice 15).

En cuanto a las fiscalías de instrucción, cada una de ellas actuará ante cada juzgado federal establecido con las facultades que le otorga la ley 23.984 (artículos 196, 209 y siguientes).

El fiscal titular será asistido por un fiscal adjunto, un secretario judicial y una planta administrativa que puede estar constituida, atento los actuales recursos del fuero, por cuatro (4) empleados de la categoría que disponga el órgano judicial competente.

En cuanto a la defensoría de pobres, incapaces y ausentes, cabe mencionar que el artículo 11, párrafo segundo, del presente proyecto de ley asigna con exclusividad para actuar ante los juzgados y fiscalías nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, y cuando corresponda ante la Cámara de Apelaciones, a la creada por el proyecto ya sancionado por el Honorable Congreso de la Nación (ver Orden del Día Nº 1.842/91) en el artículo 4º. De este modo, el nuevo sistema judicial en materia penal federal contará con una defensoría que actuará ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (la actualmente existente) y ante la Cámara Nacional de Casación en las causas que llegarán a ésta procedentes de los tribunales federales del interior del país. Una defensoría que actuará ante el juicio oral y sus proyecciones (la creada por el artículo 11 del presente proyecto de ley) y una defensoría que actuará con exclusividad ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal (creada por el proyecto sancionado por el Honorable Congreso de la Nación, Orden del Día Nº 1.842/91, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.)

El artículo 8º del presente proyecto establece que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal conservará su actual denominación e integración (confróntese ley 24.050, artículo 20). Sin embargo, como sus funciones procesales sufrirán un cambio profundo a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la estructura administrativa que actualmente tiene, podría ser reasignada por el órgano judicial competente, conforme a las necesidades del fuero en el nuevo sistema; y de allí que en el anexo II del presente proyecto no se prevé la creación de ningún cargo administrativo.

Debe anotarse además que el proyecto sancionado por el Honorable Congreso de la Nación (ver Orden del Día Nº 1.842/91, Honorable Cámara de Diputados de la Nación) ha incrementado el plantel de funcionarios que en representación del ministerio público fiscal actuará ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Sin embargo, en atención a las necesidades del nuevo sistema penal, mediante el siguiente proyecto se ha previsto utilizar —de aquél— dos (2) cargos de fiscal de cámara para cubrir las dos (2) fiscalías creadas ante la Cámara Nacional de Casación Penal (ver artículo 3º). Y en lo que respecta a los cargos de fiscales adjuntos del fiscal de cámara se dispone que asistirán al único fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dado que por la carga de trabajo que dicho tribunal tendrá en los primeros años del nuevo sistema se considera como indispensable dicho refuerzo.

En lo que hace a los recursos humanos previstos para la implementación de la oralidad en este fuero, se establece, por el artículo 8º, la creación de seis (6) tribunales orales en lo criminal federal, los cuales se integrarán con los cargos detallados en el anexo II del presente proyecto. Los dieciocho (18) cargos de juez de cámara se distribuirán a razón de tres (3) por cada tribunal oral, mientras que se crea un cargo de fiscal de cámara por cada tribunal oral. Cada fiscal de cámara será asistido por una pequeña dotación administrativa asignada por el órgano judicial competente y que, conforme a los estudios realizados sobre los actuales recursos humanos disponibles en el fuero, pueden surgir de su propio seno. Como precedentemente se ha mencionado, se prevé un cargo de defensor oficial para actuar con exclusividad ante el juicio oral y sus proyecciones (verbigracia, el recurso de casación). Finalmente, merece destacarse que se prevé un cargo de secretario de cámara sólo para cada tribunal oral, ya que dicha asistencia calificada no es necesaria para el defensor oficial ni para el fiscal de cámara.

Una descripción de la estructura prevista para esta etapa procesal puede observarse en el apéndice 16.

En cuanto a la transición de las causas, el artículo 12 del presente proyecto que interpreta el artículo 536 de la ley 23.984, se deduce que en este fuero la cuestión no revestirá mayor complejidad en ninguna de sus instancias. Sin embargo, el último párrafo nos advierte sobre el inicial desequilibrio en la carga de trabajo que tendrán los actuales seis (6) juzgados federales respecto de los seis (6) creados por el proyecto de creación de juzgados y fiscalías federales (ver Orden del Día Nº 1.842/91, Honorable Cámara de Diputados de la Nación).

Dicha cuestión fue regulada por el artículo 12 del último proyecto citado (ver Orden del Día Nº 1.842/91) sin contemplar la entrada en vigencia de las leyes 23.984 y 24.050, situaciones que pretenden ser incorporadas mediante el último párrafo del artículo 12, por el cual se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o al órgano judicial competente a determinar el criterio de distribución equitativa de las causas entradas a partir del 5 de septiembre de 1992.

Resta señalar que el presente proyecto de ley en su artículo 87 prevé la implementación de dos (2) tribunales orales federales en lo criminal para la Capital Federal, inclusive, sus respectivas fiscalías de Cámara, con imputación a la partida presupuestaria correspondiente a 1992. La instalación y funcionamiento de los demás órganos se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente a 1993.

III — Interior

La implementación de la ley 23.984 en el interior del país se regula en los artículos 14 a 20 del presente proyecto.

Los juzgados federales de primera instancia con competencia criminal y correccional mantendrán su actual integración. Es cierto que ya no desarrollarán el plenario, pero se ha tenido especial consideración de lo establecido por el artículo 33, inciso 2º del nuevo Código Procesal Penal en virtud del cual deben juzgar en instancia única los delitos de su competencia que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años.

Conviene destacar que por el presente proyecto no se crea ningún juzgado federal en los distritos judiciales del interior del país, ni se modifica el mapa judicial actualmente vigente. De tal modo ello es así que por el artículo 85 se establece que la implementación de la ley 23.984 y 24.050, en los distritos judiciales de Corrientes (creado por ley 23.650) y de Salta (creado por ley 23.867), queda condicionada a la instalación de los órganos previstos por dichas leyes.

Teniendo ello presente, a la fecha de remisión del presente proyecto de ley, el interior del país en materia federal se encuentra distribuido en trece (13) regiones judiciales, a saber: San Martín, Mendoza, Rosario, La Plata, Córdoba, Bahía Blanca, Resistencia, Paraná, Comodoro Rivadavia, General Roca, Posadas, Mar del Plata y Tucumán.

Se mantiene la actual integración de las cámaras federales de apelaciones correspondientes a los distritos de San Martín, Resistencia, Paraná, Comodoro Rivadavia, General Roca, Posadas, Mar del Plata y Tucumán. Mientras que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, no obstante las previsiones de la ley 23.870, quedará constituida por dos (2) salas de tres (3) miembros cada una. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza conservarán sólo tres (3) miembros. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, actualmente constituida por cuatro (4) salas de dos (2) miembros cada una, quedará integrada por cinco (5) vocales.

En todos estos casos, la disminución en la cantidad de integrantes de dichas cámaras se debe a la transformación de los cargos respectivos en cargos de un tribunal oral (artículos 15 y 16), siendo ello aconsejable en función de la menor carga de trabajo que en materia penal el nuevo sistema arrojará sobre dichos tribunales.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, las fiscalías de Cámara correspondientes a cada distrito judicial del interior del país conservan su integración.

En cuanto a la implementación de la oralidad en lo criminal federal del interior del país, las previsiones del presente proyecto definen la instalación de tres (3) tribunales orales para el distrito judicial de San Martín, dos (2) para los distritos correspondientes a Mendoza, Córdoba, La Plata y Rosario, mientras que para los restantes distritos judiciales del interior se prevé la constitución de un solo tribunal oral.

La ley 24.050 establece que cada tribunal oral estará integrado por tres (3) miembros, de allí que el anexo III prevé cuarenta y nueve (49) cargos de juez de cámara, los cuales sumados a los catorce (14) cargos procedentes de las cámaras federales de apelación que se transforman en cargos de los tribunales orales respectivos, (tres (3) de Córdoba, La Plata, Mendoza y Rosario, dos (2) de Bahía Blanca), permiten la integración de los veintinueve (21) tribunales orales previstos en esta etapa de la reforma judicial para el interior del país.

Ante cada tribunal oral actuará un fiscal con exclusividad y de allí que se crean veintinueve (21) cargos para dicha función.

Se establecen dieciséis (16) cargos nuevos de secretario de cámara, a razón de uno (1) por cada tribunal oral, mientras que los restantes cargos para dicha función proceden de las actuales salas de las cámaras federales de apelaciones de Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca que se transforman por el artículo 15 del presente proyecto.

Merece destacarse que atento la dedicación que la oralidad exige se ha considerado necesario crear un (1) cargo de defensor oficial por cada distrito judicial del interior del país, inclusive Salta y Corrientes, para que actúen ante los tribunales orales en lo criminal que en cada uno de ellos se establecen. Mientras que el defensor oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuará ante la Cámara Nacional de Casación Penal en las causas que llegaren a ésta provenientes de los tribunales del interior del país (artículo 18).

Los cargos restantes previstos en el anexo III del presente proyecto se asignarán —en cantidad y categoría— conforme lo indica el apéndice 17 a la estructura administrativa de cada tribunal oral (nueve [9] cargos) y de cada fiscalía de cámara (dos [2] cargos) integrados exclusivamente por este proyecto de ley.

Finalmente merece ser destacado el texto del último párrafo del artículo 16, cuando expresa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hará saber al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de la creación de un número mayor de órganos jurisdiccionales federales y el lugar de funcionamiento de los mismos. Con esto se ha querido señalar, que el paso dado en esta oportunidad, garantizando oralidad en todo el país a partir de este año, merece ser complementario con el cumplimiento cabal del artículo 102 de la Constitución Nacional, en virtud del cual debe existir un tribunal oral en lo criminal federal para cada provincia de nuestra República, así como con una reformulación profunda del actual mapa judicial y de los criterios que se utilizan para ajustar la asignación de nuevos recursos en función de la necesidad de justicia.

Como se desprende del artículo 19, en lo que se refiere a las causas en trámite, la entrada en vigencia

de la ley 23.984 no apareja mayores complicaciones, ya que las causas ya iniciadas —en principio— quedarán radicadas ante el órgano judicial que actualmente las desarrolla, y se les aplicará el procedimiento que corresponda según el artículo 536 de la mencionada ley.

Finalmente es útil destacar que por el artículo 87 del presente proyecto, se prevé constituir un tribunal oral federal en lo criminal, con las fiscalías correspondientes, desde el 5 de septiembre del corriente año, por cada distrito judicial del interior del país.

La instalación y funcionamiento de los demás órganos se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente a 1993.

IV. — *Fuero en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal*

El fuero ordinario en lo criminal de la Capital Federal estará integrado por treinta y nueve (39) juzgados de instrucción, cada uno de los cuales contará con una secretaria, treinta y nueve (39) fiscalías que tendrán las facultades que les acuerda la ley 23.984 (artículos 196, 209 y siguientes), dieciséis (16) defensorías oficiales para la etapa instructoria, una Cámara Nacional de Apelaciones integrada por tres (3) salas, la cual a su vez cumplirá la misma función respecto de los juzgados de menores y en lo correccional, treinta (30) tribunales orales, treinta (30) fiscalías de cámara, y diez (10) defensorías oficiales que actuarán exclusivamente en el juicio oral y sus proyecciones (ver apéndice 18).

Se prevé la integración de dichos cargos mediante la utilización de la actual planta de magistrados, funcionarios y empleados (ver apéndice 19) y por los cargos detallados en el anexo IV del presente proyecto.

Por el artículo 24 se prevé ampliar a treinta y nueve (39) juzgados los actuales veintinueve (29) con competencia en lo criminal de instrucción, mediante la transformación de diez (10) juzgados de sentencia que determinará la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente. Debe advertirse que la integración de estos diez (10) juzgados sólo se producirá luego de que resuelvan definitivamente todas las causas que actualmente se tramitan ante todos los juzgados nacionales en lo criminal de sentencia (ver artículo 33).

Se propicia la asignación de una fiscalía por cada juzgado de instrucción, las cuales se integrarán a partir de las veintiséis (26) actualmente existentes en el fuero (artículo 28) más las trece (13) fiscalías que se crean por el artículo 26. En cada una de ellas el fiscal titular será asistido por un secretario y la planta administrativa que le asigne el órgano judicial competente. En el anexo IV sólo se prevé para estos órganos la creación de trece (13) cargos de fiscal de primera instancia y treinta y cinco (35) cargos de secretario de primera instancia, pues los restantes cargos necesarios procederán de los recursos con que hoy cuenta el Poder Judicial de la Nación (ver artículos 24, 27, anexo IV y apéndice 19).

En cuanto a las defensorías de pobres, incapaces y ausentes se asignan las actuales dieciséis (16) del fuero para actuar con exclusividad ante los juzgados y fis-

calías de instrucción con competencia en lo criminal (artículo 29), y desde luego, ante la Cámara Nacional de Apelaciones cuando corresponda.

El artículo 21 del presente proyecto establece que cuatro (4) salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal se transformarán directamente —incluyendo su personal administrativo— en tribunales orales en lo criminal, quedando dicho órgano constituido como lo prescribe el artículo 19 de la ley 24.050, a saber, por tres (3) salas de tres (3) miembros. Cada una de ellas será asistida por una de las actuales secretarías de sala de la cámara, básicamente compuestas por los cargos enunciados en el apéndice 18.

Mediante el artículo 22 se dispone que las causas en trámite ante las salas que se transforman en tribunales orales por el artículo 21 se distribuirán en forma equitativa entre las salas que permanecerán en la cámara citada, siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el órgano judicial competente, la encargada de determinar el modo en que se llevará a cabo.

Como se puede apreciar del apéndice 19 la actual Cámara Nacional de Apelaciones cuenta con numerosos recursos humanos, los cuales, atento a la reducción de su integración, podrán ser asignados por el órgano judicial competente conforme lo indiquen las necesidades del fuero en el nuevo sistema.

No obstante lo señalado precedentemente, se ha considerado conveniente para la celeridad del trámite de las impugnaciones en dicha etapa procesal, mantener la actual estructura del ministerio público ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Merece especial análisis lo previsto por el presente proyecto de ley con relación a los actuales juzgados nacionales en lo criminal de sentencia. Por el artículo 24 se transforman diez (10) de ellos en juzgados de instrucción, regla cuya operatividad se condiciona, mediante el artículo 33, hasta tanto concluyan definitivamente con todas las causas radicadas ante todos los juzgados de sentencia al momento de entrar en vigencia la ley 23.984 en las que se haya contestado el traslado de la defensa.

Excluidos los que se trasladan al fuero de menores, los restantes juzgados de sentencia se suprimen (artículo 31).

En lo atinente a la cantidad de recursos humanos previstos para la implementación de la oralidad en lo criminal de este fuero, se establece por el artículo 35 la instalación de treinta (30) tribunales orales, de los cuales sólo se crearán veintiséis (26). Por el anexo IV del presente proyecto sólo se generan sesenta y siete (67) vocalías de juez de cámara, pues las restantes procederán de los diez (10) cargos de juez de sentencia —cuyos juzgados fueron suprimidos— transformados en cargos de juez de cámara por el artículo 39, y de los trece (13) cargos de vocal de cámara correspondientes a las cuatro (4) salas de la Cámara Nacional de Apelaciones transferidas para el juicio oral, más el cargo del presidente de dicho tribunal (artículo 39).

Cada tribunal oral contará con la asistencia de un secretario de cámara y de los empleados administrativos que establezca el órgano judicial competente, conforme a los recursos existentes en el fuero y las necesidades

administrativas de la función procesal que dichos órganos deberán desenvolver a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984. Como las cuatro (4) salas de la Cámara Nacional de Apelaciones se trasladan con toda la estructura que actualmente les asiste, en el anexo IV sólo se prevé la creación de veintiséis (26) cargos de secretario de cámara.

Ante cada tribunal oral actuará una fiscalía de cámara, cuyo titular será asistido por un prosecretario administrativo y un auxiliar superior.

Por el artículo 38 se establecen diez (10) defensorías oficiales para actuar con exclusividad ante los treinta (30) tribunales orales creados por el presente proyecto de ley, las cuales se integrarán con los diez (10) cargos de defensor oficial de segunda instancia previstos por el anexo IV.

Resta señalar que en dicho anexo se crean treinta (30) cargos de auxiliar principal de séptima, a razón de uno por cada tribunal oral constituido, pero que podrán ser asignados por el órgano judicial competente, atendiendo las sugerencias del administrador judicial (ley 24.050, artículo 41), para atender las necesidades de las fiscalías y defensorías actuantes ante los mismos.

Una descripción final de la estructura prevista para esta etapa procesal podrá ser consultada en el apéndice 20.

Resta señalar que el presente proyecto de ley en su artículo 87 prevé la implementación de diez (10) tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal, inclusive sus respectivas fiscalías de cámara, con imputación a la partida presupuestaria correspondiente a 1992.

La instalación y funcionamiento de los demás órganos se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente a 1993.

A partir del artículo 41 del proyecto se hace alusión a los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal. Vale destacar en esta ocasión que la ley 23.984 (artículo 27) adjudica al juez correccional —principalmente— la facultad de investigar y juzgar en instancia única los delitos de su competencia. Además, hasta tanto entre en vigencia el nuevo régimen contravencional impulsado por el Ministerio de Justicia, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el día 5 de diciembre de 1991, entenderá en grado de apelación en las resoluciones sobre faltas o contravenciones policiales y de queja por denegación de este recurso.

La propuesta fundamental del mismo radica en un significativo aumento de órganos jurisdiccionales en dicha materia. Mediante el artículo 41 se prevé integrar el fuero correccional con diez (10) juzgados, cada uno de los cuales contará con dos (2) secretarías (ver apéndice 21).

Ello es posible con un reducido costo, dada la actual estructura de los juzgados correccionales, que cuentan con cuatro (4) secretarías cada uno, dos (2) de las cuales se trasladan en virtud del artículo 42 con su dotación completa, a los cinco (5) nuevos tribunales unipersonales (ver anexo V).

En cuanto a las causas en trámite, los actuales juzgados correccionales remitirán, para su tramitación defi-

nitiva, a los cinco (5) tribunales creados por el presente proyecto de ley, las correspondientes a las secretarías trasladadas a ellos (artículo 45).

Por el artículo 43 se constituyen diez (10) fiscalías que actuarán exclusivamente ante cada juzgado correccional.

Cada una de ellas se integrará por un fiscal de primera instancia, un secretario de primera instancia (ver anexo V) y los empleados administrativos que disponga a esos fines el órgano judicial competente, procedente de la actual planta de personal del Poder Judicial de la Nación.

Resta considerar la creación de una defensoría de pobres, incapaces y ausentes para actuar con exclusividad ante los juzgados y fiscalías correccionales, y cuando corresponda, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal (ver artículo 44).

Finalmente corresponde destacar que el presente proyecto de ley en su artículo 87 prevé el incremento de órganos precedentemente descritos a partir del año 1993.

Si embargo, ello no implica la postergación de la oralidad en este fuero, pues el órgano judicial competente deberá disponer todos los medios necesarios para que los actuales juzgados nacionales en lo correccional, a partir del 5 de septiembre del corriente año, puedan juzgar como lo establece la ley 23.984.

El proyecto de ley que se somete a consideración del Honorable Congreso de la Nación, da un fundamental paso hacia la especialización del fuero de menores. Se prevé la constitución de siete (7) juzgados de menores, los cuales tendrán la competencia que les asigna el artículo 29 de la ley 23.984, siete (7) fiscalías y una (1) defensoría oficial que actuarán ante cada uno de ellos, tres (3) tribunales orales de menores, tres (3) fiscalías de cámara, una defensoría de pobres, incapaces y ausentes que actuará ante los tribunales orales de menores, y dos (2) asesorías de menores que cumplirán con la función que les asignan los artículos 413 y 411 de la ley 23.984. También se constituye la superintendencia de asistencia social tutelar y un equipo interdisciplinario para los tribunales orales de menores (ver apéndice 22).

La integración de dichos cargos sólo es posible mediante la utilización de la actual planta de magistrados, funcionarios y empleados, así como de los previstos en el anexo VI del presente proyecto de ley.

En lo que respecta a los juzgados de menores, cuya competencia fija el artículo 29 de la ley 23.984, se establece que se integrarán con los juzgados de sentencia letras M y R, los juzgados de instrucción N° 1, 9 y 16, y los actuales juzgados correccionales letras L y O, los cuales se trasladan con sus respectivas secretarías (artículo 48), en la forma que lo disponga el órgano judicial competente (artículo 47).

De este modo cada juzgado de menores tendrá tres (3) secretarías, una de instrucción, otra encargada de organizar el juicio oral en el caso de delitos y contravenciones, cometidos por menores que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho y que estén reprimidos con pena no privativa de

la libertad o pena privativa de la libertad que no exceda de tres (3) años, y la restante secretaría, con exclusivas funciones tutelares (ley 24.050, artículo 24).

Por el artículo 49 del presente proyecto de ley se crea una (1) fiscalía por cada juzgado de menores, las cuales estarán integradas por el fiscal titular, un (1) secretario de primera instancia, un (1) prosecretario administrativo y los cargos que disponga el órgano judicial competente. Los mismos podrán ser cubiertos con las previsiones del anexo VI y por cargos actualmente existentes en la planta de personal del Poder Judicial de la Nación.

También se incorpora una defensoría oficial que actuará con exclusividad ante los juzgados y fiscalías precedentemente mencionados, y en su caso, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El defensor oficial será asistido por un prosecretario administrativo (anexo VI).

En cuanto a las causas en trámite, el artículo 58 establece que los juzgados de instrucción, de sentencia y en lo correccional que se transforman en juzgados nacionales de menores, continuarán con la sustanciación de las mismas. Y como ello puede generar un desequilibrio en la carga de trabajo a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, dado que la cantidad de causas pendientes en dichos tribunales es muy dispar, mediante el segundo párrafo del mencionado artículo se dispone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente fijará un criterio equitativo de distribución del trabajo que compense las diferencias apuntadas, a partir de las causas ingresadas desde el 5 de septiembre del corriente año.

En lo que hace a los recursos previstos para la oralidad en los casos de competencia del tribunal oral de menores (ley 23.984, artículo 28), el presente proyecto de ley establece por el artículo 51 que se crean tres (3) tribunales orales, que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno. Con esa regla sin excepción en la estructura judicial del nuevo sistema penal, cada tribunal oral contará con una secretaria. Dichos órganos serán asistidos por una estructura administrativa integrada por los cargos mencionados en el anexo VI del presente proyecto.

Así también se prevé la creación de una fiscalía de cámara por cada tribunal oral, cuyo fiscal titular será auxiliado por los empleados que disponga el órgano judicial competente en función de los recursos humanos existentes en el Poder Judicial de la Nación.

Merece destacarse la creación de una defensoría oficial (artículo 54) cuya actuación será exclusiva ante los tribunales orales menores, y cuando corresponda, ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Así como también la de dos (2) asesorías de menores (artículo 55) a fin de cumplimentar cabalmente con las exigencias de los artículos 413, inciso 3, y 411 de la ley 23.984. Los titulares de dichos órganos serán asistidos por los empleados que disponga el órgano judicial competente en función de los recursos humanos existentes en el Poder Judicial de la Nación.

El artículo 56 crea la superintendencia de servicio social tutelar. Este órgano estará dirigido por un (1) director e integrado por catorce (14) asistentes sociales

que tendrán la jerarquía de secretario de primera instancia, quienes tendrán la delicada misión de controlar la libertad vigilada de los menores dispuestos definitivamente, en labor coordinada con los padres, tutores, curadores, guardadores, educadores y empleadores, dentro del marco fijado por las leyes especiales y conforme lo indiquen las instrucciones del juez competente (ley 24.050, artículo 42). Dichos funcionarios serán asistidos por empleados que cubrirán los cargos administrativos previstos en el anexo VI.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 14 de la ley 24.050 los tribunales orales de menores contarán con el asesoramiento del equipo interdisciplinario creado en el artículo 57 del presente proyecto de ley, y que inicialmente se integrará con un (1) médico, un (1) psicólogo y dos (2) asistentes sociales, todos especializados en problemas infanto-juveniles (ver anexo VI).

Finalmente resta señalar que el presente proyecto de ley en su artículo 87 prevé la implementación de dos (2) tribunales orales de menores para la Capital Federal, inclusive sus respectivas fiscalías de cámara y una (1) asesoría de menores, con imputación a la partida presupuestaria correspondiente a 1992. La instalación y funcionamiento de los demás órganos se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente a 1993.

V. — *Fuero Penal Económico de la Capital Federal*

Este fuero estará integrado por ocho (8) juzgados nacionales en lo penal económico de instrucción, que tendrán a su cargo la investigación de los delitos que les corresponden por su actual competencia material (según lo establece el artículo 25 de la ley 24.050), los cuales se integrarán con dos (2) secretarías. Ante cada uno de ellos actuarán ocho (8) fiscalías de instrucción.

Se crean cuatro (4) tribunales orales en lo penal económico que contarán con tres (3) miembros cada uno, ante los cuales actuarán una fiscalía por tribunal y una sola defensoría de pobres, incapaces y ausentes para atender exclusivamente el juicio oral y sus proyecciones (ver apéndice 23). Las dos (2) defensorías de pobres, incapaces y ausentes actuales continuarán actuando ante los juzgados nacionales en lo penal económico de instrucción mencionados.

La integración de los cargos será implementada de la siguiente forma: los juzgados nacionales en lo penal económico de instrucción quedarán conformados con la actual planta de magistrados, funcionarios y empleados. Se crean cuatro (4) fiscalías ante dichos juzgados y ocho (8) secretarías que asistirán a cada fiscal de instrucción (artículo 61 y anexo VII). Como ya se ha dicho, las defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los citados juzgados y fiscalías continuarán con su actual integración y función (artículo 62).

En lo que concierne a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, según el artículo 63 del presente, conservará su actual denominación y se integrará con dos (2) salas de tres (3) miembros cada una. Una de ellas se conformará con la dotación actual de magistrados, funcionarios y empleados; la restante se implementará cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación comunique al Poder Ejecutivo sobre la nece-

sidad de creación de los cargos para integrarla. Cuatro (4) cargos de vocal de la citada cámara se transformarán en cargos de juez de cámara ante los tribunales orales en lo penal económico, juntamente con dos (2) cargos de secretario de sala que también se transfieren a dichos tribunales (artículo 63). De los doce (12) cargos de juez de cámara, necesarios para integrar los cuatro (4) tribunales orales, cuatro (4) provienen de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero, y los ocho (8) restantes se crean por el presente proyecto de ley (artículo 65 y anexo VII).

Cada tribuna oral contará con una (1) secretaria para la asistencia administrativa de la función jurisdiccional que desarrollarán, las cuales se integrarán con las dos (2) secretarías procedentes de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que se trasladan, los cargos de secretarios y prosecretarios previstos en el anexo VIII, y los que disponga el órgano judicial competente, en consideración de la actual planta de personal.

VI. — Juzgados nacionales de ejecución penal

El artículo 71 del presente proyecto de ley establece la creación de tres (3) juzgados nacionales de ejecución penal para el distrito judicial correspondiente a Capital Federal.

Es por ello que en el anexo VIII se crean tres (3) cargos de jueces de primera instancia, los cuales serán asistidos —respectivamente— por tres (3) secretarías con su dotación completa de personal procedentes de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia (artículos 72 y 32). Además en dicho anexo se prevé la integración del equipo interdisciplinario al que alude el artículo 29 párrafo segundo de la ley 24.050, mediante la incorporación de dos (2) médicos, un (1) psiquiatra, un (1) psicólogo y dos (2) asistentes sociales.

El artículo 73 establece, en cuanto a las causas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.984 se encuentren con sentencia firme, en las que hubiere condena sin ejecutar totalmente, que cada juzgado nacional de Capital Federal las remitirá a los juzgados nacionales de ejecución penal de dicho distrito, debiendo el órgano judicial competente determinar la modalidad de distribución de las mismas. Como consecuencia de ello se establece en el artículo 87 que los tres (3) juzgados nacionales de ejecución penal se implementarán con imputación a la partida presupuestaria correspondiente al corriente año.

Finalmente resta señalar que el órgano judicial competente determinará el modo de cumplimiento de lo establecido por el último párrafo del artículo 29 de la ley 24.050, utilizando para ello los órganos del ministerio público del nuevo sistema judicial, sin necesidad de crear cargos especiales para el desenvolvimiento de las funciones asignadas por el Código Procesal Penal de la Nación al fiscal y al defensor oficial que deben actuar ante el juez de ejecución.

En el interior del país, las funciones del juez de ejecución de la pena, serán desempeñadas por un juez del tribunal oral que dictó la condena respectiva. Según el caso y el modo en que lo disponga el órgano judicial competente, asumirá dicho rol procesal uno de

los vocales del tribunal de juicio en lo criminal o el juez federal con competencia penal encargado de juzgar en instancia única la materia correccional (artículo 74 y ley 23.984, artículos 32 y 33). En consideración de ello, y teniendo especial atención de la realidad del mapa judicial del interior del país así como de los lugares donde se encuentran las dependencias del Servicio Penitenciario Federal, por el artículo 76 del presente proyecto de ley, se prevé la creación de diecisiete (17) cargos de secretario de primera instancia (ver anexo VIII) para que se implemente la oficina establecida por el párrafo tercero del artículo 29 de la ley 24.050, a fin de que dicho funcionario represente —en cada uno de los establecimientos penitenciarios federales actualmente existentes— al tribunal que ejerce las funciones del juez de ejecución en el interior del país. Merece aquí recordarse que el artículo 87 impone la instalación de dicha oficina con imputación a la partida presupuestaria correspondiente a 1993. Mientras que en los casos de suspensión del proceso a prueba, el control de las reglas de observación establecidas será realizado por el juez que las impuso (confróntese proyecto de suspensión del proceso a prueba y de reformas del Código Procesal Penal, Ministerio de Justicia, 1992, y ley 23.984, artículo 493).

En esta cuestión, será el órgano judicial competente el que tendrá a su cargo la organización de una oficina encargada de asistir a quien asume el rol de juez de ejecución (ley 24.050, artículo 29, párrafo cuarto).

En cuanto a las causas criminales con sentencia condenatoria firme, sin ejecutar totalmente al momento de entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 75 indica que los juzgados federales del interior del país las remitirán al miembro del tribunal oral que en ese caso cumpla con la función establecida por el artículo 493 de la ley 23.984.

VII. — Demás organismos auxiliares

Las previsiones realizadas en el presente proyecto de ley con respecto a la policía judicial (ley 23.984, artículo 183 y siguientes, y ley 24.050, artículo 33 y siguientes) se encuentran determinadas a partir del artículo 78. Debe advertirse que aquí sólo se da el paso inicial en esta trascendente institución. Se la integra con cargos ya existentes en el actual sistema judicial, salvo el del director (artículo 79) y el del secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales (ver anexo IX).

Finalmente resta considerar que a partir del artículo 80 se crean los cargos de director de la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a la Víctima y al Testigo, el cual será asistido inicialmente por dos (2) asistentes sociales y un psicólogo.

A continuación se prevé la creación de los cargos correspondientes al administrador judicial, al director del Archivo General y al director de Informática Jurídica (ver anexo X).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

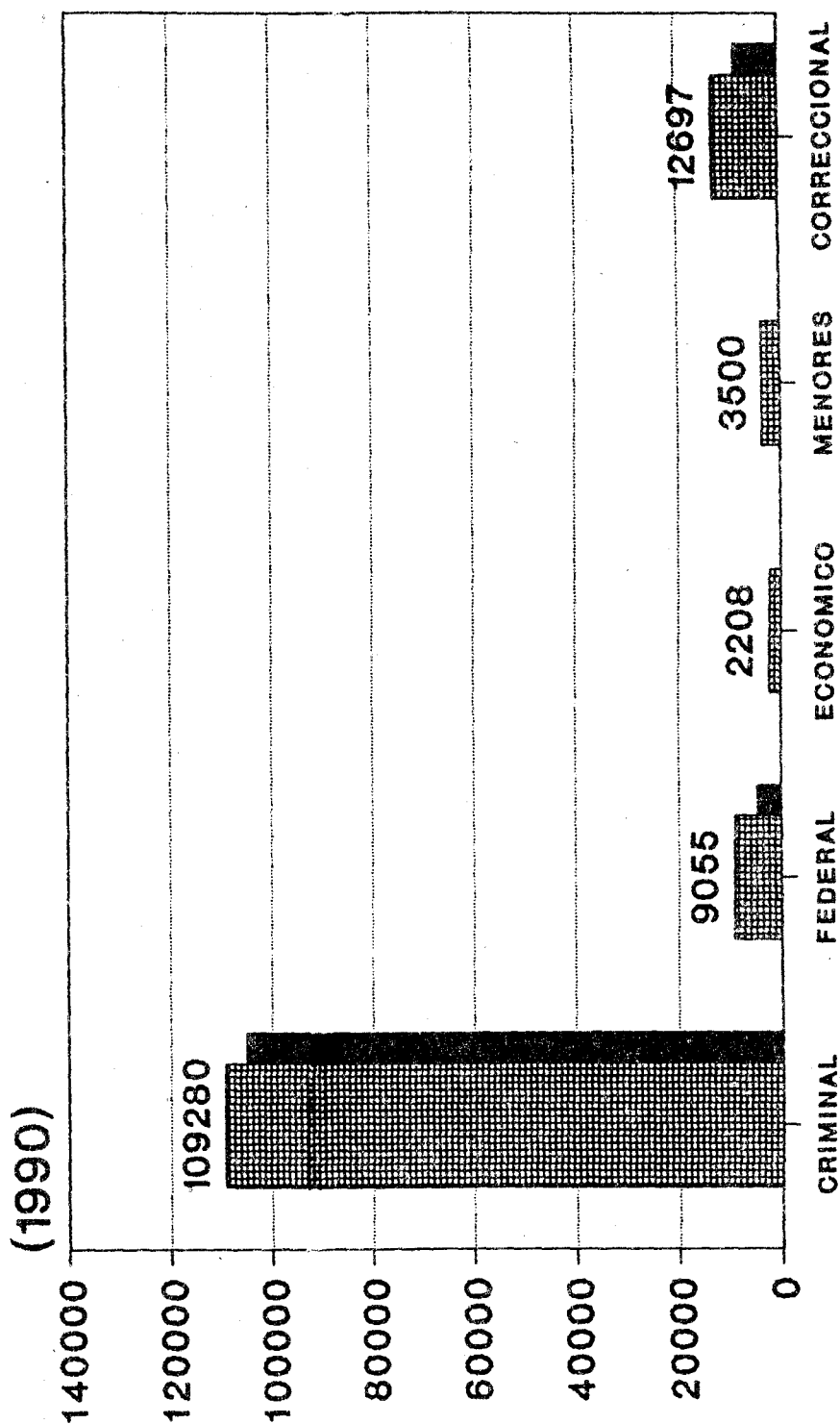
Mensaje 558

CARLOS S. MENEM.

León C. Arslanán. — Domingo F. Cavallo.

APENDICE Nro. 1

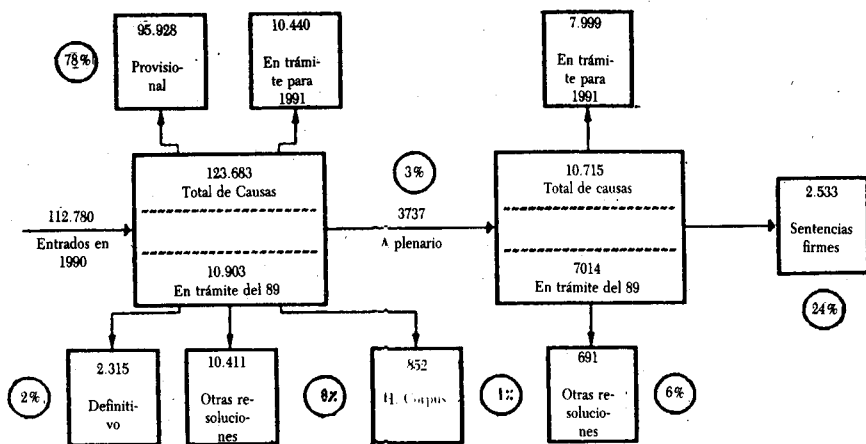
Causas Entradas Capital Federal



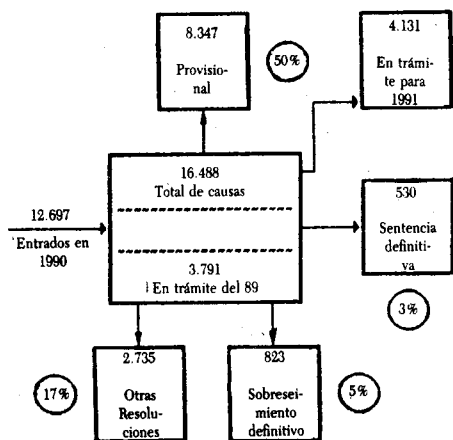
APENDICE 2

CAPITAL FEDERAL (1990)

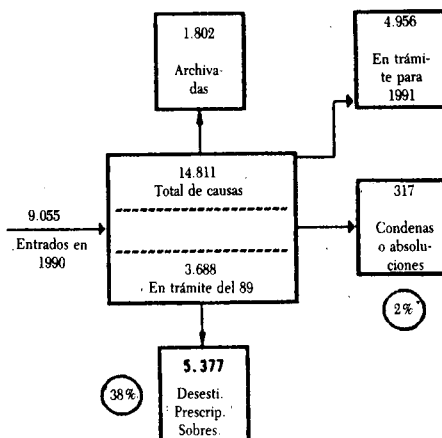
ORDINARIO (incluye menores)



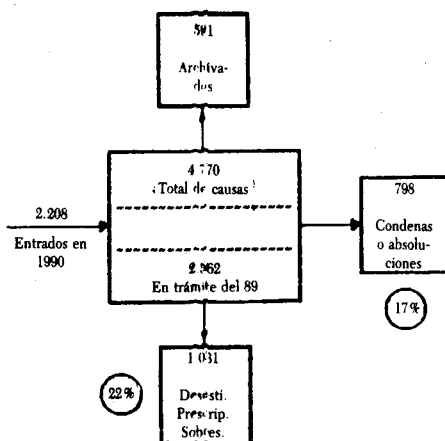
CORRECCIONAL



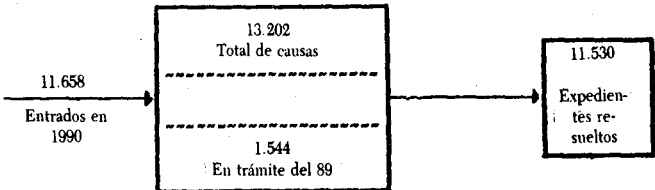
FEDERAL



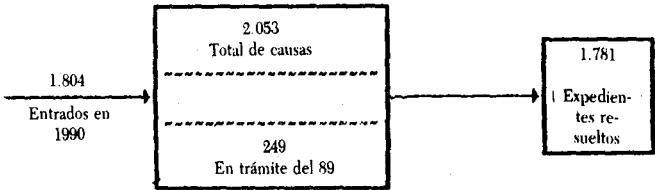
PENAL ECONOMICO



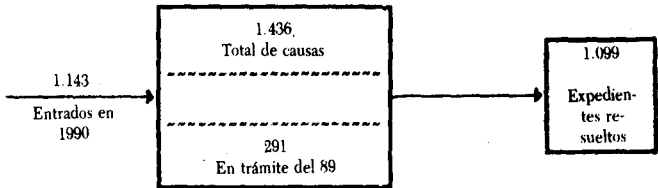
APENDICE 3
CAPITAL FEDERAL (1990)
CAMARAS DE APELACIONES
ORDINARIO



FEDERAL



PENAL ECONOMICO



APENDICE 4

TRIBUNALES NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO CAPITAL FEDERAL (1991)

TRIBUNAL	ENTRADAS						SALIDAS	
	EXISTEN AL 31/12/90	CAUSAS ENTRADA	CONDENAS Y ABSOLUCIONE	PRESCRIPCION DESESTIMACIO	PARALIZADO	APELADO	TOTAL	SALDOS AL 31/12/91
1	324	465	89	192	111	15	407	382
2	130	357	192	81	40	16	329	158
3	142	383	127	99	73	52	299	226
4	358	456	128	234	44	71	406	408
5	403	415	108	132	172	146	558	260
6	320	456	156	100	134	23	413	363
7	367	494	150	130	116	25	421	440
8	424	191	118	74	61	17	270	345
TOTAL	2,468	3,217	1,068	1,042	751	365	3,103	2,582

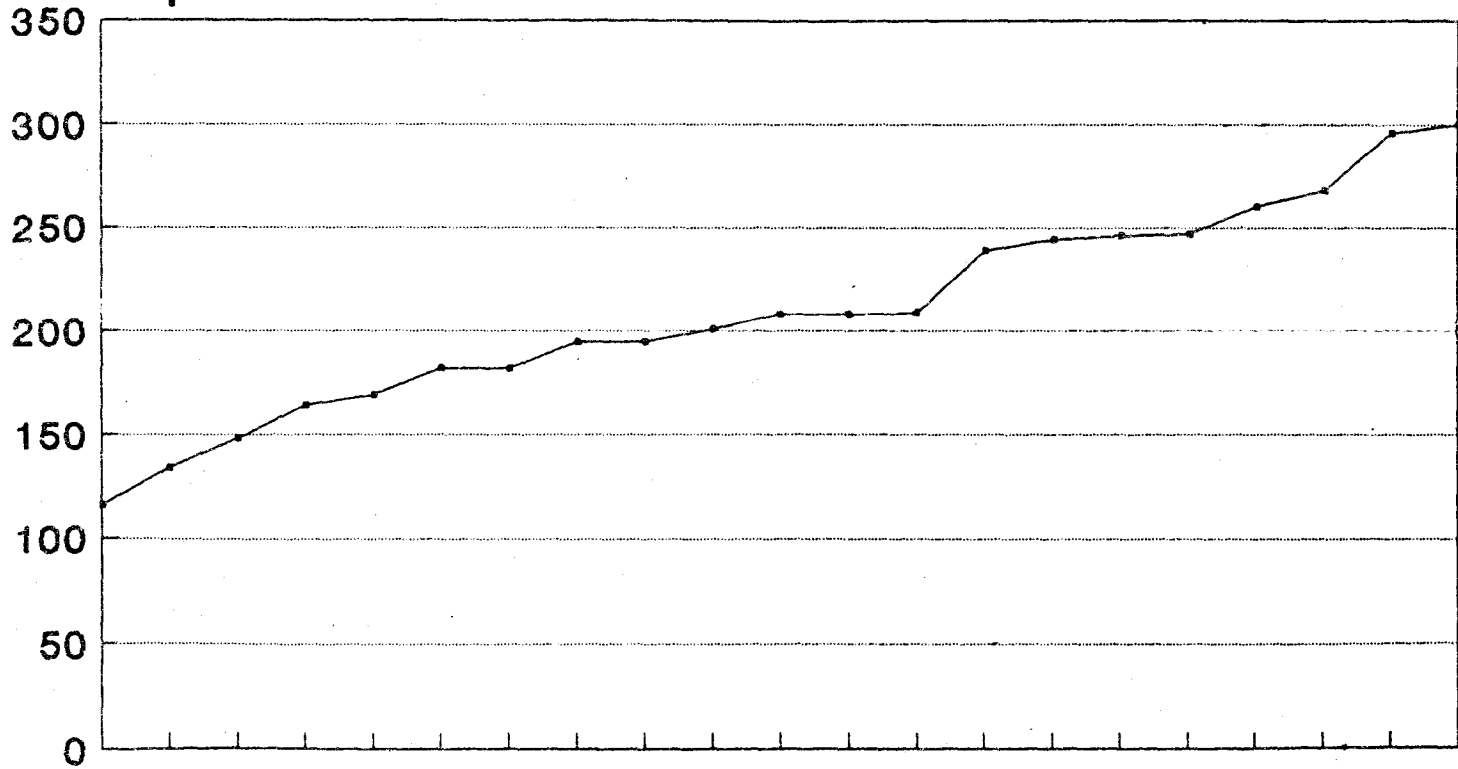
Cantidad de Acusaciones por Fiscal Fuero Criminal y Correccional

Agosto 12 y 13 de 1992

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

1983

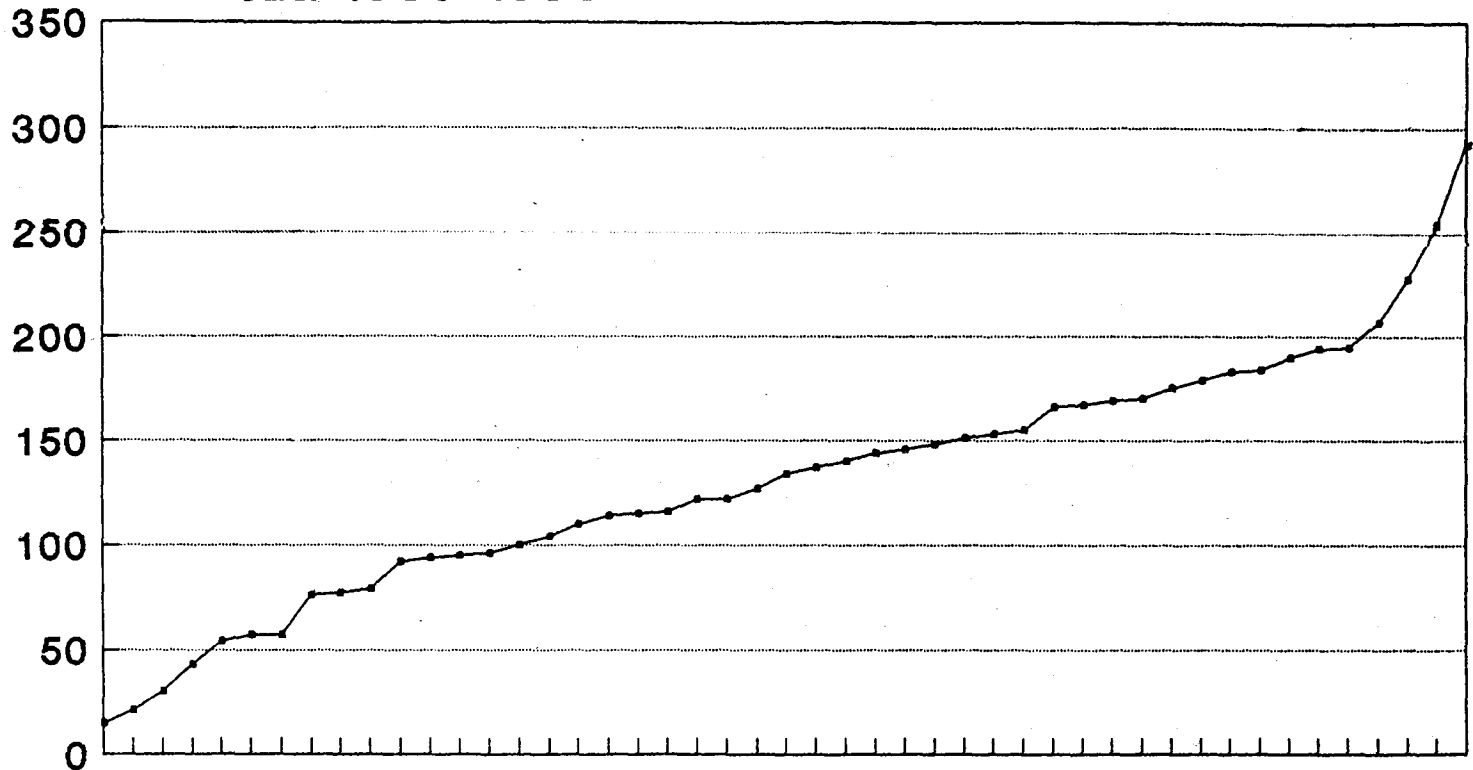
Capital Federal - 1990



Media: 220.09	Máximo: 327	Mediana: 208.00
Moda: 182.00	Mínimo: 116.00	
Desvío Estándar: 58.28	Rango: 211.00	

Cantidad de causas remitidas a juicio por Juzgado por año

Mendoza 1985-1990



Media: 131.47

Máximo: 294

Mediana: 134.00

Moda: 57.00

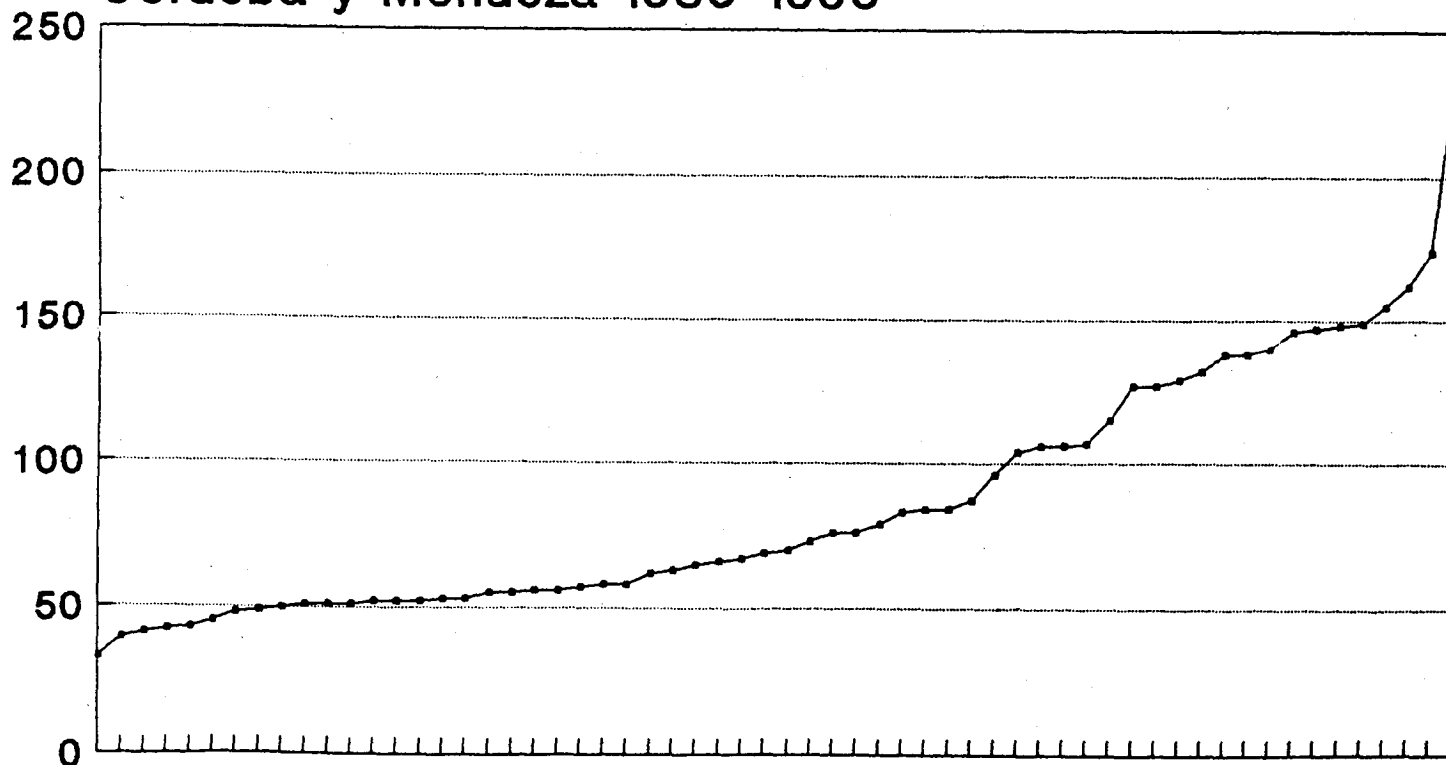
Mínimo: 15.00

Desvío Estándar: 59.61

Rango: 279.00

Sentencias con Debate por Tribunal Oral por año

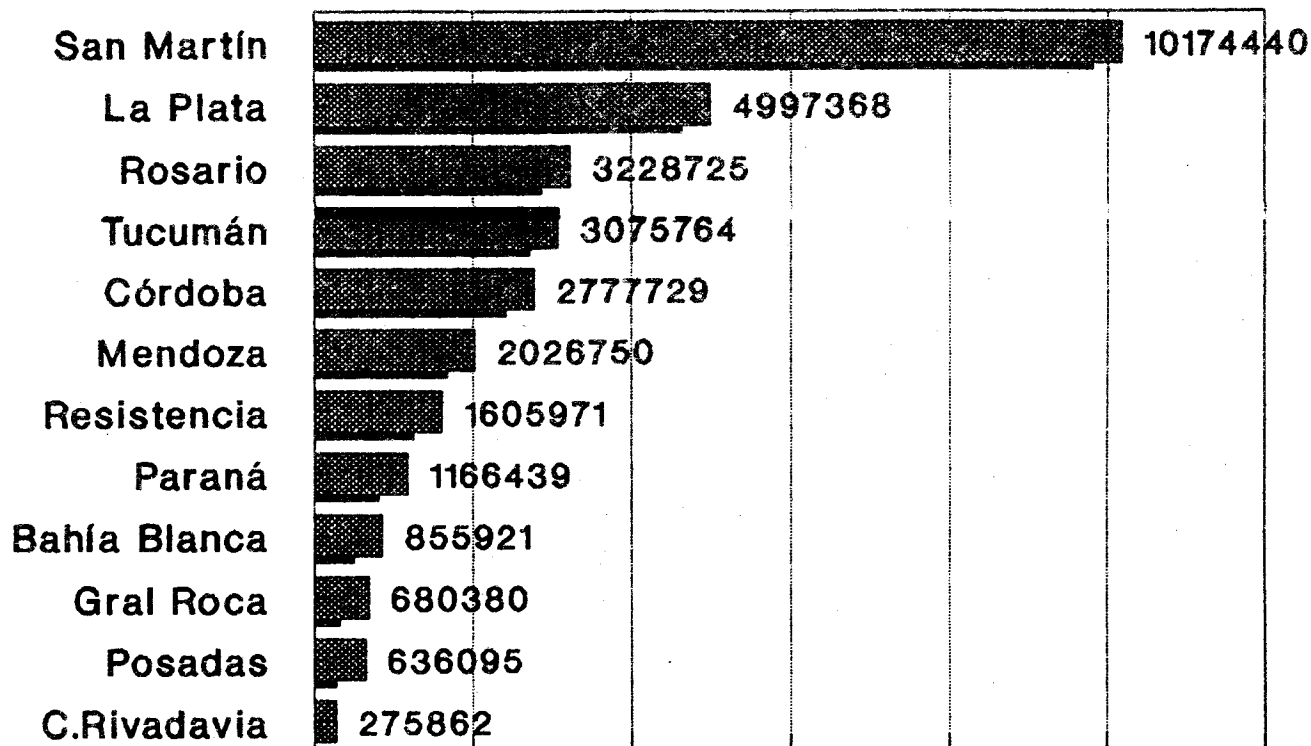
Córdoba y Mendoza 1985-1990



Media: 87.92	Máximo: 233	Mediana: 70.00
Moda: 51.00	Mínimo: 33.00	
Desvío Estandar: 44.19	Rango: 200.00	

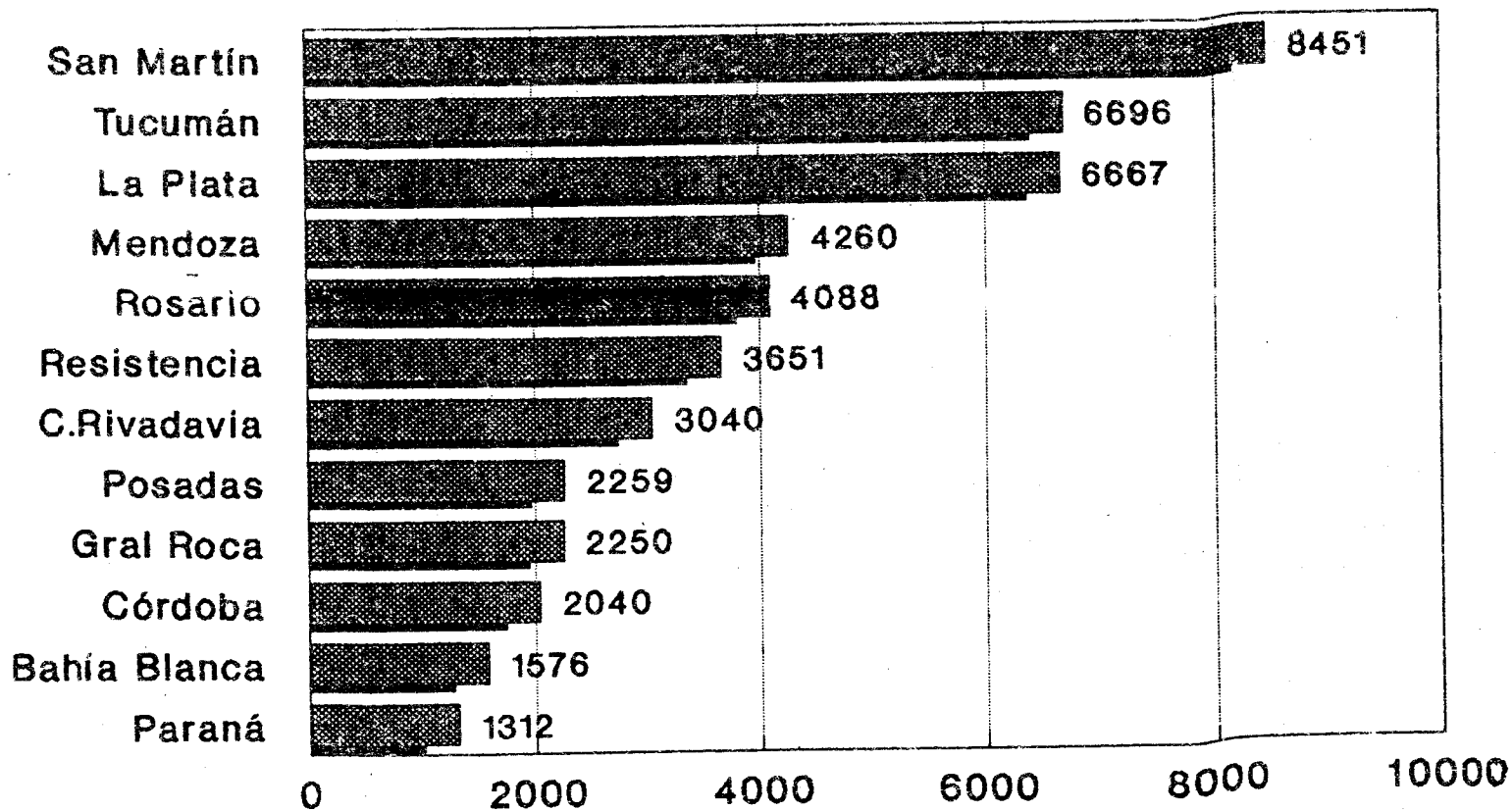
Población por Distrito Judicial del Interior del país

Base: Censo 1980

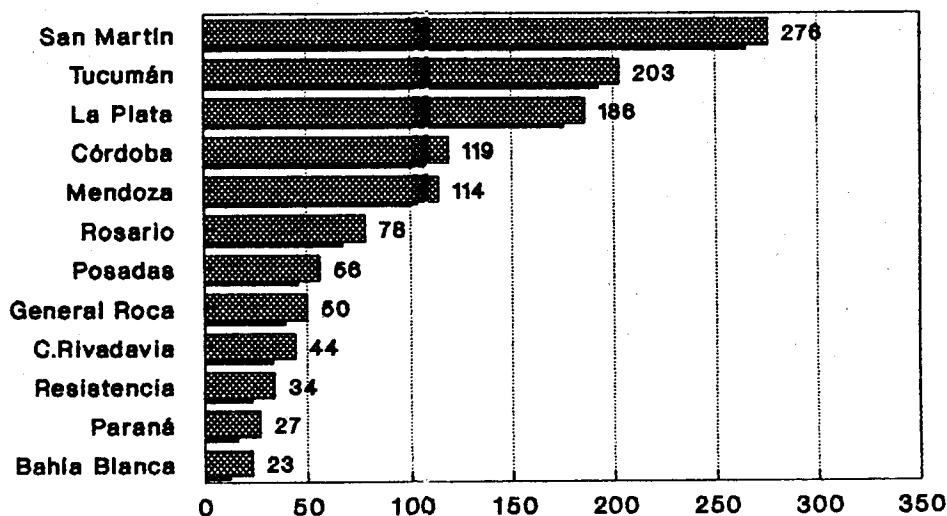


Cantidad de causas entradas a los distritos Judiciales del Interior del País

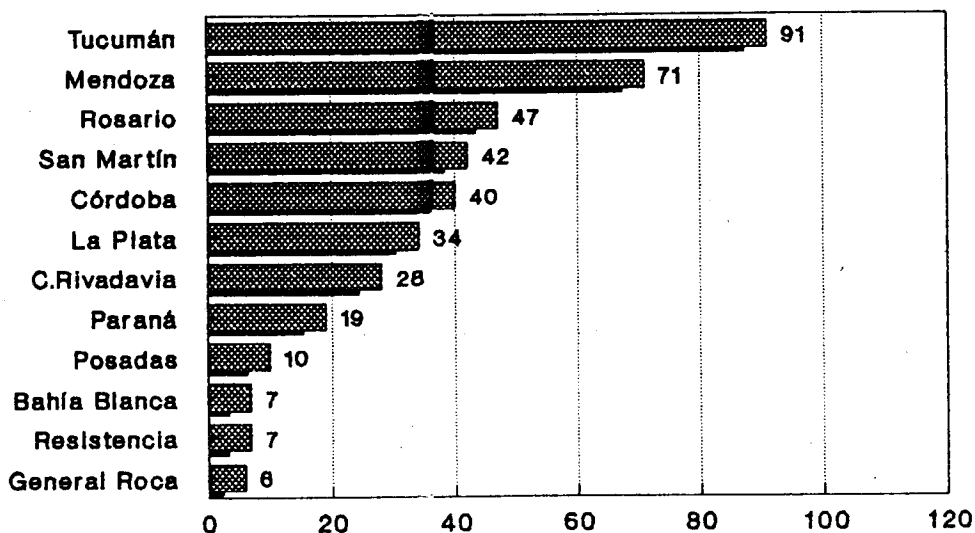
(1990)



APENDICE Nro. 10
Cantidad de Procesados
por Distrito Judicial del
Interior del País



Cantidad de Condenados
por Distrito Judicial del
Interior del País



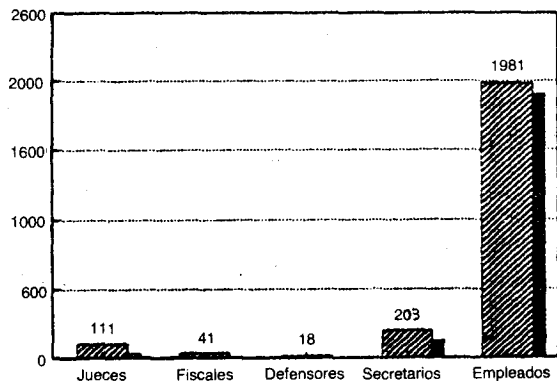
Fuente: Datos de Diciembre de 1991

APENDICE Nº 11

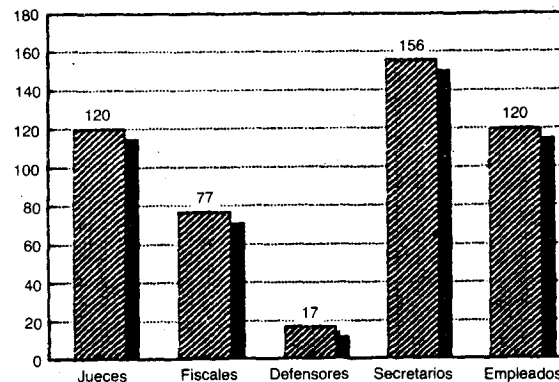
CAPITAL FEDERAL

Cantidad de cargos por Función

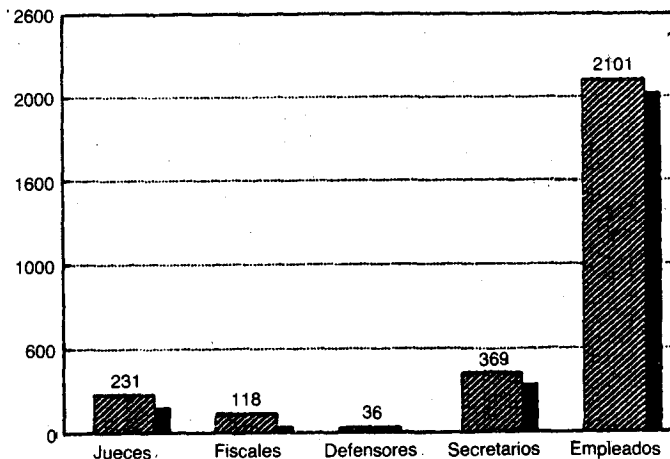
Sistema Actual



Proyecto Implementación



Nuevo Sistema



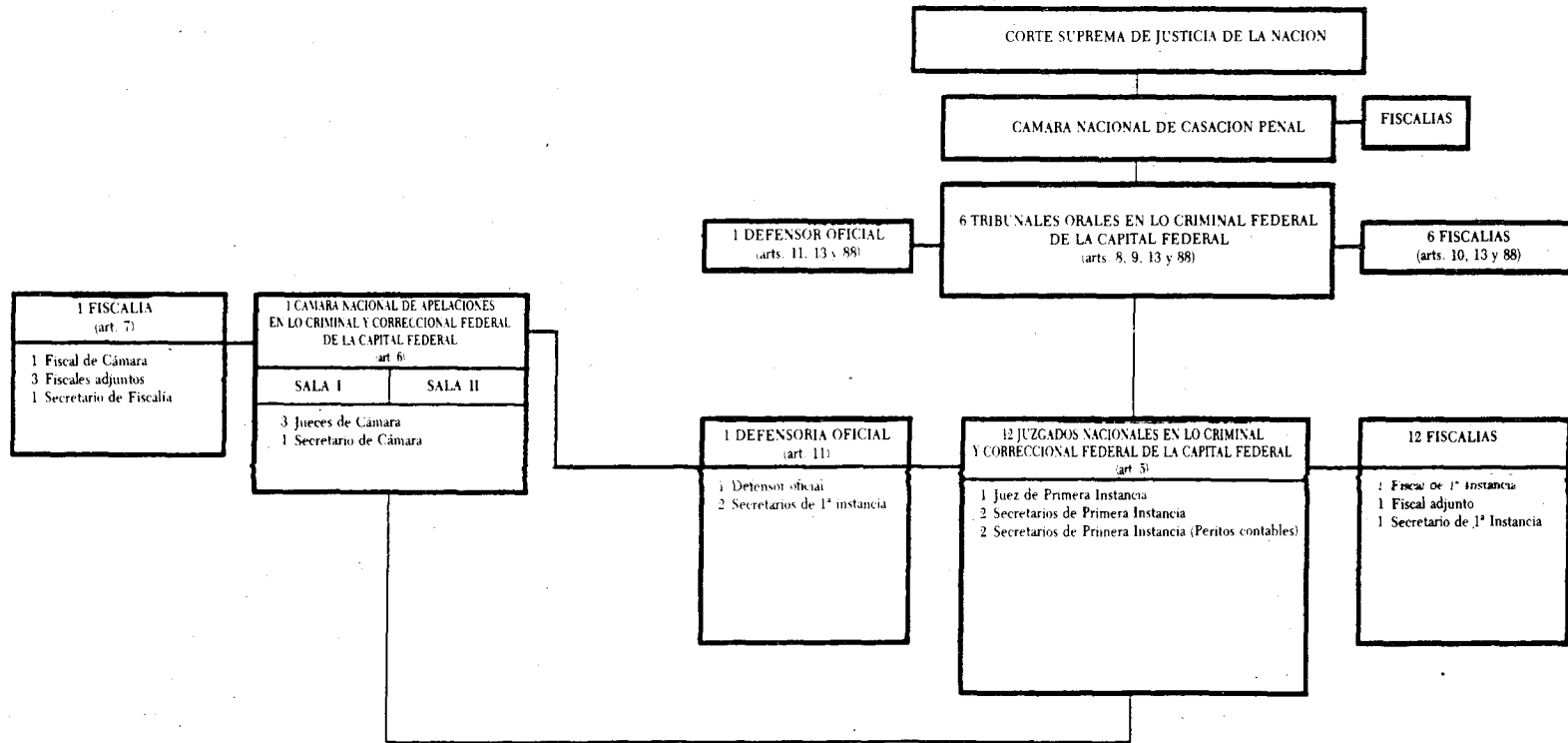
CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

2 FISCALIAS (arts.3 y 4)
2 Fiscales de Cámaras 2 Secretarios de Fiscalía de Cámara
1 Prosecretario administrativo 1 oficial superior 1 auxiliar superior de 1ra. 1 auxiliar superior de 6ta. 1 auxiliar principal de 6ta. 1 auxiliar principal de 7ma.
TOTAL: 10 personas

1 CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL (arts. 1, 2, 4, 82 y 88)			
PRESIDENCIA	SALA I	SALA II	SALA III
1 Juez de Cámara	3 Jueces de Cámara	3 Jueces de Cámara	3 Jueces de Cámara
1 Secretario General	1 Secretario de Cámara	1 Secretario de Cámara	1 Secretario de Cámara
1 auxiliar superior 1 auxiliar superior de 6ta. 1 auxiliar principal de 5ta. 1 auxiliar principal de 6ta. 1 auxiliar principal de 7ma.	1 Prosecretario de Cámara	1 Prosecretario de Cámara	1 Prosecretario de Cámara
	1 prosecretario administrativo 1 auxiliar superior 1 auxiliar superior de 6ta. 1 auxiliar principal de 5ta. 1 auxiliar principal de 6ta. 1 auxiliar principal de 7ma.	1 prosecretario administrativo 1 auxiliar superior 1 auxiliar superior de 6ta. 1 auxiliar principal de 5ta. 1 auxiliar principal de 6ta. 1 auxiliar principal de 7ma.	1 prosecretario administrativo 1 auxiliar superior 1 auxiliar superior de 6ta. 1 auxiliar principal de 5ta. 1 auxiliar principal de 6ta. 1 auxiliar principal de 7ma.
TOTAL: 7 personas	TOTAL: 11 personas	TOTAL: 11 personas	TOTAL: 11 personas

TRIBUNALES NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL

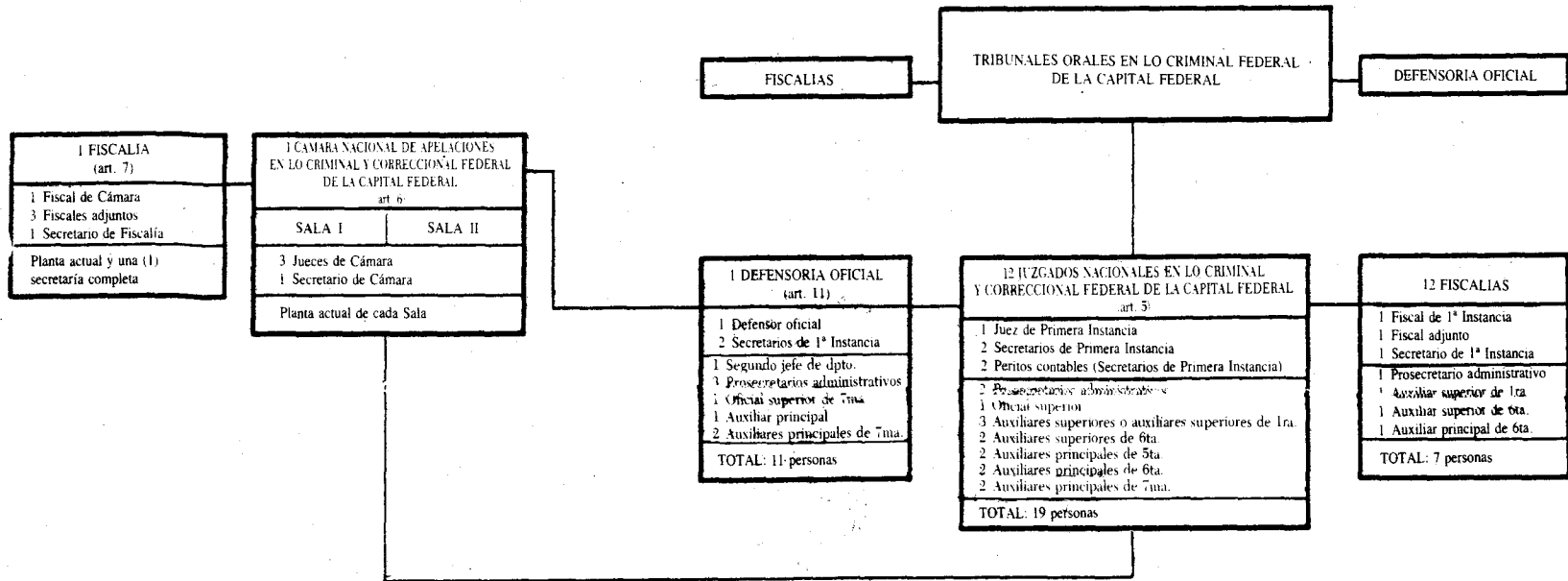


APENDICE Nro. 14.

FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL
 Proyecto de creación de juzgados, fiscalías y defensorías federales
 (Orden del Día Nro. 1.842/91, Honorable Cámara de Diputados de la Nación)

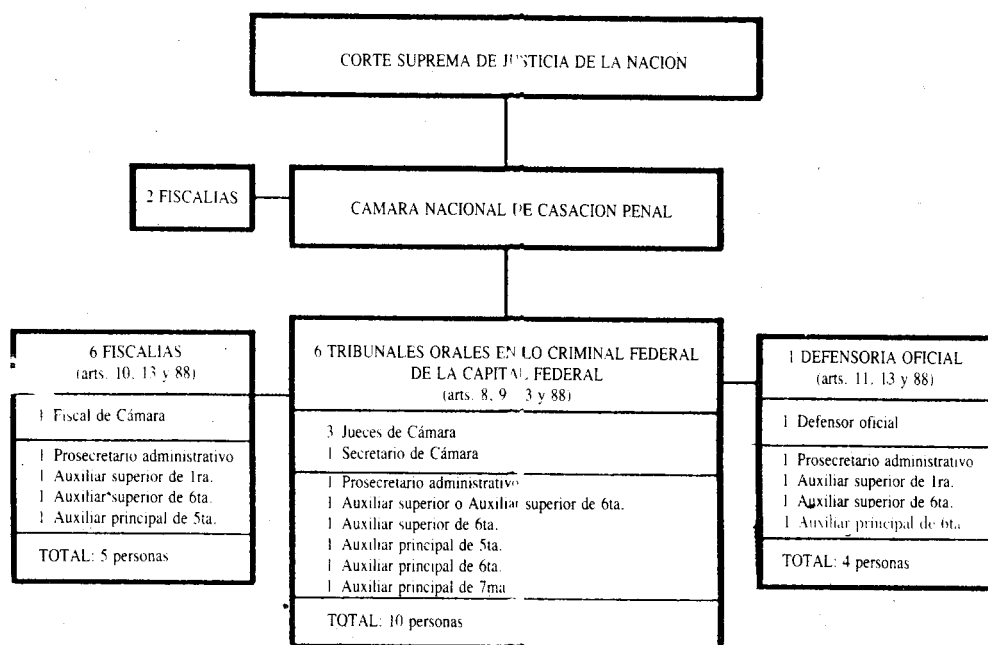
CARGOS	Juzgados Nacionales de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Federal	Ministerio Público Primera Instancia	Ministerio Público Segunda Instancia	Defensoría de pobres, incapaces y ausentes	TOTAL
Fiscal de Cámara			2		2
Juez de 1ª Instancia	6				6
Fiscal de Primera Instancia		6			6
Fiscal adjunto de Cámara (Fiscal de 1ª Instancia)			3		3
Fiscal adjunto móvil (Fiscal de 1ª Instancia)			12		12
Fiscal adjunto de 1ª Instancia		12			12
Defensor de pobres, incapaces y ausentes				1	1
Secretario de Fiscalía de Cámara			2		2
Secretario de Fiscalía (Secretario de 1ª Instancia)		12			12
Secretario de 1ª Instancia	6				6
Perito contable (Secretario de 1ª Instancia)	24				24
Secretario de defensoría				2	2
Segundo Jefe departamento				1	1
Prosecretario administrativo	12	12	2	3	29
Oficial superior	12	12	3		27
Oficial superior de 7ma.				1	1
Auxiliar superior de 1ra.	6	6	2		14
Auxiliar superior de 6ta.	6	6	2		14
Auxiliar principal				1	1
Auxiliar principal de 5ta.	6				6
Auxiliar principal de 6ta.	6	6	2		14
Auxiliar principal de 7ma.	6	6	2	2	16
TOTALES:	90	78	32	11	211

TRIBUNALES NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL

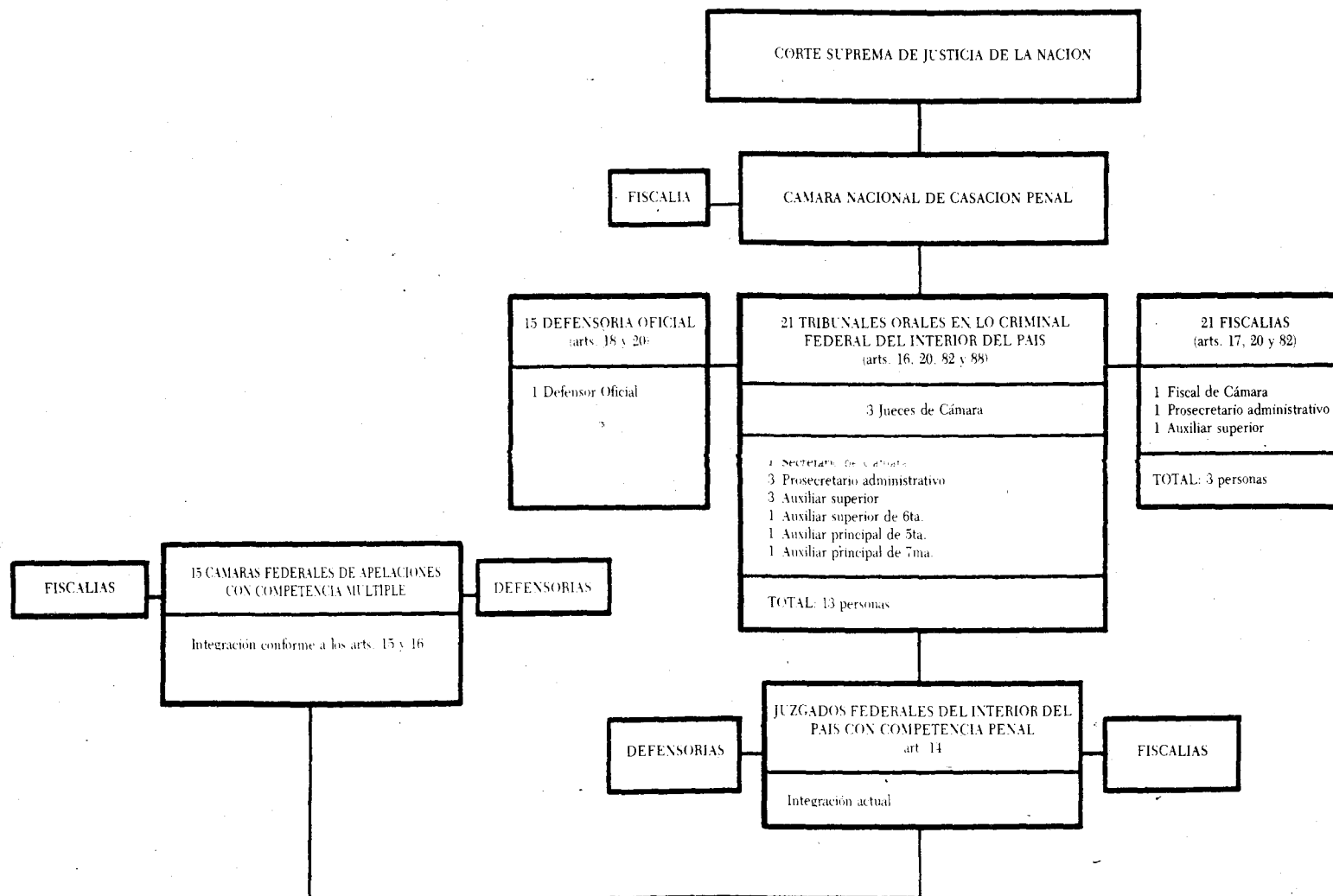


APENDICE Nro. 16

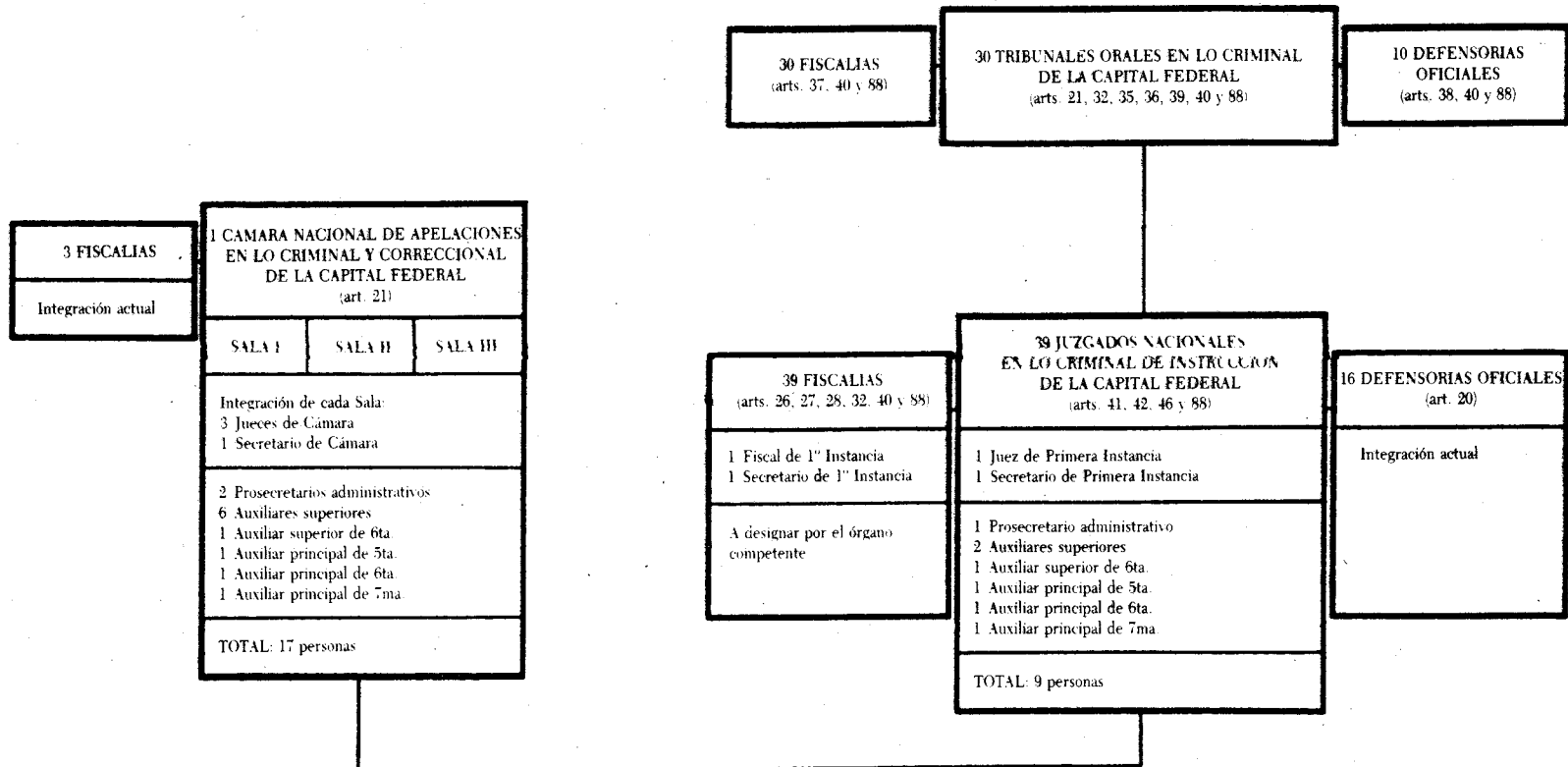
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL



APENDICE Nro. 17
 TRIBUNALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DEL INTERIOR DEL PAIS



APENDICE Nro. 18
TRIBUNALES NACIONALES EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL

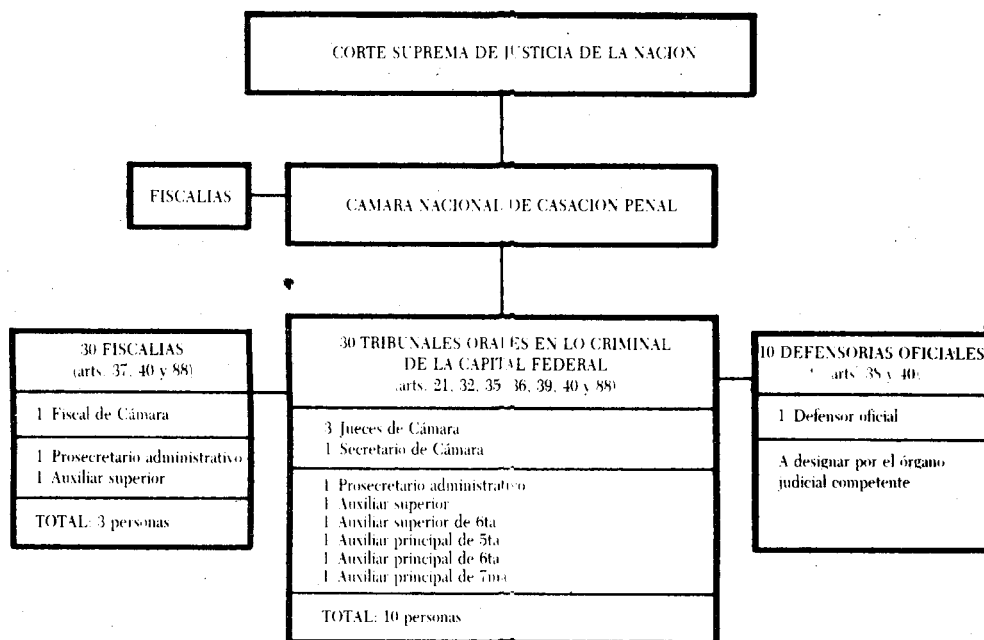


APENDICE Nro. 19
TRIBUNALES NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
DE LA CAPITAL FEDERAL (1991)

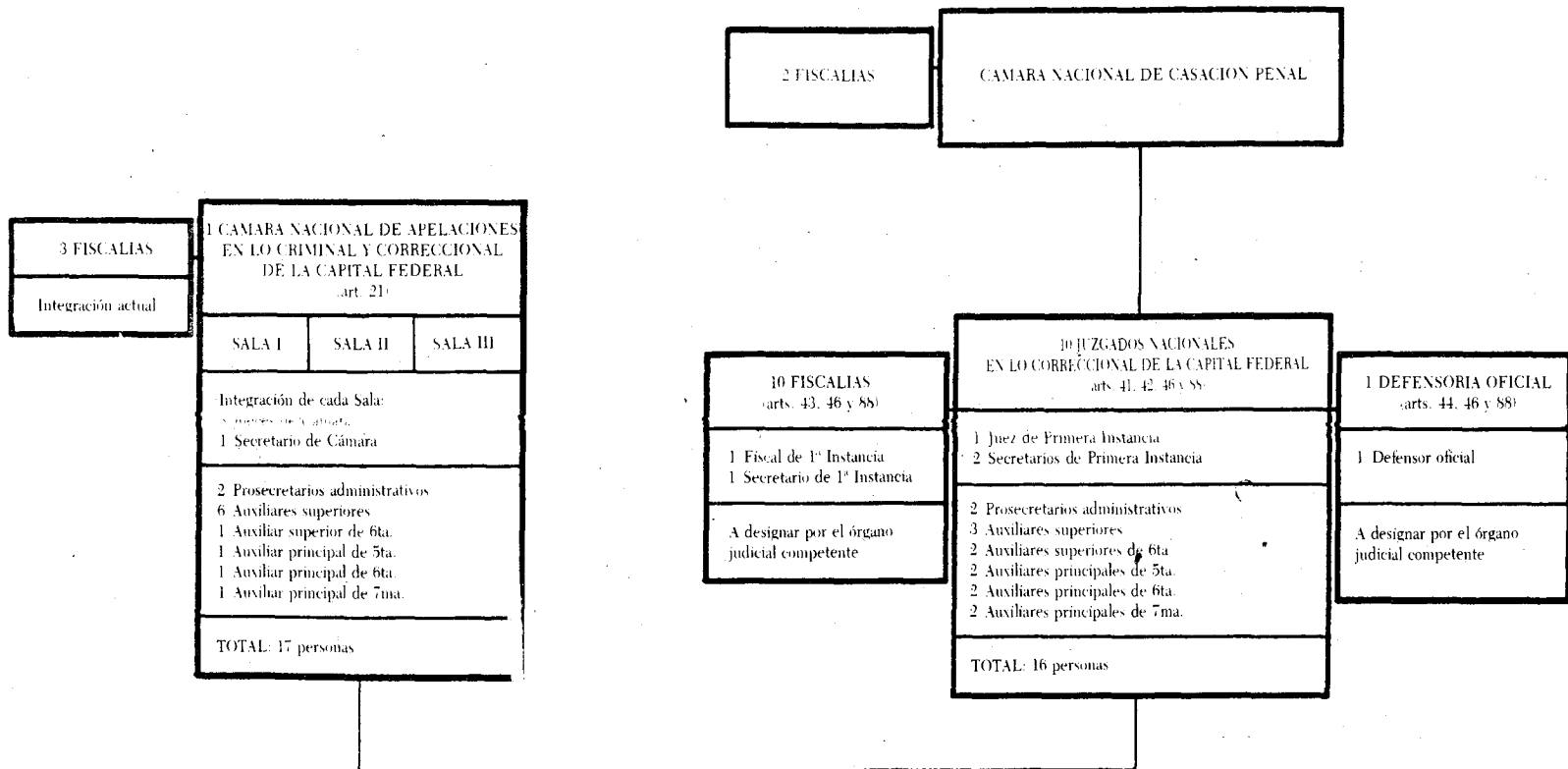
CARGOS	INTEGRACION DE LAS SALAS	INTEGRACION DE OTRAS DEPENDENCIAS	INTEGRACION DE LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA	CANTIDAD TOTAL
Juez de Cámara	21	1		22
Juez de Primera Instancia			54	54
Secretario de Cámara	7	3		10
Secretario de Primera Instancia			113	113
Prosecretario de Cámara		2		2
Prosecretario jefe		11		11
Prosecretario administrativo	14	17	113	144
Oficial superior de 7ma.		1	2	3
Auxiliar superior	45	42	165	252
Auxiliar superior de 3ra.		44		44
Auxiliar superior de 6ta.	7	47	113	167
Auxiliar principal		6	1	7
Auxiliar principal de 5ta.	9	11	138	158
Auxiliar principal de 6ta.	10	12	135	157
Auxiliar principal de 7ma.	16	8	108	132
TOTALES:	129	198	942	1209

APENDICE Nro. 20

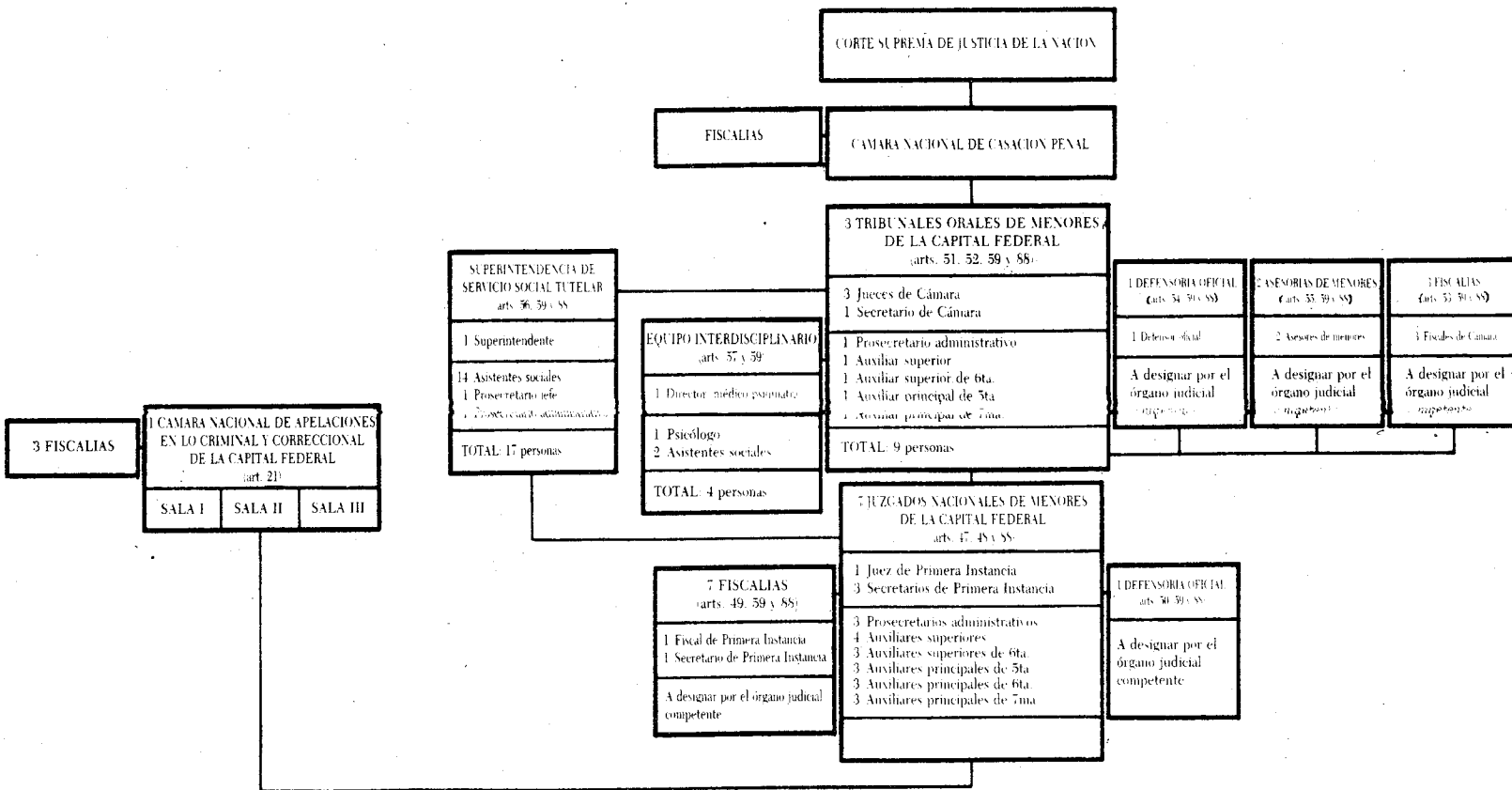
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL DE LA CAPITAL FEDERAL



JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL

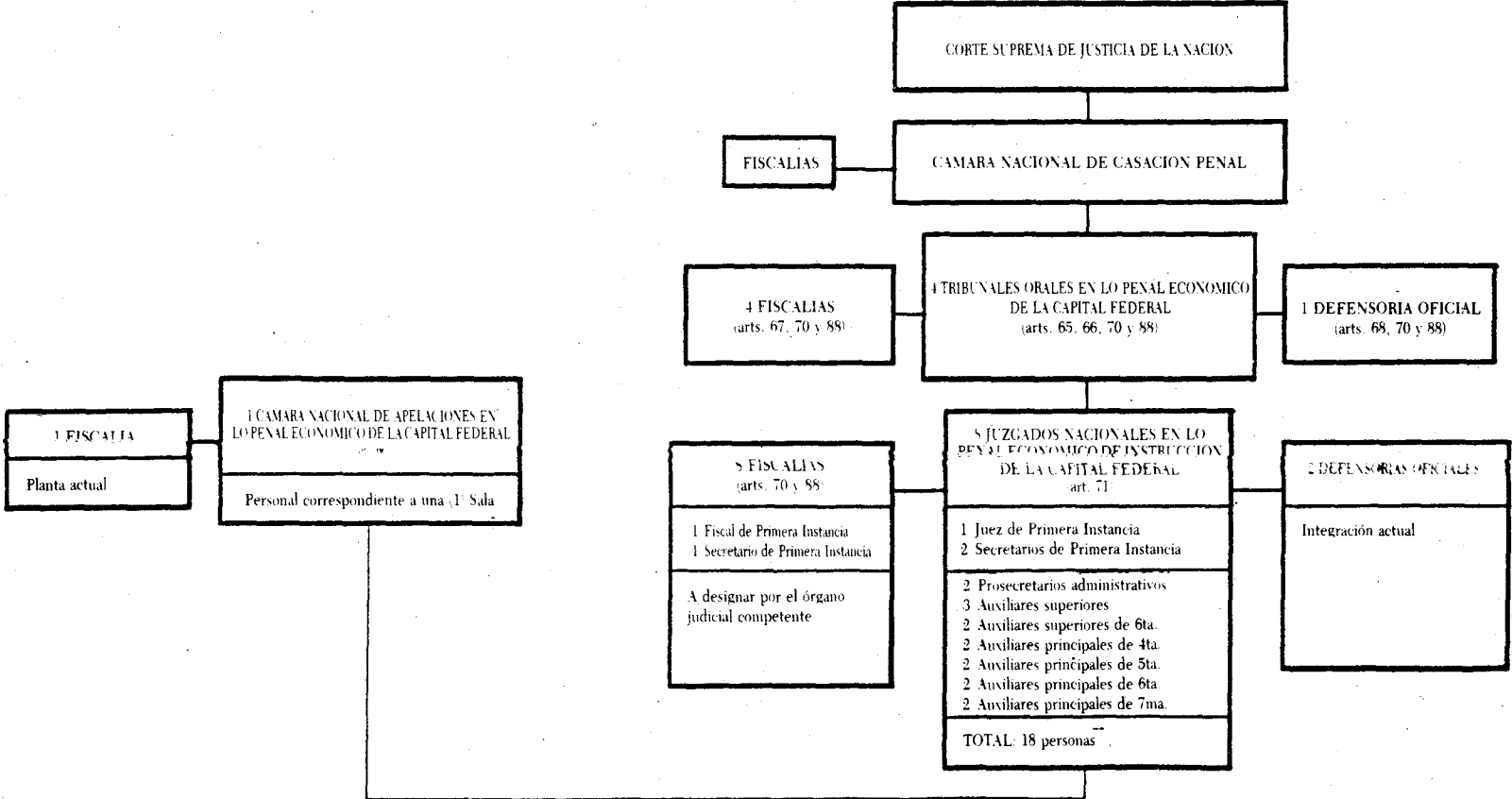


APENDICE Nro. 22 TRIBUNALES DE MENORES DE LA CAPITAL FEDERAL



APENDICE Nro. 23

TRIBUNALES NACIONALES EN LO PENAL ECONOMICO DE LA CAPITAL FEDERAL



PROYECTO DE LEY*El Senado y Cámara de Diputados, etc.***CAPÍTULO I****Cámara Nacional de Casación Penal****Cámara Nacional de Casación Penal - Creación - Integración**

Artículo 1º— Créase la Cámara Nacional de Casación Penal, que estará integrada por diez (10) miembros y funcionará dividida en tres (3) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el juez restante.

Secretaría - Prosecretarías - Creación

Art. 2º— Créanse una (1) Secretaría General para la Presidencia, tres (3) secretarías de cámara y tres (3) prosecretarías de cámara en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 3º— Créanse dos (2) fiscalías que actuarán ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Transfórmense dos (2) cargos de fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en cargos de fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Créase una secretaría en las fiscalías de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Trasládase una secretaría, con su dotación de personal de las fiscalías nacionales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Creación de cargos

Art. 4º— Créanse diez (10) cargos de juez de cámara de casación, un (1) cargo de secretario general, tres (3) cargos de secretario de cámara, un (1) cargo de secretario de fiscalía de cámara y tres (3) cargos de prosecretario de cámara.

Tribunales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal**Juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal****Denominación**

Art. 5º— Los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal**Denominación - Integración**

Art. 6º— La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal conservará su actual denominación e integración.

Ministerio público - Supresión

Art. 7º— Suprímense dos (2) fiscalías nacionales que actúan ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Trasládase una (1) secretaría de fiscalía a las fiscalías ante la Cámara Nacional de Casación Penal, conforme lo establece el artículo 3º de la presente ley.

Los fiscales nacionales adjuntos de cámara recibirán órdenes y estarán subordinados al titular de la fiscalía de cámara.

Tribunales orales en lo criminal federal - Creación

Art. 8º— Créanse seis (6) tribunales orales en lo criminal federal para la Capital Federal, que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Secretarías - Creación

Art. 9º— Créanse seis (6) secretarías en los tribunales orales en lo criminal federal para la Capital Federal.

Ministerio público fiscal - Creación

Art. 10.— Créanse seis (6) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales en lo criminal federal para la Capital Federal.

Defensoría oficial - Creación

Art. 11.— Créase una (1) Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes que actuará ante los tribunales orales en lo criminal federal para la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

La Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes ante los tribunales federales de la Capital Federal actuará ante los juzgados y fiscalías nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 12.— Las causas actualmente en trámite ante los juzgados mencionados en el artículo 5º quedarán radicadas antes los mismos. Aquellas en las que haya contestación del traslado de la defensa, se les aplicará el procedimiento correspondiente a la ley 2372 y sus modificatorias. Las causas en las cuales dicho acto procesal no se haya producido, se tramitarán conforme a la ley 23.984.

Las causas en trámite ante la cámara nacional de apelaciones respectiva tendrán similar tratamiento.

En ambos casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el órgano judicial competente, determinará el criterio de distribución equitativa de las causas ingresadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 13.— Créanse dieciocho (18) cargos de juez de cámara, seis (6) cargos de secretario de cámara, seis (6) cargos de fiscal de cámara y un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes.

Tribunales en lo criminal y correccional federal del interior del país

Juzgados federales del interior del país con competencia penal

Denominación

Art. 14. — Los juzgados federales de primera instancia con competencia criminal y correccional, con asiento en el interior del país, mantendrán su actual denominación e integración. Aquellos juzgados con competencia exclusiva en lo criminal y correccional modificarán su denominación conforme lo dispuesto en la presente ley.

Cámaras Federales de Apelaciones del interior del país

Denominación - Integración

Art. 15. — Las cámaras federales de apelaciones del interior del país, conservarán su actual denominación e integración, con las excepciones establecidas en el artículo siguiente.

Tribunales Orales en lo Criminal Federal del interior del país

Creación

Art. 16. — Créanse diez (10) tribunales orales en lo criminal federal con asiento en los distritos judiciales de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta y Tucumán.

Créanse tres (3) tribunales orales en lo criminal federal con asiento en el distrito judicial de San Martín y un (1) tribunal oral con asiento en los distritos judiciales de Córdoba y Mendoza. Transfórmase una de las salas de las cámaras federales de apelaciones de Córdoba y Mendoza, en tribunales orales en lo criminal con sede en dichas ciudades.

Créase una secretaría para actuar ante cada uno de los tribunales orales que se crean por el presente artículo.

Trasládase una de las actuales secretarías de las salas que se transforman en tribunales orales, para actuar ante los mismos.

Créanse dos (2) tribunales orales en lo criminal federal con asiento en el distrito judicial de Rosario. Transfórmense tres (3) vocalías de cámara y una secretaría de cámara creadas por ley 23.870 en vocalías ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario y en una secretaría para actuar ante los mismos.

Transfórmense dos (2) cargos de vocal de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en vocalías ante el tribunal oral creado por la presente ley en su distrito. Trasládase una (1) de las actuales secretarías de dicha cámara para actuar ante el mismo.

Créanse dos (2) tribunales orales en lo criminal federal con asiento en el distrito judicial de La Plata.

Transfórmense tres (3) vocalías de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en vocalías ante los tribunales orales que se crean.

Créase una secretaría y trasládase una secretaría de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, para

que actúen ante los dos (2) tribunales orales en lo criminal federal de La Plata.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hará saber al Poder Ejecutivo la necesidad de la creación de un número mayor de órganos jurisdiccionales federales y el lugar de funcionamiento.

Ministerio Público Fiscal - Creación

Art. 17. — Créanse veintiún (21) fiscalías, que actuarán ante los tribunales orales en lo criminal federal del interior del país.

Defensoría

Art. 18. — Créanse quince (15) defensorías de pobres, incapaces y ausentes en cada uno de los distritos judiciales del interior del país para actuar ante los tribunales orales respectivos y desempeñar las funciones que encomiendan los artículos 411 y 413 de la ley 23.984 a los asesores de menores.

El defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuará ante la Cámara Nacional de Casación Penal en las causas que llegarán a ésta procedentes de los tribunales federales del interior del país.

Causas en trámite

Art. 19. — Las causas en trámite ante los juzgados federales y cámaras federales de apelaciones a que se refieren los artículos 14 y 15 serán sustanciadas conforme lo indica el artículo 12, párrafos primero y segundo de la presente ley.

Creación de cargos

Art. 20. — Créanse cuarenta y nueve (49) cargos de juez de cámara, veintiún (21) cargos de fiscal de cámara, quince (15) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes y dieciséis (16) cargos de secretario de cámara.

CAPÍTULO II

Tribunales nacionales en lo criminal y correccional de la Capital Federal

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Denominación - Integración - Transformación

Art. 21. — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal conservará su actual denominación. Funcionará dividida en tres (3) salas de tres (3) miembros cada una.

Transfórmense cuatro (4) salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente seleccionará las salas mencionadas precedentemente.

Causa en trámite

Art. 22. — Las causas en trámite ante las salas que se transforman por el artículo anterior, se distribuirán en forma equitativa entre las salas que permanecen en la cámara citada. En todas las que haya contestación del traslado de la defensa se les aplicará el procedimiento de la ley 2.372 y sus modificatorias. Las restantes continuarán con el procedimiento establecido en la ley 23.984.

En lo criminal*Juzados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal**Denominación*

Art. 23. — Los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, y funcionarán con una (1) secretaría cada uno.

Transformación

Art. 24. — Transfórmense diez (10) de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia, excepto los mencionados en el artículo 47 en juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal números 1, 9, 16, 32 y 34 a 39.

Secretarías - Traslado - Supresión

Art. 25. — Trasládanse diez (10) secretarías de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción a los diez (10) juzgados que se establecen en el artículo 24 y cuatro (4) a las fiscalías que se crean en el artículo siguiente.

El traslado de las secretarías se hará en forma coincidente con la instalación de los nuevos juzgados de instrucción.

Suprímense quince (15) secretarías de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción.

Ministerio público fiscal - Creación - Secretarías

Art. 26. — Créanse trece (13) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, que se identificarán con los números 27 a 39.

Créanse treinta y cinco (35) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el presente artículo.

Art. 27. — Las dotaciones de personal administrativo, técnico y de mastranza de las fiscalías que se crean por el artículo 26 de la presente ley serán cubiertas con dotaciones de personal de las secretarías, excluidas las mencionadas en el artículo 24, que se suprimen de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción y de sentencia.

El órgano judicial competente oportunamente podrá disponer la resignación del personal de todas las fiscalías mencionadas en el artículo 26, de modo tal que éstas tengan dotaciones equivalentes de personal.

Actuación

Art. 28. — Las fiscalías ante los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional de la Capital Federal números 1 a 26, actuarán ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal juntamente con las fiscalías que se crean por el artículo precedente.

Defensorías oficiales

Art. 29. — Las defensorías oficiales ante los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional de la Capital Federal actuarán ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 30. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción actuarán con la sustanciación de las causas radicadas ante los mismos. A medida que los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción transformados por el artículo 24 entren en funcionamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente determinará el criterio de distribución equitativa de las causas.

Supresión juzgados de sentencia - Secretarías

Art. 31. — Con excepción de los juzgados transformados por los artículos 24 y 47, suprímense los restantes juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia.

Suprímense treinta y siete (37) secretarías correspondientes a los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia.

Art. 32. — Las dotaciones de personal de las secretarías de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia excluidas las que se trasladan a los juzgados de ejecución, pasarán a desempeñarse en los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal y en el destino que también les acuerda el artículo 27, en forma progresiva y del modo que determine la Corte Suprema de Justicia o el órgano judicial competente.

Causas en trámite ante juzgados de sentencia

Art. 33. — Los juzgados de sentencia a que alude el artículo 24 recibirán la causa en trámite ante los juzgados de sentencia que se suprimen por el artículo 31 y continuarán con la sustanciación de todas las causas en trámite hasta su conclusión definitiva, por un término que no podrá superar un (1) año, del modo que se establece en el artículo siguiente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente podrá prorrogar dicho plazo y establecer los mecanismos que aseguren la finalización de todas las causas. Concluido dicho período comenzarán con la nueva función asignada por la ley 23.984 para los jueces de instrucción.

Art. 34. — Los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia a que se refiere el artículo anterior, continuarán con la sustanciación de las causas en trámite en las que haya contestación del traslado de la defensa. Las causas en las que este acto procesal no se haya producido se remitirán a los juzgados de instrucción correspondientes.

Tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal
Creación - Transformación - Integración

Art. 35. — Créanse veintiséis (26) tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal.

Los cuatro (4) tribunales orales restantes se integrarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 21, párrafo 2º. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el órgano judicial competente, podrá disponer la reasignación de su personal en función de las necesidades de los restantes tribunales orales.

Secretarías - Creación - Integración

Art. 36. — Créanse veintiséis (26) secretarías en los tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal. Cuatro (4) secretarías de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sus dotación de personal, se transfieren a los tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal.

Art. 37. — Créanse treinta (30) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal.

Defensorías oficiales

Art. 38. — Créanse diez (10) defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Creación de cargos - Transformación

Art. 39. — Créanse sesenta y siete (67) cargos de juez de cámara. Los restantes cargos de juez de cámara se integrarán con trece (13) cargos de vocales de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y con diez (10) cargos de juez nacional de primera instancia en lo criminal de sentencia que se transforman en cargos de juez de cámara.

Art. 40. — Créanse treinta (30) cargos de fiscal de cámara, diez (10) cargos de defensores de pobres, incapaces y ausentes, trece (13) cargos de fiscal de primera instancia, veintiséis (26) cargos de secretario de cámara y treinta y cinco (35) cargos de secretario de primera instancia.

En lo correccional

Denominación - Creación

Art. 41. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional, letras G, H, I, J, y N,

se denominarán juzgados nacionales en lo correccional y se enunciarán con los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Créanse cinco (5) juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, que se enunciarán con los números 6, 7, 8, 9 y 10.

Secretarías - Traslado

Art. 42. — Los juzgados nacionales en lo correccional Nº 1, 2, 3, 4 y 5 conservarán dos (2) de las secretarías que actualmente poseen, a elección de los titulares de dichos tribunales. Las restantes secretarías, pasarán a integrar, con su dotación completa, los juzgados que se crean por el artículo precedente.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 43. — Créanse diez (10) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal.

Créanse diez (10) secretarías ante las fiscalías mencionadas por el presente artículo.

Defensorías - Creación

Art. 44. — Créanse una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes que actuará ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Causas en trámite

Art. 45. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional remitirán a los juzgados nacionales en lo correccional que se crean por la presente ley, para su tramitación definitiva, las causas radicadas ante los mismos correspondientes a las secretarías que se trasladan conforme al artículo 42.

Respecto de las causas ingresadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente establecerá el mecanismo de distribución equitativa de las mismas.

Creación de cargos

Art. 46. — Créanse cinco (5) cargos de juez de primera instancia, diez (10) cargos de fiscal de primera instancia, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes y diez (10) cargos de secretario de primera instancia.

Tribunales de menores de la Capital Federal

Transformación

Art. 47. — Tránsformanse los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia letras M y R, los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción números 1, 9 y 16 y los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional, letras L y O, en juzgados nacionales de menores números 1 a 7, respectivamente.

Los juzgados mencionados precedentemente pasarán a los nuevos destinos con su dotación completa de personal, en la forma que lo disponga esta ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente.

Secretarías

Art. 48. — Transfiérense a los juzgados nacionales de menores, veintiún (21) secretarías de las que integran actualmente los juzgados nacionales de primera instancia a que se refiere el artículo 47.

Ministerio Público - Creación - Secretarías

Art. 49. — Créanse siete (7) fiscalías ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal. Créanse siete (7) secretarías ante las fiscalías creadas en el presente artículo.

Defensoría Oficial - Creación

Art. 50. — Créase una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Tribunales orales de menores - Creación

Art. 51. — Créanse tres (3) tribunales orales de menores para la Capital Federal, que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Secretaría - Creación

Art. 52. — Créanse tres (3) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

Ministerio Público Fiscal - Creación

Art. 53. — Créanse tres (3) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

Defensoría Oficial - Creación

Art. 54. — Créase una (1) defensoría oficial de pobres, incapaces y ausentes que actuará ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Asesoría de Menores - Creación

Art. 55. — Créanse dos (2) asesorías de menores que actuarán en los supuestos previstos por el capítulo II del título II del libro III del Código Procesal Penal de la Nación.

Superintendencia de Servicio Social Tutelar - Creación

Art. 56. — Créase la Superintendencia de Servicio Social Tutelar en el ámbito que disponga el órgano judicial competente.

Equipo interdisciplinario para los tribunales de menores - Creación

Art. 57. — Créase un equipo interdisciplinario para los tribunales de menores, que cumplirá las funciones establecidas en el artículo 14 de la ley 24.050.

Causas en trámite

Art. 58. — Las causas actualmente en trámite ante los juzgados enunciados en el artículo 47 quedarán radicadas ante los nuevos juzgados nacionales de menores.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente determinará el criterio de distribución equitativa de las causas que ingresen, a los juzgados nacionales de menores, a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 59. — Créanse nueve (9) cargos de juez de cámara, tres (3) cargos de fiscal de cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes, dos (2) cargos de asesor de menores y tres (3) cargos de secretario de cámara.

Créanse siete (7) cargos de fiscal de primera instancia, siete (7) cargos de secretario de primera instancia y un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes.

Créanse un (1) cargo de superintendente de servicio social tutelar y catorce (14) cargos de asistentes sociales tutelares.

Créanse un (1) cargo de médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil, un (1) cargo de psicólogo especializado en problemas infanto-juveniles y dos (2) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infanto-juveniles.

En lo penal económico

Denominación - Integración

Art. 60. — Los juzgados nacionales de primera instancia en lo penal económico de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo penal económico y se integrarán con dos (2) secretarías cada uno.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 61. — Créanse cuatro (4) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal, que actuarán juntamente con las fiscalías existentes en este fuero. Créanse ocho (8) secretarías ante cada una de las fiscalías mencionadas.

Defensorías

Art. 62. — Las actuales defensorías de pobres, incapaces y ausentes continuarán actuando ante los juzgados nacionales en lo penal económico y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal

Denominación - Integración

Art. 63. — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal conservará su actual denominación.

Una sala se integrará con tres (3) cargos de juez de cámara de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicará al Poder Ejecutivo la necesidad de la creación de la sala restante en dicha cámara.

Transfórmense dos (2) salas de la citada cámara en tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente seleccionará las salas mencionadas precedentemente.

Secretarías

Art. 64. — El personal de una de las actuales salas, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguirá desempeñándose en la Cámara. El resto pasará a desempeñarse en los tribunales orales en lo penal económico que se crean por esta ley, conforme lo establece el artículo 65.

Tribunales orales en lo penal económico para la Capital Federal

Integración

Art. 65. — Créanse cuatro (4) tribunales orales en lo penal económico para la Capital Federal, que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Créanse ocho (8) cargos de juez de cámara. Los cuatro (4) cargos restantes se integrarán con los procedentes de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Secretarías - Creación

Art. 66. — Créanse dos (2) secretarías en los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal.

Trasládanse dos (2) secretarías de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o del órgano judicial competente, con su dotación completa de personal, a los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal que se crean por la presente ley.

Ministerio público fiscal - Creación

Art. 67. — Créanse cuatro (4) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal.

Defensoría - Creación

Art. 68. — Créase una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes que actuará ante los tribunales ora-

les en lo penal económico de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Causas en trámite

Art. 69. — Los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal continuarán con la tramitación de las causas en las que se haya producido la contestación del traslado de la defensa, al momento de entrada en vigencia de la ley 23.984, hasta su conclusión definitiva, conforme lo determina el artículo 536 de dicha ley.

Las salas que se transforman en tribunales orales en lo penal económico, remitirán sus causas para la tramitación correspondiente, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Art. 70. — Créanse ocho (8) cargos de juez de cámara, cuatro (4) cargos de fiscal de cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes, cuatro (4) cargos de fiscal de primera instancia, dos (2) cargos de secretario de cámara y ocho (8) cargos de secretario de primera instancia.

Juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal

Creación

Art. 71. — Créanse tres (3) juzgados nacionales de ejecución penal para la Capital Federal, que contarán con una secretaría cada uno. Tendrán la competencia territorial correspondiente al distrito judicial de Capital Federal conforme lo determina la ley de organización del Poder Judicial de la Nación para la implantación del procedimiento penal oral.

Secretarías - Traslado

Art. 72. — Transfiérense tres (3) secretarías, con la dotación completa del personal, de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia a los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal que se crean por la presente ley.

Causas con sentencias condenatorias firmes

Art. 73. — A partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984 los juzgados nacionales remitirán a los juzgados nacionales de ejecución penal todas aquellas causas con sentencia firme en las que hubiere condena, conforme al modo de distribución que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente determine para los nuevos juzgados de ejecución.

Juez de ejecución del interior del país

Art. 74. — Las funciones del juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas, en el interior del país, por un juez del tribunal oral respectivo, conforme lo determine el órgano judicial competente.

En los casos de suspensión del proceso a prueba, las ejercerá el juez que dictó el beneficio.

Causas con sentencia condenatoria firme

Art. 75. — A partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984 los juzgados federales del interior del país remitirán, cuando corresponda, al miembro del tribunal oral respectivo que cumpla la función del juez de ejecución, todas aquellas causas con sentencia condenatoria firme.

Creación de cargos

Art. 76. — Créanse tres (3) cargos de juez de primera instancia. Créanse dos (2) cargos de médico, un (1) cargo de médico psiquiatra, un (1) cargo de psicólogo y dos (2) cargos de asistente social, para el equipo interdisciplinario de los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal.

Créanse diecisiete (17) cargos de secretario de primera instancia para las oficinas que establece el artículo 29, párrafo tercero y cuarto de la ley orgánica respectiva en las unidades penitenciarias números 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 30 y 32.

En lo penal de rogatorias - Denominación - Integración

Art. 77. — El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias conservará su actual integración.

CAPÍTULO III

Policía Judicial

Policía Judicial - Secretaría - Creación

Art. 78. — Créase la Policía Judicial, en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal. Créase la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales.

Creación de cargos - Integración

Art. 79. — Créase un (1) cargo de director de Policía Judicial y un (1) cargo de secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales. Los cincuenta y dos (52) cargos de asistentes jurídicos de la prevención se integran con quince (15) y treinta y siete (37) cargos de secretarios de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción y de sentencia, respectivamente.

Oficina de asesoramiento y asistencia a víctima y testigo

Creación

Art. 80. — Créase la oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y al testigo.

Créase un (1) cargo de director de la oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y al testigo.

Créanse dos (2) cargos de trabajadores sociales y uno (1) de psicólogo, que integrarán el equipo interdisciplinario mencionado en el artículo 40 de la ley 24.050.

Art. 81. — Créase una oficina de administración judicial, una dirección de informática jurídica y un archivo general.

Créase un (1) cargo de administrador judicial un (1) cargo de director de informática jurídica y un (1) cargo de director de archivo general.

Creación de cargos

Art. 82. — Créanse los cargos de personal administrativo, técnico, de servicio y maestranza en los distintos órganos que se detallan en los anexos I a X, que forman parte integrante de la presente ley.

Art. 83. — Créase una (1) prosecretaría de primera instancia ante cada uno de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y en los juzgados federales del interior del país.

Art. 84. — Transfórmense los actuales cargos de prosecretarios administrativos de los juzgados a que alude el artículo anterior en cargos de prosecretario de primera instancia.

Disposiciones transitorias

Art. 85. — Los tribunales orales en lo criminal federal que se crean por la presente ley en los distritos judiciales de Corrientes y Salta, serán habilitados juntamente con la instalación de las respectivas cámaras federales de apelaciones de Corrientes (ley 23.650), y Salta (ley 23.867).

Art. 86. — Facúltase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a designar el personal necesario y a dictar las normas complementarias para posibilitar la organización, integración escalonada y funcionamiento de los órganos previstos en la ley 24.050, en todo aquello no regulado por la presente, pudiendo delegar tales facultades en la Cámara Nacional de Casación Penal o en el tribunal oral respectivo.

Financiamiento

Art. 87. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, en lo que hace a la instalación y funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal (anexo I), diez (10) tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal (anexo IV), dos (2) tribunales orales de menores, una (1) asesoría de menores (anexo VI), dos (2) tribunales orales en lo penal económico (anexo VII), dos (2) tribunales orales federales de la Capital Federal (anexo II), y un (1) tribunal oral por cada distrito judicial del interior del país (anexo III), con las fiscalías correspondientes, tres (3) jueces nacionales de ejecución penal (anexo VIII) y un (1) administrador judicial (anexo X) con sus respectivas dotaciones, se financiarán con los recursos establecidos en los artículos 2º y 3º de la ley 23.853, imputándose a los créditos presupuestarios del ejercicio 1992.

Respecto de la instalación y funcionamiento de los demás órganos que prevé la presente ley, se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente a 1993, debiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptar los recaudos necesarios para su incorporación al presupuesto de dicho año y para la reserva del crédito a efectos de las erogaciones pertinentes.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, fijará el plan de entrada en funcionamiento, atendiendo a las necesidades del servicio de justicia.

Art. 88. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación distribuirá el personal actualmente existente en el Poder Judicial de la Nación, de modo que permita la instalación de todos los órganos creados por la presente ley.

Art. 89. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — León C. Arslanán.

ANEXO I

Partida presupuestaria 1992

Cámara Nacional de Casación Penal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara de casación	10
Secretario general	1
Secretario de cámara	3
Secretario de fiscalía de cámara	1
Prosecretario de cámara	3

Personal administrativo y técnico

Auxiliar superior (relator)	3
	<hr/> 21

ANEXO II

Partida presupuestaria 1992/1993

Tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	18
Fiscal de cámara	6
Defensor oficial	1
Secretario de cámara	6
	<hr/> 31

ANEXO III

Partida presupuestaria 1992

Tribunales orales en lo criminal federal del interior

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	49
Fiscal de cámara	21
Defensor oficial	15
Secretario de cámara	16

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo (ujier: I)	16
Prosecretario administrativo (oficial 1º)	53
Auxiliar superior	69
Auxiliar superior de 6ª	16
Auxiliar principal de 5ª	16

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	16
Total	<hr/> 287

ANEXO IV

Partida presupuestaria 1992/1993

Tribunales criminales orales Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de cámara	67
Fiscal de cámara	30
Defensor oficial de 2ª instancia	10
Secretario de cámara	26

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo	30
Auxiliar superior	30

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	30
Subtotal	<hr/> 223

Ministerio público fiscal de instrucción

Funcionarios

Fiscal de primera instancia	13
Secretario de primera instancia	35

Subtotal	<hr/> 48
	===
Total	<hr/> 271

ANEXO V

Partida presupuestaria 1993

Juzgados correccionales de Capital Federal

Magistrados

Juez de primera instancia	5
---------------------------------	---

Ministerio público ante los juzgados correccionales de la Capital Federal

Funcionarios

Fiscal de primera instancia	10
Secretario de primera instancia	10

Subtotal	<hr/> 20
----------------	----------

Defensoría de pobres, incapaces y ausentes

Funcionarios

Defensor de pobres, incapaces y ausentes	1
---	---

Subtotal	<hr/> 1
Total	<hr/> 26

ANEXO VI

Partida presupuestaria 1992/1993

*Tribunales orales de menores de Capital Federal**Magistrados y funcionarios*

Juez de cámara	9
Fiscal de cámara	3
Defensor oficial	1
Asesor de menores de 2ª instancia	2
Secretario de cámara	3

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo	3
Auxiliar superior	3
Auxiliar superior de 6ª	3
Auxiliar principal de 5ª	3

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	3
Subtotal	33

*Ministerio público ante los juzgados nacionales de menores**Funcionarios*

Fiscal de primera instancia	7
Secretario de primera instancia	7

Personal administrativo, técnico y de servicio

Prosecretario administrativo	4
Subtotal	18

*Defensoría ante los juzgados nacionales de menores**Funcionarios*

Defensor de pobres, incapaces y ausentes	1
--	---

Personal administrativo, técnico y de servicio

Prosecretario administrativo	1
Subtotal	2

*Superintendencia de servicio social tutelar**Personal Superior*

Superintendente de Servicio Social Tutelar	
(Secretario de cámara)	1
Asistente social (secretario de primera instancia)	14

Personal administrativo y técnico

Prosecretario jefe	1
Prosecretario administrativo	2
Subtotal	18

Equipo interdisciplinario para tribunales de menores

Médico especializado en psiquiatría infanto juvenil (Fiscal de 1ª instancia)	1
Psicólogos especializados en problemas infanto juveniles (Fiscal de 1ª instancia)	1
Asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infanto juveniles (secretario de primera instancia)	2

Subtotal 4

Total 75

ANEXO VII

Partida presupuestaria 1992/1993

*Tribunales orales penal económico Capital Federal**Magistrados y funcionarios*

Juez de cámara	8
Fiscal de cámara	4
Defensor oficial	1
Secretario de cámara	2

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo (oficial 1º)	4
Subtotal	19

*Ministerio público ante los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal**Funcionarios*

Fiscal de primera instancia	4
Secretario de primera instancia	8

Total 31

ANEXO VIII

Partida presupuestaria 1992/1993

*Juzgados nacionales de ejecución penal**Magistrados*

Juez de primera instancia	3
---------------------------------	---

Oficina de ejecución penal

Secretario de primera instancia	17
Equipo interdisciplinario de ejecución penal	
Médico (secretario de cámara)	2
Médico psiquiatra (secretario de cámara)	1
Psicólogo (secretario de cámara)	1
Asistencia social (secretario de 1ª instancia)	2

Subtotal 6

Total 23

ANEXO IX

Partida presupuestaria 1993

Policía judicial

Personal superior

Director de policía judicial (fiscal de 1ª instancia)	1
Secretario de sumarios y asuntos judiciales (secretario de cámara)	1
Total	2

ANEXO X

Partida presupuestaria 1992/93

Oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y al testigo

Personal superior

Director (fiscal de 1ª instancia)	1
Asistente social (secretario de 1ª instancia)	2
Psicólogo (secretario de 1ª instancia)	1

Administración judicial

Personal superior

Administrador judicial (secretario de cámara)	1
--	---

Archivo general

Personal superior

Director (secretario de cámara)	1
---------------------------------------	---

Dirección de informática jurídica

Personal superior

Director (secretario de cámara)	1
Total	7

2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de San Luis, con competencia territorial en dicha provincia, y con sede en la ciudad de San Luis.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley, tendrá idéntica organización que la de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Art. 2º — Los gastos que demande la presente, se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge A. Agúndez.

3

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TRIBUNALES NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Denominación - Integración - Transformación

Artículo 1º — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal conservará su actual denominación y estará integrada por diecinueve (19) jueces. Funcionará dividida en seis (6) salas de tres (3) miembros cada una y tendrá un presidente rotativo.

Transformase una (1) Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en Tribunal Oral en lo Criminal para la Capital Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente seleccionará la sala mencionada precedentemente.

Causas en trámite

Art. 2º — Las causas en trámite ante la Sala que se transforma por el artículo anterior, se distribuirán en forma equitativa entre las salas que continúan integrando la Cámara citada.

En todas las que haya contestación del traslado a la defensa se les aplicará el procedimiento de la ley 2372 y sus modificatorias. Las restantes continuarán con el procedimiento establecido en la ley 23.984.

Sustitución

Art. 3º — En atención a lo establecido en el artículo 1º, sustitúyase el segundo párrafo del artículo 18 de la ley 24.050, por el siguiente.

Funcionará dividida en seis (6) salas de tres (3) miembros cada una y tendrá un presidente rotativo.

EN LO CRIMINAL

Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal

Denominación

Art. 4º — Los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, y funcionarán con una (1) secretaría cada uno.

Creación

Art. 5º — Créanse veintinueve (29) nuevos juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, que se sumarán a los veintinueve (29) juzga-

dos nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción existentes y que funcionarán con los números 1, 9, 16, 32 y 34 a 58.

Secretarías - Traslado

Art. 6º — Trasládase una (1) de las dos (2) secretarías de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción, a elección de sus titulares actuales, a los nuevos juzgados que se crean por el artículo anterior.

Ministerio público fiscal

Creación

Art. 7º — Créanse tres (3) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, que se identificarán con los números 27 a 29.

Actuación

Art. 8º — Las fiscalías ante los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional de la Capital Federal números 1 a 26, actuarán ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, juntamente con las fiscalías que se crean por el artículo precedente.

Secretarías

Art. 9º — Créanse veintinueve (29) secretarías ante las fiscalías a que se refieren los artículos precedentes.

El personal administrativo, técnico y de maestranza de estas secretarías será cubierto con la dotación de personal de las secretarías de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia, a medida que se vaya produciendo la supresión de éstas, excepción hecha de las que se transformen en secretarías de los juzgados de ejecución penal.

El órgano judicial competente oportunamente dispondrá la reasignación del personal de todas las fiscalías, de modo tal que éstas tengan dotaciones equivalentes de personal.

Defensorías oficiales

Art. 10. — Las defensorías oficiales ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional de la Capital Federal, actuarán ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 11. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción continuarán con la sustanciación de las causas radicadas ante los mismos. Hasta que se instalen los nuevos juzgados que se crean por el artículo 5º, seguirán teniendo dos (2) secretarías.

Juzgados de sentencia

Art. 12. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia de mayores, continuarán con la sustanciación de todas las causas en trámite en las que haya sido contestado el traslado de la acusación por parte de la defensa, hasta su conclusión definitiva, por un término que no podrá superar los seis (6) meses corridos desde la fecha de publicación de la presente ley. Las causas en las que ese acto procesal no se haya producido se remitirán a los juzgados de instrucción correspondientes.

Art. 13. — Transcurrido dicho lapso, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente podrá prorrogar por un término prudencial, las causas pendientes se concentrarán en una (1) de las dos (2) secretarías con las cuales cuenta cada uno de los juzgados de esa clase, a elección del titular.

Art. 14. — Las dotaciones de personal administrativo, técnico y de maestranza correspondiente a las secretarías que, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, resulten edsaffectadas de las funciones que cumplen en la actualidad, pasarán a desempeñarse en las secretarías de las fiscalías que deben actuar ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º.

Art. 15. — Una vez finalizado su cometido, la totalidad de los juzgados de sentencia quedará suprimida y sus titulares designados en cargos equivalentes o promovidos, según corresponda, en tanto que sus dotaciones de personal administrativo, técnico y de maestranza, pasarán a desempeñarse en las secretarías de las fiscalías que deben actuar ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º, hasta satisfacer las necesidades de personal de las mismas, o reasignándose a otros órganos encargados de la aplicación de la ley 23.984, de acuerdo con lo que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente.

Tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal

Creación - Transformación - Integración

Art. 16. — Créase veintinueve (29) tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal.

El tribunal oral restante se integrará de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º, párrafo segundo.

Secretarías - Creación - Integración

Art. 17. — Créanse veintinueve (29) secretarías en los tribunales orales en lo criminal para la Capital Federal. La secretaría correspondiente a la Sala de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que se transforma en tribunal oral en lo criminal, se transferirá con su dotación de personal, a los tribunales orales para la Capital Federal.

Ministerio público fiscal

Art. 18. — Créase treinta (30) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Defensorías oficiales

Art. 19. — Créanse diez (10) defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Creación de Cargos - Transformación

Art. 20. — Créanse ochenta y siete (87) cargos de juez de cámara para los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal. Los tres (3) restantes provenirán de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º, párrafo segundo.

Art. 21. — Créanse veintinueve (29) cargos de juez de primera instancia para los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal que se crean por el artículo 5º.

Art. 22. — Créanse treinta (30) cargos de fiscal de cámara, diez (10) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes, tres (3) cargos de fiscal de primera instancia, veintinueve (29) cargos de secretario de cámara y veintinueve (29) cargos de secretario de primera instancia.

EN LO CORRECCIONAL

Denominación - Creación

Art. 23. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional, letras G, H, I, J y K, se denominarán juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal y se identificarán con los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Créanse cinco (5) juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, que se identificarán con los números 6, 7, 8, 9 y 10.

Secretarías - Traslado

Art. 24. — Los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal números 1, 2, 3, 4 y 5, conservarán dos (2) de las secretarías que actualmente poseen, a elección de los titulares de dichos tribunales. Las restantes secretarías pasarán a integrar, con su dotación completa, los juzgados que se crean por el artículo precedente.

Ministerio público fiscal - Creación - Secretarías

Art. 25. — Créanse diez (10) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal. Créanse diez (10) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el presente artículo.

Defensorías oficiales - Creación

Art. 26. — Créanse cinco (5) defensorías de pobres, incapaces y ausentes, que actuarán ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Causas en trámite

Art. 27. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional remitirán a los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal que se crean por la presente ley, para su tramitación definitiva, las causas radicadas ante los mismos correspondientes a las secretarías que se trasladan conforme al artículo 24.

Respecto de las causas ingresadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial, competente establecerá el mecanismo de distribución equitativa de las mismas.

Creación de cargos

Art. 28. — Créanse cinco (5) cargos de juez de primera instancia, diez (10) cargos de fiscal de primera instancia, cinco (5) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes y diez (10) cargos de secretario de primera instancia.

POLICIA JUDICIAL

Policia judicial - Secretaría - Creación

Art. 29. — Créase la Policía judicial en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal. Créase la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales.

Creación de cargos - Integración

Art. 30. — Créase un (1) cargo de director de Policía judicial, un (1) cargo de secretario de sumarios y asuntos judiciales y quince (15) cargos de secretario de primera instancia. Los restantes treinta y siete (37) cargos de asistentes jurídicos de la prevención se integrarán a medida que se vayan suprimiendo las secretarías de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia de mayores, excepción hecha de los titulares de aquellas que se transfieran a los juzgados nacionales de ejecución penal.

Art. 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José J. Manny.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de Santiago del Estero, con competencia territorial en dicha provincia y con sede en la ciudad de Santiago del Estero.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley tendrá idéntica organización que la de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Art. 3º — Los gastos que demande la presente se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Javier R. Meneghini.

5

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de San Juan, con competencia territorial en dicha provincia, y con sede en la ciudad de San Juan.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley, tendrá idéntica organización que la de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Art. 3º — Los gastos que demande la presente, se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Héctor M. Seguí.

6

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con competencia territorial en dicha provincia, y con sede en la ciudad de Ushuaia.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley, tendrá idéntica organización que la actual Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia con las competencias instituidas en la ley 23.608.

Art. 3º — Los gastos que demande la presente ley, se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Jorge Bericua. — Enrique A. Bischof. —
Raúl E. Rodríguez. — Roque Sánchez
Galdeano.*

7

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de La Rioja, con competencia territorial en dicha provincia, y con sede en la ciudad de La Rioja.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley, tendrá idéntica organización que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en dicha materia.

Art. 3º — Los gastos que demande la presente, se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Raúl A. Galván.

8

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de Santa Cruz, con competencia territorial en dicha provincia y con sede en la ciudad de Río Gallegos.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley tendrá idéntica organización que la de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Art. 3º — Los gastos que demande la presente, se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Angela G. Sureda.

9

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca, con competencia territorial en dicha provincia y con sede en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley tendrá idéntica organización que la de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Art. 3º — Los gastos que demande la presente se ajustarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Oscar A. Catillo. — Jorge A. Agúndez. —
Héctor M. Seguí.*

10

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase la Cámara Federal de Apelaciones de La Pampa con competencia territorial en dicha provincia, y con sede en la ciudad de Santa Rosa.

Art. 2º — El tribunal que crea esta ley tendrá la misma organización que la actual Cámara Federal de General Roca, actuará como tribunal de alzada respecto del Juzgado Federal de Santa Rosa, y conocerá en los supuestos establecidos en los artículos 23, 31 y 32 del Código Procesal Penal, respecto de las causas penales tramitadas en dicho juzgado.

Art. 3º — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia de la presente ley se imputarán al presupuesto del Poder Judicial nacional.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio T. Berhongaray.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créanse dos (2) tribunales orales en lo criminal federal con asiento en Córdoba.

Art. 2º — Créanse en el distrito judicial de Rosario un (1) tribunal oral en lo criminal federal con asiento en la ciudad de Rosario, y uno (1) con asiento en la ciudad de Santa Fe.

Art. 3º — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional C, II, I, J y N, se denominarán juzgados nacionales en lo correccional, y se enunciarán con los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Créanse nueve (9) juzgados nacionales en lo correccional en la Capital Federal, que se enunciarán con los números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que contarán con dos (2) secretarías cada uno.

Art. 4º — Créanse catorce (14) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal.

Créanse catorce (14) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el presente artículo.

Art. 5º — Créanse siete (7) defensorías de pobres, incapaces y ausentes que actuarán ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Art. 6º — Créase una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara ante cada uno de los tribunales orales en lo criminal federal del interior del país, quienes también desempeñarán las funciones que encomiendan los artículos 411 y 413 de la ley 23.984 a los asesores de menores.

Art. 7º — Créanse dos (2) cargos de médico, dos (2) cargos de médico psiquiatra, dos (2) cargos de psicólogo y cuatro (4) cargos de asistente social para el equipo interdisciplinario de los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal.

Art. 8º — Créanse dos (2) cargos de trabajadores sociales, dos (2) cargos de psicólogo y dos (2) cargos de abogado para la integración del equipo interdisciplinario mencionado en el artículo 40 de la ley 24.050, juntamente con el personal administrativo, técnico y de maestranza que le asigne la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 9º — Suprímese en el artículo 55, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación, sancionado por ley 23.984, el siguiente párrafo: "o auto de procesamiento".

Art. 10. — Suprímense en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, sancionado por ley 23.984, las locuciones "de instrucción" o "de competencia criminal".

Art. 11. — Los gastos que demande la instalación y funcionamiento de los órganos que se crean por la presente ley, se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación del ejercicio 1992.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio M. Hernández.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créanse 2 (dos) tribunales orales en lo criminal federal con asiento en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Art. 2º — Los gastos que demande la instalación y funcionamiento de los órganos que se crean por la presente ley, se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación del ejercicio 1992.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Antonio M. Hernández. — Juan P. Cafiero.
— Víctor H. Sodero Nievas.*

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A.M.). — Señor presidente, Honorable Cámara: tengo el honor de informar el despacho...

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado Molinas solicita una interrupción por intermedio de esta Presidencia, señor diputado.

Sr. Hernández (A.M.). — La concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: quiero dejar constancia de que frente a la situación planteada y a la discriminación en cuanto al uso de la palabra, me retiraré del recinto, junto con el señor diputado Bravo, y pasaré por escrito lo que nuestro bloque pensaba decir en favor del proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Puricelli. — Si el señor diputado me permite, desearía formular una aclaración.

Sr. Hernández (A.M.). — No tengo inconveniente alguno, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Puricelli. — Señor presidente: con las debidas disculpas a usted y al señor diputado en uso de la palabra, antes de que se retiren del recinto los señores diputados Molinas y Bravo solicitaría que revieran esa decisión. En lo sucesivo los bloques mayoritarios trataremos de acordar la cantidad de oradores a efectos de que todos puedan expresarse, sobre todo cuando se haga este tipo de acuerdos con tiempo limitado.

El bloque Justicialista realmente ha tenido una gran flexibilidad, pues incluso ha modificado el acuerdo al que se arribó en la reunión de Labor Parlamentaria en aras de que los bloques pudieran expresarse y llevar adelante esta sesión. Por ello, nuestro bloque solicita a los señores diputados Molinas y Bravo que sepan comprender esta situación y revean su decisión de retirarse del recinto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia esperaba no tener que interrumpir nuevamente al señor diputado por Córdoba, pero el diputado Molinas seguramente querrá referirse a lo manifestado por el diputado preopinante.

Sr. Molinas. — Así es, señor presidente.

Creo haber dado muestras de ser de los primeros que llegan a las sesiones y, además, permanezco hasta el final. Acepto el planteo del señor diputado por Santa Cruz, pero dejo constancia de que se pudo ampliar el término de 30 a 40 minutos para que hiciera uso de la palabra un representante del bloque oficialista, pero no hubo posibilidad de extenderlo cinco minutos más para que nosotros expusiéramos acerca de nuestra posición.

Dado que no tenemos como objeto obstruir, vamos a aceptar este temperamento esperando que de aquí en más no se fijen términos perentorios para votar si no se asegura a los representantes su legítimo derecho a brindar su opinión —buena o mala, peor o mejor— sobre cada asunto que se trate. De lo contrario, para quienes leen el Diario de Sesiones podríamos aparecer consintiendo cosas sobre las que podemos no estar de acuerdo.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente, Honorable Cámara: tengo el honor de informar el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia con relación a la implementación del juicio oral penal en el ámbito nacional.

Mis primeras palabras tienen por objeto expresar el reconocimiento merecido a los integrantes de ambas comisiones por la seriedad, la responsabilidad y la probidad con que han desarrollado su trabajo legislativo a fin de alcanzar un alto grado de consenso con relación a esta iniciativa.

Debo destacar que en virtud de la metodología de trabajo de la Comisión de Legislación Penal, que presido, recibimos con fecha 12 de mayo del corriente año al señor ministro de Justicia de la Nación así como también al doctor Casanovas, camarista federal que concurrió en

representación del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; del mismo modo escuchamos al representante del Colegio Público de Abogados, al de la Asociación de Magistrados de la Justicia Federal de esta Capital Federal y a tres profesores titulares de Derecho Procesal Penal de las universidades de Buenos Aires y Córdoba.

El dictamen es el resultado del estudio del proyecto enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo, en conjunto con los proyectos de ley presentados por los señores diputados Agúndez, Manny, Meneghini, Seguí, Bericua y otros, Galván, Sureda, Oscar Aníbal Castillo y otros, Berhongaray, así como del de quien habla y del que también cofirmara con otros señores diputados, teniendo presente además el del señor diputado Sodero Nievas.

No podemos dejar de hacer una breve referencia a la extraordinaria importancia del asunto en consideración. El año pasado y por acuerdo de las fuerzas políticas que integran este cuerpo se sancionó un nuevo Código Procesal Penal y una nueva Ley Orgánica de la Justicia Penal Federal. Pero en cumplimiento del artículo 539 de ese nuevo código se hace menester aprobar esta iniciativa sobre implementación del juicio oral. En consecuencia, resulta necesario que, en virtud de las atribuciones constitucionales consagradas por el inciso 17 del artículo 67 y el artículo 94 de la Carta Magna, el Congreso de la Nación determine la creación de nuevos tribunales. Precisamente esto es lo que estamos haciendo para que el 5 de septiembre, tal como lo prevé aquella norma jurídica, tenga aplicación un sistema que implica una modificación sustancial en el enjuiciamiento penal federal.

A pesar de que pensábamos que este tema estaba de alguna manera agotado porque la República tenía una opinión sumamente laudatoria hacia este cambio procesal, todavía se levantan algunas voces que critican esta decisión que oportunamente adoptó el Parlamento. Reafirmamos, en defensa de aquella sanción legislativa y de esta iniciativa que estamos próximos a sancionar, que con estas leyes vamos a saldar la deuda que tiene el Congreso de la Nación con los mandatos de la Constitución Nacional. En efecto; es cierto que la ley suprema no estableció cómo se debe hacer la persecución penal, lo que quedó diferido al legislador; y en el Código Penal, por medio del artículo 71 se dispuso como principio general que esa responsabilidad está a cargo del Estado, con algunas excepciones.

Pero lo que no se puede sostener es que la Constitución no estableció algunos principios generales en cuanto a las formas del juicio penal. El artículo 1º fijó el sistema republicano;

el 18 hizo lo propio con los grandes principios de las garantías procesales; y a través de los artículos 24, 67 —en su inciso 11— y 102 se fijaron las bases para el juicio penal: de tipo oral, público y contradictorio, con la idea de que pudiésemos superar las rémoras del pasado, materializadas por medio de un procedimiento inquisitivo, propio del Estado absoluto.

El Congreso de la Nación instrumentó esta normativa constitucional por medio de la sanción de un proyecto de ley en el año 1871, en que se facultó al Poder Ejecutivo nacional a designar dos especialistas para que redactasen un proyecto que estableciera el juicio por jurados y el código procesal respectivo. El presidente Sarmiento designó a los juristas Florentino González y Victorino de la Plaza, quienes en 1873 presentaron su proyecto. Dicha iniciativa no tuvo sanción y aunque posteriormente se presentaron distintos proyectos a lo largo de la historia argentina, ninguno de ellos tampoco alcanzó la sanción legislativa, lo que recién ocurrió el año pasado.

Mientras tanto ha existido un proceso inquisitivo materializado en un código de procedimientos en lo penal sancionado en 1888. Este siguió los lineamientos del viejo código de procedimientos español, que sin embargo ya había modificado en 1882. Luego vino la intentona de Tomás Jofré y posteriormente, desde Córdoba, nació la respuesta constitucional adecuada.

No puedo dejar de señalar aquí los fundamentos expuestos por los doctores Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler cuando presentaron el proyecto de código de procedimientos en materia penal para la provincia de Córdoba, en consonancia con esta línea argumental que vengo sosteniendo, en pro de una correcta armonía con los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional.

Dijeron estos dos grandes juristas: "Es realmente curioso que por medio del ordenamiento procesal hayan sobrevivido formas jurídicas no solamente discrepantes, sino hasta contradictorias con el régimen político establecido, rindiéndose con ello un homenaje inexplicable a la vieja legislación esauñola, que la propia España había ya abandonado seis años antes de que nuestro código se sancionara. Ello pone muy en claro que el código vigente es más bien fruto de la inercia de la práctica que de la crítica doctrinaria, de la comparación legislativa y del propósito de dar vigencia real a los preceptos constitucionales."

Ese rumbo marcado por la legislación cordobesa fue seguido sucesivamente por otras provincias argentinas: San Luis, Santiago del Este-

ro, Mendoza, La Rioja, Jujuy, Salta, Catamarca, La Pampa, Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Ello significa que una vez más tenía razón Juan Bautista Alberdi, cuando decía que la parte más rica de nuestro derecho público era la del derecho provincial.

En ésta como en otras materias, la adecuación a los modernos principios del enjuiciamiento penal partió siempre desde el derecho público provincial, mientras en el orden federal nosotros no dábamos la condigna respuesta que habían indicado con claridad los constituyentes de 1853.

Esto sólo abona la importancia de lo que hoy vamos a sancionar para dar respuesta a los grandes principios constitucionales. Pero queremos decir con claridad, frente a algunas voces que todavía escuchamos, que no vamos a caer en la soberbia racionalista de pensar que porque se establece un nuevo código de procedimientos penales la administración de la justicia penal en el orden federal va a cambiar inmediatamente.

Sabemos que este es un problema considerablemente más serio y complejo. Reflexionamos sobre eso con la seriedad y la importancia que corresponde a los representantes del pueblo de la Nación. Pero aun así el nuevo código constituye un indisimulable avance. Ya hablaremos de algunos condicionamientos que existen para que tenga suficiente éxito.

Sabemos que existe una enorme lentitud en la justicia penal. Cuando fuimos a visitar la cárcel de Caseros con otros miembros de la Comisión de Legislación Penal nos encontramos con la exasperante realidad de que había un procesado desde 1983, otro desde 1985, otro desde 1986 y decenas desde los años 1987, 1988 y 1989. Esto muestra la extraordinaria lentitud con que están actuando la justicia federal y la ordinaria de la Capital Federal. Y sabemos que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana.

También tenemos conocimiento de que existe una falta de infraestructura material y humana. Sabemos que hay una inadecuada formación profesional por parte de jueces, abogados y empleados que tienen que ver con la administración de justicia, y conocemos que todo esto está relacionado con la grave situación que viven la educación argentina y nuestras universidades.

A todo ello hay que agregar otro problema considerablemente más difícil y complejo, cual es el de la existencia de una profunda crisis de fe en el derecho por parte de los argentinos. Esto es el resultado de enormes frustraciones institucionales y también tiene que ver con los comportamientos individuales y sociales. Todos

sabemos que padecemos de un profundo individualismo que se trasunta en el orden social y que hay una presencia corporativa en la sociedad argentina. Todos sabemos que padecemos de una mala memoria colectiva y que falta un criterio de solidaridad en los comportamientos individuales y sociales.

Naturalmente, todo esto tiene que ver con el sistema penal argentino porque es una parte de la política social de la República. Por ello, queremos decir que estamos efectuando un avance muy importante, pero pensamos que el resultado se verá a lo largo de los años, cuando cada uno ejercite la responsabilidad que le incumbe en esta materia.

Hay una serie de condicionantes relativos al éxito futuro de la implementación del juicio oral. Esperamos que el Ministerio de Justicia haya tomado todas las medidas necesarias para la correcta instrumentación de los tribunales en los aspectos materiales y humanos.

Queremos resaltar la necesidad de que el Congreso se defina próximamente con respecto a dos cuestiones. En primer lugar, la implementación del sistema del proceso a prueba, con el fin de aligerar cuanto antes el funcionamiento que tendrán estos tribunales orales. En segundo lugar —y lo señalamos con toda firmeza en nombre de la Unión Cívica Radical—, la necesidad de la definición correcta de la ubicación institucional del ministerio fiscal.

Conforme a la mejor tradición jurídica argentina, a claros principios republicanos y a principios inexcusables del estado de derecho, es fundamental asegurar la independencia del ministerio público fiscal. Sabemos que por los artículos 196 y concordantes del nuevo Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación existe la posibilidad de delegación de facultades instructorias en los fiscales a los fines de averiguación de la verdad. A tal objeto y para asegurar una correcta aplicación de la ley penal sustantiva y perfilar con nitidez el sistema republicano emergente de las mejores tradiciones argentinas y de nuestra Constitución Nacional, es esencial que este Congreso en base a proyectos que se han presentado al respecto —recuerdo el de los señores diputados Vanossi y Gauna— produzca una definición sobre la correcta ubicación del ministerio público, estableciéndosela entonces dentro del Poder Judicial de la Nación, alejado de cualquier tipo de suspicacias o de presiones por parte del Poder Ejecutivo nacional.

Decimos esto en un momento especial de la vida argentina, donde naturalmente pensamos que existe una profunda crisis espiritual y donde también están afectados los valores republicanos.

La tercera cuestión verdaderamente trascendental que debe definirse, es lo señalado anteriormente por el presidente de nuestro bloque como posición política del radicalismo: el acuerdo político logrado con los senadores de la Nación en cuanto a la forma de designación de los jueces.

Quiero decir ante esta Cámara que el miércoles 5 de agosto próximo pasado en dependencias del Senado de la Nación nos reunimos el presidente provisional de ese cuerpo, doctor Eduardo Menem, los señores presidentes de los bloques Justicialista y radical de la Cámara alta, doctores Alberto Rodríguez Saá y Adolfo Gass y los señores diputados de los bloques Justicialista, Jorge Matzkin y Marcelo López Arias, y radical, Héctor Seguí, Jorge Agúndez, Daniel Salvador y quien habla. En ese encuentro se acordó en primer lugar que se iba a dar a publicidad la nómina de los pedidos de acuerdo en los correspondientes boletines del Senado; en segundo término, que la comisión senatorial de acuerdos podía citar, a pedido de un solo señor senador, a cualquiera de los candidatos a ser designados como magistrados de la República; y en tercer lugar, que se iba a modificar el artículo 22 del reglamento de la Cámara alta a los fines de que como regla general sean públicas las sesiones, con la posibilidad de que luego pasen a ser secretas si así lo resuelve su Comisión de Labor Parlamentaria, en la cual cada bloque tiene igual poder de voto.

Quiero destacar el significado de estas modificaciones al reglamento del Senado. Se trata de algo que vamos a lograr después de 115 años. Fue precisamente en aquellos tiempos de 1877, cuando las sesiones, de acuerdo con el mejor espíritu de la Constitución Nacional, eran públicas en el Senado, que fue informado un proyecto por el señor senador Domingo Faustino Sarmiento, que proponía que las sesiones pasasen a ser secretas. En esa oportunidad el proyecto fue apoyado por el señor senador Aristóbulo del Valle. El centro de los argumentos esgrimidos en aquella oportunidad pasaba por sostener que si las sesiones eran públicas se podía lesionar la persona de los futuros magistrados judiciales. La tesis republicana fue argüida por los señores senadores Torrent y Cortés. Conviene recordar que uno de los argumentos de Sarmiento y Del Valle a favor del proyecto, basado en que el Senado de los Estados Unidos realizaba sesiones secretas en esta materia, fue superado por el transcurso de los acontecimientos. En 1929 el Senado de los Estados Unidos cambió su reglamento y las sesiones pasaron a ser públicas, forma que se consustancia

más con el espíritu republicano, la claridad y la transparencia, que constituyen principios esenciales de nuestra Constitución Nacional.

Acompañado por quince señores diputados de mi bancada tuve oportunidad de presentar un proyecto de declaración a esta Cámara donde se señalaba precisamente que se vería con agrado que el Senado de la Nación modificase el artículo 22 de su reglamento. Asimismo destaco que el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical acompañó a su titular, el doctor Adolfo Cass, en la presentación de un proyecto que apunta precisamente a la modificación de dicho artículo.

Confío en la hidalguía parlamentaria y estoy convencido de que el peronismo va a dar una muestra en ese sentido apoyando la modificación del reglamento en el Senado de la Nación. Este fue el criterio institucional que sostuvo la Unión Cívica Radical, no sólo en esta Cámara sino también en el diálogo político.

Sr. Fescina. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Hernández (A. M.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — Señor presidente: simplemente deseo complementar la excelente reseña histórica que está haciendo el señor diputado por Córdoba con referencia a la modificación del reglamento de la Cámara de Senadores respecto de las sesiones secretas para el acuerdo en los pliegos de los señores jueces. En el año 1990 el bloque del Partido Federal presentó un proyecto en el mismo sentido al que se ha referido el señor diputado Hernández, que tuvo aprobación unánime de esta Cámara y que está a consideración del Senado desde el año 1991.

Como una acotación anecdótica a la referencia detallada y puntual que el señor diputado Antonio María Hernández hace de la vocación de Domingo Faustino Sarmiento para modificar el reglamento interno de la Cámara de Senadores y transformar de esta forma las sesiones públicas en secretas, quiero destacar —porque así lo registran los diarios de aquel entonces, entre ellos "La Nación"— que en esas reuniones se iba a tratar entre otras cosas el pliego de ascenso del coronel Sarmiento al generalato, lo cual él pretendía. Según sugiere la información periodística de aquel tiempo, ésta fue una de las causas que motivaron la iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: para nosotros hay otra condición trascendente para asegurar el éxito de esta nueva forma de enjuiciamiento penal. Tiene relación con lo que mencionábamos sobre la modificación del reglamento del Senado a fin de buscar una mayor transparencia en la designación de los magistrados. Es la necesidad que la República tiene de tener muy buenos jueces.

Sr. Albamonte. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Hernández (A. M.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: en general no es mi costumbre interrumpir a los señores diputados, sobre todo cuando se está haciendo una reseña histórica con tanta coherencia. Pero aquí se ha hecho una afirmación con la que yo quisiera dejar sentada mi discrepancia. Creo que la actitud de Domingo Faustino Sarmiento fue suficientemente fundamentada con respecto a que esa discusión previa fuera secreta cuando se trataba no solamente de observar las capacidades profesionales, sino también las humanas y personales de aquellos que iban a ser magistrados de la Nación. Todo esto ha sido motivo —y continúa siéndolo hoy— de distintas discrepancias.

Lo que ha señalado el señor diputado Antonio María Hernández es cierto y positivo. De alguna manera esta absoluta libertad de prensa de la que afortunadamente gozamos los argentinos, a veces nos lleva a menoscabar la dignidad de las personas.

Las razones para que la sesión en la que se designe jueces sea secreta han sido bien fundamentadas por Sarmiento, a pesar de que sus detractores pudiesen haber imaginado alguna causa espuria en su posición. Sin embargo, quiero dejar sentado que todavía está vigente la postura de Sarmiento, a punto tal de que en la comisión se debatió este tema y hay legisladores que piensan como él.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: como consecuencia de la intervención del señor diputado Albamonte aprovecho la oportunidad para manifestar que, en efecto, tengo un absoluto respeto no sólo por la persona de Domingo Faustino Sarmiento— a quien considero un prócer esencial de la argentinidad— sino tam-

bién por las ideas expuestas en aquel momento, porque en verdad se trató de un debate muy importante el que se produjo en el Senado de la Nación.

El hecho de que con el transcurrir del tiempo o por circunstancias propias que vive hoy la República tengamos una visión distinta, no significa que como hombres de la democracia no podamos manifestar una opinión discrepante. Nos manejamos con la prudencia del caso, porque de ningún modo nos podemos creer depositarios de la verdad.

La democracia se basa, entre otras cosas, en una cierta relatividad, porque se parte del hecho de que la mayoría debe respetar siempre a las minorías y, en definitiva, la búsqueda de consenso posibilita que haya opiniones discrepantes. Con lo expuesto dejo a salvo mi visión personal en este sentido.

Sr. Maqueda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Hernández (A. M.). — Sí, señor diputado,

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: agradezco al señor diputado Antonio María Hernández que me haya concedido esta interrupción, porque no quería pasar por alto este momento en el que se ha tratado el importante tema de la designación de más de 200 jueces por un sistema hasta hoy inédito en el Senado de la Nación.

He oído al señor diputado Albamonte expresar que muchos legisladores comparten el secreto del que se ven rodeados los acuerdos que presta el Senado para la designación de los jueces, como consecuencia del reglamento que modificara Domingo Faustino Sarmiento.

Tengo mucho respeto por las opiniones ajenas, pero fundamentalmente debemos aclarar cuáles son los principios que rigen la vida republicana, y en ello adhiero a lo que decía el señor diputado Antonio María Hernández. La publicidad de los actos de gobierno es la regla principal en el sistema. El sigilo, el secreto es exactamente la excepción. Esto está receptado en casi todos los reglamentos.

Lo manifestado no significa un demérito a la persona de Domingo Faustino Sarmiento, quien en aquel momento habrá tenido razones suficientes para reformar el reglamento del Honorable Senado, razones que desconocemos porque no fueron explícitamente volcadas, más allá de la historia que hoy nos acercara el señor diputado Fescina.

Debemos saludar al Honorable Senado de la Nación por haber accedido a levantar el secreto en los acuerdos para la designación de jueces.

Esperamos que así como el derecho público provincial nos marcó el camino para que conociéramos las bondades del juicio oral y público en materia criminal, la decisión adoptada por el Honorable Senado tenga carácter permanente, plasmándose en una reforma del reglamento de ese cuerpo, y que este ejemplo de la Nación sea tomado por las provincias, ya que en Córdoba como en otros estados provinciales el secreto sigue siendo la característica en la prestación de los acuerdos para la designación de los magistrados y funcionarios judiciales.

Debemos celebrar la decisión adoptada por el Honorable Senado porque la publicidad de los actos de gobierno —que debe ser la regla y no la excepción— no debe herir ni mansillar el honor y la intimidad de las personas, ya que sólo se trata de poner en conocimiento de los hombres y las mujeres del llano el nombre de aquellos que los van a representar en la más amplia expresión de la magistratura, nada menos que en la función de juzgar la conducta de los ciudadanos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez.

Sr. Maqueda. — Por las razones expuestas apoyamos —al igual que lo ha hecho el señor diputado Antonio María Hernández— y saludamos la actitud tomada por el Honorable Senado de la Nación, que se ha manifestado a favor de la reforma de su reglamento. Asimismo esperamos que dicha modificación no se circunscriba sólo a este acto de designación de más de 200 jueces sino que tenga carácter permanente, a fin de que la publicidad de los actos de gobierno sea una realidad del sistema democrático argentino.

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: decíamos que existe otra condición para la correcta implementación y futuro de este nuevo procedimiento penal en el orden federal. Con esta medida el Congreso cumple con sus responsabilidades. Posteriormente lo deberá hacer el Poder Ejecutivo y luego le llegará el turno al Poder Judicial de la Nación. Es esencial la calidad de los jueces.

El formidable intelectual argentino Juan Bautista Alberdi decía en sus Bases: “La ley, la Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no se

reducen a hechos por la mano del juez, que en último resultado es quien los hace realidad o mentira." Por ello es fundamental la calidad, probidad y jerarquía intelectual y moral de los futuros jueces de la República.

Traigo a la reflexión de los señores legisladores una frase pronunciada para otra realidad pero que también es aplicable a la Argentina. Apelo a la autoridad de Bertrand de Jouvenel, quien sostenía: "La Justicia de que hoy se habla no es ya una virtud del alma: es un estado de cosas. La palabra no sugiere ya al espíritu una cierta manera de ser de los hombres, sino una cierta configuración de la sociedad; no se aplica ya a actitudes personales, apunta hacia ordenaciones colectivas.

"Las ilusiones que se sustentan desembocan lógicamente en el absurdo de una sociedad donde todo será justo sin que nadie tenga que serlo." Esto lo decía en su libro *La soberanía*, publicado en 1957, pero tiene directa relación con los días que vivimos.

Hay que preguntarse, conforme al estado de nuestra cultura política y jurídica, qué grado de cumplimiento de justicia hay en el orden individual y en el personal, no sólo de los magistrados sino también de los ciudadanos.

A la República —como decía Montesquieu— le hacen falta actitudes de ejemplo espiritual y en este sentido es esencial la tarea que deben desarrollar los magistrados. Confiamos en que estos jueces sepan hacer realidad los grandes principios de este nuevo enjuiciamiento penal.

A modo de consideración personal, deseo señalar que todavía estamos en deuda con el espíritu del constituyente de 1853. A la República le hace falta el juicio por jurados. Repito que lo digo a título personal, pero es un mandato expreso de nuestra Constitución Nacional y se vincula directamente con el sistema republicano y con el acercamiento de la justicia al pueblo. Adelanto que presentaré un proyecto sobre esta materia.

Este avance procesal es parte incuestionable de la política en materia criminal que lleva adelante el Estado, que a su vez es parte de su política social. Estamos convencidos de que el desafío de la democracia consiste en lograr el equilibrio entre el valor de la seguridad y el valor de la libertad. Este es no sólo el mandato del estado de derecho, sino que también es la indicación precisa marcada por la evolución constitucional de los países más avanzados del mundo.

Ese es el gran desafío y con esta iniciativa estamos dando un firme paso adelante.

Seguidamente efectuaré una síntesis de lo que significa en sí mismo este proyecto. Contiene dos

capítulos, 94 artículos y 10 anexos que agregaremos a continuación. La técnica legislativa consistió en distinguir todo lo vinculado con la creación de tribunales en los 94 artículos, a lo cual se suman algunas reformas tanto a la ley 23.984, sobre nuevo Código de Procedimientos Penales, como a la 24.050, Ley Orgánica del Poder Judicial en Materia Penal de la Nación. La determinación cuantitativa de los cargos a crear se encuentra precisamente en cada uno de los anexos que he mencionado.

El Poder Ejecutivo, tal como se indica en los fundamentos, llevó a cabo un estudio empírico de las realidades de la justicia de la Capital Federal, y específicamente estudió dos sistemas orales en materia procesal penal: los correspondientes a las provincias de Córdoba y Mendoza.

Luego de la síntesis del proyecto contenido en el presente dictamen corresponde hacer referencia a la forma en que fue enriquecido el proyecto del Poder Ejecutivo por distintas iniciativas presentadas por los señores diputados a las que hice referencia con anterioridad. Estos aportes han otorgado a la norma un sentido muy especial de carácter federal.

Entonces, yendo a la síntesis del proyecto contenido en el dictamen, en el capítulo I se hace referencia a la justicia federal en materia procesal penal. Con respecto a la Cámara Nacional de Casación Penal se crean cuatro salas de tres miembros cada una. Ya veremos que la comisión agregó una sala más a la iniciativa originaria, con competencia para el artículo 445 bis del Código de Justicia Militar.

Con respecto a los tribunales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal se conserva su denominación e integración. Es decir la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional continúa con dos salas de tres miembros cada una. Se conserva la composición de doce juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional federal.

Se crean seis tribunales orales con seis secretarías y con seis fiscalías de cámara, y una defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara.

Con respecto a los tribunales en lo criminal y correccional federal del interior del país se mantienen los juzgados federales actuales. Lo propio ocurre en cuanto a las cámaras federales de apelaciones del interior del país. Recordemos que al respecto hay quince distritos creados por ley. Se crean diez tribunales orales para que comiencen a funcionar en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta y Tucumán. Asimismo se crean cinco tribunales

orales en el distrito de San Martín; dos en Córdoba; dos en Rosario; dos en La Plata y uno en Santa Fe.

Se transforma una sala de la Cámara de Mendoza en un tribunal oral. Se crean veintituna fiscalías de cámara y una defensoría por cada tribunal oral. Además, se crea un tribunal oral en cada una de las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que entrarán a funcionar no más allá del 1º de abril de 1993. Estos tribunales no estaban previstos en el proyecto original.

El capítulo II trata sobre la justicia de la Capital Federal. Con relación a los tribunales nacionales en lo criminal y correccional, se mantiene la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde quedan cinco salas y un presidente. O sea que se lograron dos salas más y el mantenimiento de la presidencia, que hoy existe. Las otras dos salas se transforman en tribunales orales.

Con respecto a la justicia en lo criminal, en la justicia nacional en lo criminal de instrucción se transforman veinte juzgados de sentencia en veinte juzgados de instrucción, que se suman a los veintinueve juzgados de instrucción que ya existen. Por lo tanto, los juzgados de instrucción serán cuarenta y nueve; o sea, diez más de los treinta y nueve previstos en el proyecto del Poder Ejecutivo. Se crean veintitrés fiscalías más, que junto a las veintiséis existentes, sumarán cuarenta y nueve.

Con respecto a los tribunales orales se crean treinta tribunales orales con treinta fiscalías y diez defensorías de pobres, incapaces y ausentes, lo cual significa incuestionablemente una respuesta muy importante a la justicia de la Capital Federal.

Con respecto a la justicia en lo correccional, se crean nueve juzgados nacionales en lo correccional, que se suman a los cinco ya existentes, es decir, un total de catorce contra los diez contemplados en el proyecto del Poder Ejecutivo. Se crean catorce fiscalías —cuatro más que en el proyecto original— y siete defensorías de pobres, incapaces y ausentes contra una sola del proyecto original.

Con respecto a la justicia de menores, siete actuales juzgados de instrucción, sentencia y correccional se transforman en siete juzgados de menores; se crean siete fiscalías y una defensoría ante ellos. También se crean tres tribunales orales de menores con tres fiscalías y una defensoría. Se crean cuatro asesorías de menores —el proyecto original contemplaba sola-

mente dos— y tres equipos interdisciplinarios contra solamente uno previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Cada equipo interdisciplinario estará integrado por un médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil, un psicólogo y dos asistentes sociales.

En relación con la justicia en lo penal económico se mantienen los ocho juzgados existentes con dos secretarías, pero se crean cuatro fiscalías más, que se suman a las cuatro existentes y seis cargos de peritos contadores, no previstos en el proyecto original.

Con respecto a la Cámara en lo Penal Económico, una de sus salas se integrará con tres jueces, y las otras dos se transformarán en tribunales orales; en definitiva, habrá cuatro tribunales orales con cuatro fiscalías y dos defensorías ante ellos.

En lo que se refiere a la justicia de ejecución penal, se crean tres juzgados nacionales con una secretaría cada uno de ellos para la Capital Federal, con dos equipos interdisciplinarios. En el interior del país, las funciones las ejercerá un juez del tribunal oral respectivo, con apelación ante la cámara federal del distrito y una secretaría para cada establecimiento penal.

Se mantiene un juzgado penal de rogatorias. Se crean dos cargos de procurador fiscal ante la Procuración General de la Nación. Por otro lado, se crean la Dirección de Policía Judicial, la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales y cincuenta y dos cargos de secretarios para que actúen en las comisarias como asistentes jurídicos de la prevención.

En la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas y Testigos se crea un cargo de director, y se incorpora a su equipo interdisciplinario dos cargos de abogados que no existían en el proyecto original. Ello se implementará mediante designaciones o convenios en el resto de las provincias argentinas conforme a un criterio federal que nosotros tenemos que defender.

En el cuerpo de médicos forenses se crean seis cargos de médicos en esa especialidad, dos de médicos anatomopatólogos, dos de peritos químicos y uno de odontólogo. Cabe aclarar que éstos no se hallaban contemplados en el proyecto original.

Mediante los artículos 88 y 89 se modifican tanto el Código de Procedimientos Penal de la Nación como la ley orgánica en aspectos que analizaremos en oportunidad del debate en particular.

Finalmente, el artículo 90 atribuye a los nuevos tribunales orales que tendrán su asiento en las once provincias que en la actualidad no cuen-

tan con ellos, tanto la competencia del juicio como la que en otras provincias tienen las cámaras de apelaciones.

A continuación vamos a destacar en forma sintética cuál no ha sido el sentido de los cambios introducidos a raíz de las distintas iniciativas de los señores diputados que desde mi punto de vista, han significado un mejoramiento sustancial del proyecto.

Conforme con la enumeración realizada, destaco la creación de una sala más en la Cámara de Casación Penal. Ello apunta, precisamente, a dar una respuesta eficiente a la cantidad de más de 1.200 causas que existen en materia militar. También destaco la creación de estos once tribunales orales en las once provincias que no tenían, según el proyecto del Poder Ejecutivo, un tribunal oral. Eso significa una solución para estas provincias donde iban a actuar tribunales ambulatorios, lo cual representaba desde nuestro punto de vista —este fue un criterio unánime de la comisión— que no se daba la mejor respuesta constitucional teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Nacional. Esta norma constitucional determina un claro principio de inmediatez en materia de enjuiciamiento penal. Parte del aforismo romano *forum delicti commisi*. Para asegurar una correcta averiguación de la verdad y de la aplicación de la ley penal, y una mejor aplicación de los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa, era necesario que, al menos, existiera en estas provincias un tribunal oral.

Esta es también una respuesta federal a una iniciativa que se presentaba con un criterio netamente centralista, pues como somos representantes del pueblo sabemos que el Estado federal es un mandato que emerge no sólo del Preámbulo de la Constitución Nacional sino también de una serie de normas categóricas de la Ley Fundamental como son los artículos 1º, 5º, 6º, 13, 31, 46, 104 y siguientes hasta el 110 y concordantes. El federalismo es en definitiva una forma de vida que proviene de nuestra historia y garantiza una estructura social descentralizada, democrática y eficiente.

De modo sintético he expresado el aporte esencial de los proyectos presentados por los señores diputados a los que he mencionado anteriormente.

Además, se mantiene la estructura de la Cámara Federal de Córdoba. Y este tema lo vamos a analizar en particular oportunamente porque las estadísticas de trabajo nos indican la necesidad de esta solución.

En la provincia de Santa Fe se crean, además de dos tribunales orales en la ciudad de Rosario,

uno en la de Santa Fe. Esto es el resultado de conversaciones llevadas a cabo con magistrados federales de la cámara de ese fuero de la ciudad de Rosario, y con diputados nacionales provenientes de esa provincia. Conocimos además la opinión del Colegio de Abogados de Santa Fe, que a toda costa y para salvar los criterios de eficacia, federativo y de descentralización pugraban por la creación del tribunal oral en la ciudad de Santa Fe.

Hemos creado dos tribunales orales más en el distrito de San Martín de la provincia de Buenos Aires. Son cinco frente a los tres iniciales del proyecto, porque sabemos que ese distrito es el más grande de la provincia, con cerca de 11 millones de habitantes.

Se dota de un defensor oficial a cada tribunal federal con asiento en las provincias a los fines de asegurar un correcto servicio de defensa pública y evitar un retraso en la tramitación del juicio.

En la Capital Federal se mantienen dos salas de la Cámara del Crimen más de las previstas originalmente, en atención a la lentitud que existe en la administración de justicia. También se mejora la estructura de la justicia de instrucción.

Se mejora la dotación de la justicia correccional habida cuenta de que tenemos que prevenir un posible desborde de su capacidad de respuesta. Lo propio podemos decir con respecto a la dotación general de la defensa pública y de las dotaciones vinculadas a las estructuras de apoyo al servicio de justicia —como lo son los equipos interdisciplinarios que van a actuar ante los juzgados de ejecución penal y ante la oficina de asesoramiento a las víctimas y testigos—, el cuerpo médico forense y el cuerpo de peritos contadores para el fuero penal económico.

Esta es una síntesis del aporte que hemos hecho los señores diputados, que ha dado como resultado un mejoramiento significativo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Estamos convencidos de que enriquecemos sustancialmente la estructura del enjuiciamiento penal en el orden federal. De esta forma, cumplimos con nuestra responsabilidad legislativa. No obstante, sabemos que esto no va a traer rápidamente un cambio como el que nosotros deseamos. No obstante, hemos hecho el esfuerzo patriótico requerido por las circunstancias para dar una respuesta que consideramos la mejor posible frente a las carencias económicas por las que debemos atravesar y frente a este requerimiento especial de justicia que hoy hace la sociedad argentina.

En consecuencia, solicito la aprobación de este dictamen de las comisiones de Legislación

Penal y de Justicia, señalando con una frase de un clásico de la Grecia antigua cuál es la opinión y el sentido que nos embarga a quienes hemos suscrito el dictamen en tratamiento. Decía Isócrates que "los buenos políticos no deben llenar los pórticos de inscripciones, sino tener la justicia en sus almas". (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: estamos frente a una fecha trascendente que inscribimos en el marco de la organización constitucional del Poder Judicial de la Nación. Pensamos que en sustancia es la respuesta que los justiciables del país esperan desde hace muchos años —desde el nacimiento de nuestra patria— para que este valor justicia —el que alimenta cotidianamente la independencia del Poder Judicial— pueda ser asimilado como un valor insustituible por todos los ciudadanos, sirviendo así para fortalecer el sistema democrático de gobierno y las instituciones republicanas.

Por eso nos parece oportuno poder introducirnos en el tema rindiendo homenaje a la escuela procesal de Córdoba, que tuvo en su tiempo y en su hora, hace cuarenta años —nada menos—, la virtud de predicar y llevar adelante la nueva organización procesal penal de la República.

Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de mencionar —y ésta es la palabra del miembro informante del oficialismo— la titánica tarea del doctor Ricardo Levene en esta materia. Por eso pensamos —como juristas y como hombres del derecho penal— que nada mejor y más oportuno que rendir homenaje en vida a quien hoy preside la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por todo lo que ha dado al país y, fundamentalmente, por todo lo que representa su obra doctrinaria y su tarea concreta en el proyecto de Código Procesal Penal que aprobó este Congreso y cuya implementación hoy estamos culminando.

Quiero destacar también el compromiso de nuestro gobierno nacional, el gobierno justicialista, que tuvo la decisión política de hacer coincidir proyectos diferentes y aparentemente contrapuestos e irreconciliables, unificándolos en una sola doctrina que se refleja en el Código Procesal Penal y también en la ley orgánica de la justicia penal dictada con anterioridad.

Hemos avanzado en un concepto amplio de coincidencias. No hemos estado sujetos a los viejos y arbitrarios cánones que se trasplantaban desde afuera sino que durante 40 años hemos aprendido de nuestros propios tratadistas y de nuestra propia doctrina. Hemos aprendido de la experiencia de todas las provincias argentinas

que adoptaron el proceso oral y lo llevaron a la práctica eficazmente. Hemos ponderado en el pragmatismo y en la evaluación sustancialmente las experiencias de Córdoba y de Mendoza, sin dejar de nombrar a La Pampa y a Corrientes, que tienen una rica doctrina y jurisprudencia de las que se ha nutrido nuestra labor cotidiana de abogados y juristas.

En honor a ese gran hombre del proceso penal, que es el doctor Ricardo Levene, me voy a permitir reproducir aquí sus conceptos, que sintetizan lo que significa el proceso penal y lo que implica el cambio sustancial de instituciones que vamos a experimentar a partir del 5 de septiembre próximo: la publicidad del sumario para las partes; la amplia defensa del imputado; la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y continuidad del juicio. También la aplicación de la regla de la sana crítica para la valoración de las pruebas; la institución de tribunales colegiados en única instancia para las cuestiones de hecho, de derecho, y también para resolver los recursos cuando el fundamento se sustanciare precisamente en cuestiones de derecho; las máximas garantías para la libertad y el honor de las personas; la tutela del patrimonio y los bienes fundamentales de toda persona que llegue a estar vinculada con el proceso penal y fundamentalmente la seguridad, la rapidez, la economía, la eficacia del servicio de justicia para los justiciables. Porque de esto se trata: de cambiar las instituciones para que la justicia llegue a tiempo, para que llegue oportunamente y para que se termine la prédica a veces injuriosa, a veces aberrante, de aquellos que con o sin malicia procesal nos llevan a poner en tela de juicio las instituciones sagradas de la justicia, que es lo más sublime que tiene nuestro sistema democrático y republicano de gobierno.

Con esta inteligencia hemos aprobado el trabajo parlamentario en las comisiones. Es cierto que hemos introducido reformas importantes al proyecto originario del Poder Ejecutivo. Pero esto no significa negar las bondades de esa iniciativa.

Es cierto que hemos modificado organismos indispensables y necesarios para poder administrar justicia, como decíamos recién, oportunamente, pero no hemos desvirtuado los principios que rigen la economía y las necesidades del país. Por el contrario, hemos consensuado una adecuación de lo que es urgente y necesario instituir en el presupuesto de 1992 y lo que podemos trasladar sin conflictos al presupuesto del año próximo.

De esta manera hemos cerrado la ecuación de necesidad política del cambio institucional con

la necesidad económica de racionalizar el manejo de los recursos, para que todos los habitantes del país y todas las provincias argentinas puedan disfrutar del cumplimiento del precepto establecido por el artículo 102 de la Constitución nacional, con un sistema que se aproxima bastante al ideario del constitucionalismo de 1853.

Es cierto que no estamos aplicando la institución nacional, con un sistema que se aproxima a nuestra doctrina aún no lo han incorporado y arraigado. Hemos rescatado de la historia, del debate y de los aportes en la materia lo que tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo y por ende con lo que puede y deberá servir naturalmente al pueblo argentino a través del nuevo proceso.

Hemos presentado, luego de dos meses de debate, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, lo que consideramos era el *alma mater* del nuevo proceso de implementación, mas no hemos cesado en nuestra tarea de juristas y parlamentarios en el sentido de corregir lo que se debe corregir y rectificar a tiempo lo que corresponda, porque las cosas deben salir de la Cámara no solamente moderadas por el consenso sino técnicamente pulidas para la aplicación e interpretación que los señores magistrados y abogados harán en el futuro a partir de lo que nosotros resolvamos aquí.

Por eso, sin quebrar el principio de lealtad parlamentaria, estamos en condiciones de seguir batallando por el perfeccionamiento de la norma hasta que se vote el último artículo.

Hemos evaluado convenientemente nuestra responsabilidad frente a la coyuntura política que vive el país y a lo que significa el nuevo proceso para la Argentina. No hemos evadido la discusión ni queremos hacerlo en orden a las subjetividades que determinadas normas pueden significar a juicio de algunos señores legisladores. Más bien, las presentamos a consideración en la discusión amplia en el recinto para que aquí la cuestión sea lo más transparente posible.

Nos queremos ir del debate con la conciencia tranquila; aquí no hay nadie que pueda sentirse dueño de la verdad pero todos tenemos el deber de expresar en términos claros, prístinos, a la consideración pública lo que significa cada artículo y cada institución que creamos. Y digo esto adelantándome a los comentarios manifiestos, trascendentes y conocidos de los que quieren sacar resultados políticos del debate sobre las instituciones jurídicas del país.

Nosotros no queremos sacar resultados políticos sino crear instituciones que sirvan a los procesados, imputados y acusados de los proce-

sos en trámite y de los procesos futuros para que puedan recibir el debido proceso legal en toda su magnitud, en la magnitud constitucional, para que no puedan ser apartados arbitrariamente de los jueces naturales, para que tengan la garantía de ser oídos con el asesoramiento del abogado y para que todo aquel resabio escrituralista e inquisitorio del viejo código sea archivado. No hay medias tintas ni cuestiones ocultas que puedan presentarse a consideración de los señores legisladores en este debate.

Cierto es que la precisión no solamente está referida a las instituciones procesales sino que está vinculada con otras cuestiones adicionales y complementarias no menos trascendentes. Para ello nosotros debemos afinar nuestra opinión y nuestra decisión, en lo que constituye la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —al menos lo entendemos así— cuando se trata de fallos tomados por unanimidad y cuando no se cuestiona el aumento de los miembros de la Corte Suprema, para decidir en última instancia cuestiones como las que vamos a poner en la discusión en particular a consideración de los señores legisladores.

Esta es la mejor forma de venir al debate: no solamente documentados sino también fortalecidos, porque no hay aquí ninguna posibilidad de poner en duda los principios jurídicos que aplicamos para resolver los conflictos.

Queremos destacar también que en este largo camino transcurrido hasta llegar a este momento histórico no fuimos ni vamos a ser de aquellos que arrojan piedras contra el viejo código, que ha servido al país durante tantos años. Es verdad que la justicia no ha sido correspondida en la plenitud del tiempo con la bondad de las resoluciones que en muchos casos las circunstancias aconsejaban tomar. Pero no lo es menos que el viejo código de 1872 había previsto sabiamente que después de transcurridos dos años desde el inicio del proceso se establecieran mecanismos de desvinculación procesal para todos los que podían ser imputados, procesados o acusados en materia penal.

Tampoco es menos cierto decir que vamos a tener que entrar en la aplicación de las nuevas instituciones con una policía judicial que no va a ser la policía judicial instructoria de los procesos actuales pero sí será la policía judicial indispensable y colaboradora en la instrucción, en los procedimientos, en la investigación de los delitos y en todo lo referente a la materia preventiva.

Quiero subrayar lo siguiente: el nuevo código procesal penal no va a ser la panacea que predican los historiadores y los oportunistas. El nuevo

código nos brinda las garantías que señalamos al comienzo de nuestro discurso y deja abierta la posibilidad de seguir creando otras instituciones. Por eso el bloque oficialista va a seguir bregando por la reforma del régimen de condena de ejecución condicional, va a seguir impulsando la reforma al sistema de libertad condicional, va a exigir el tratamiento de la suspensión del proceso a prueba y va a proponer liberar a los tribunales especiales de la pesada carga en función de la aplicación de la teoría de la despenalización de los delitos que no revisten mayor entidad ni representan mayores agravios para la sociedad.

Vamos a insistir en la aplicación de las instituciones nuevas que hemos mencionado, y lo queremos hacer en este año parlamentario a la luz del día, sin sesiones trasnochadas, sin libro cerrado. Tampoco vamos a escapar al debate sobre la nueva ley orgánica del ministerio público fiscal. Si es precisamente el viejo código el que ha tenido la virtud de unir los viejos proyectos de Maier y Levene a través de la institución de delegación de facultades de los señores jueces a los señores fiscales para que instruyan y coadyuven en la tarea investigativa, ¿cómo vamos a poner una cortapisa o una cortina en lo que es el puente de plata de unidad de los dos viejos sistemas?

Es cierto que el código necesita de esta institución; es cierto que vamos a tener que sancionar después de más de cien años de gobiernos constitucionales, una ley orgánica para el ministerio público; también es cierto que los legisladores estamos trabajando y debatiendo acerca de otras iniciativas. No nos conformamos con lo que puede ser el compromiso del señor ministro de Justicia —en el que creemos—, sino que nos conformamos con el compromiso de todos los integrantes de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia para que podamos debatir esto en el período de sesiones ordinarias de este año.

No hemos querido anticiparnos a la discusión en particular, por lo que hemos realizado un debate en general, cumpliendo con lo que se había acordado en lo que respecta al tiempo para hacer uso de la palabra, a fin de que todos los bloques que componen esta Honorable Cámara tengan derecho a participar. Sin embargo, no puedo dejar de decir que nuestra disidencia formará parte del debate en particular. Ya podemos avizorar con complacencia que en la ecuanimidad y en los grandes objetivos de coincidencia que nos unen esta noche van a encontrar respaldo las observaciones que dejaremos allí plasmadas.

También es cierto que la estructuración de una ley de implementación no cierra la posibilidad de discusión de todos los supuestos de hecho y de derecho que puedan plantearse en la aplicación de normas procesales. Esto debe quedar bien en claro: vamos a sentar pautas generales que sirvan para la interpretación y aplicación de la ley, mas no se nos puede exigir minuciosidad ni el abecedario de la interpretación jurisprudencial, ya que eso está debidamente garantizado.

Deseo ponderar, resaltar y remarcar el aporte que significará la estructuración por primera vez en el país de la Cámara Nacional de Casación Penal como órgano máximo de las garantías del procesado, de las garantías constitucionales y de la aplicación de las normas del Código Penal en cada caso concreto. Esto nos parece realmente una de las cuestiones sustanciales del nuevo proyecto, por el hecho de que habrá un órgano de casación penal que va a decidir por vías de los recursos de revisión, de inconstitucionalidad o la clásica tipología de casación en orden a la inaplicabilidad de la ley.

Todos los supuestos que puedan plantearse en la República con uniformidad de criterio van a permitir terminar de una vez y para siempre con ese mosaico jurisprudencial tan temido que ha nutrido largas horas de la historia del país.

Ya he dicho claramente que no queremos una organización judicial que sirva a los gobiernos de turno, sino que deseamos una organización superior que sirva para la aplicación recta, justa y adecuada de la ley en cada caso concreto, a fin de que la Justicia deje de ser una expresión meramente declamatoria. Este es el mérito y el formidable trabajo que se ha realizado en orden al establecimiento de la Cámara Nacional de Casación Penal y también —por qué no decirlo— ello es fruto de la labor del señor presidente de la Comisión de Legislación Penal.

La aplicación concreta y efectiva del artículo 102 de la Constitución Nacional, la creación de los tribunales que integran el Poder Judicial y la implementación del juicio oral permitiendo que todas las provincias tengan el proceso oral, con todo el sistema de prueba a la vista del público, es una forma de abrir las puertas del Poder Judicial a la sociedad para dignificar a los magistrados que aplican justicia.

No creo —como se ha insinuado— que todos los integrantes del Poder Judicial deban pagar por la irresponsabilidad, el delito y la mala actuación de algunos jueces.

Durante estos años la mayoría de los magistrados han tenido que aplicar justicia en el derecho penal basándose en la teoría dogmática,

en la teoría finalista y en las obras de grandes autores como Soler, Núñez, Fontán Balestra y otros que resultaría extenso enumerar. Ello significa que hemos contado con jueces de envergadura que sembraron doctrina no sólo para el país sino también para América y el mundo. Esos jueces no son corruptos ni están sospechados de corrupción; son los jueces que durante tantos años mantuvieron y sostuvieron la organización del Poder Judicial de la Nación.

Es bueno que funcionen todas las instalaciones democráticas y que juzguemos y sentencemos a los magistrados, pero para cerrar una etapa del derecho penal y procesal penal reconozcamos la labor de aquellos que han tenido que dictar sentencias y aplicar justicia en todas las provincias y pueblos del país.

Si bien algunas cuestiones menores de interpretación y aplicación de la ley serán ordenadas, jerarquizadas y unificadas por la Cámara Nacional de Casación Penal, el principio de especialidad —que alimenta todo proceso reformativo de las instituciones procesales y sustanciales que rigen la vida del país— debe tener vida. Por ello no quisimos dejar de exponer nuestra opinión en lo concerniente a la formación de las salas. Hemos incluido la especialidad para que aquella materia propia del derecho penal especial militar, de las previsiones del artículo 445 bis y del sentimiento democrático se vea reflejada también en la aplicación concreta de las normas, porque debemos reconocer que la ley de defensa de la democracia, la ley de enjuiciamiento en materia penal, la ley de *habeas corpus* y otras instituciones anteriores a este gobierno fueron las que incorporaron los principios del proceso penal y las normas del derecho procesal penal oral.

Con esa finalidad y con ese sentido de especialidad alimentamos la competencia de la Cámara Nacional de Casación Penal para que los hechos del derecho penal especial militar puedan ser juzgados con sabiduría y transparencia por los que conocen específicamente de ese tema y por lo que seguramente la futura cámara podrá establecer de acuerdo con las facultades reglamentarias instructorias.

En la aplicación concreta de esta norma hemos querido respetar las enseñanzas de los viejos maestros del proceso penal y el esquema de un tribunal, un fiscal y un defensor. Ese triángulo que aprendimos en todas las facultades de derecho del país es el que cierra la administración de justicia y el debido proceso legal de acuerdo con las enseñanzas y principios que derivan de la aplicación de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

No nos hemos conformado con la dogmática de las cláusulas constitucionales ni con los principios de las leyes 23.984 y 24.050; hemos avanzado más. Realmente queremos que quede claro para la sociedad que la existencia de un mal magistrado o de un mal funcionario del Poder Judicial en el futuro, conforme a la organización estructural que damos en el nuevo proyecto, no impedirá que los demás órganos de aplicación de la ley puedan tener la cuota parte de responsabilidad en materia instructoria, por un lado, y en materia acusatoria, por el otro, además de tener a su cargo la tarea natural de ser el dedo acusador de las irregularidades.

No podemos seguir conformándonos con denuncias que llegan al Congreso para que enjuiciemos a 200 magistrados; queremos tener garantía dentro de nuestros propios tribunales. Eso es lo que sostenemos en este proyecto y por ello reivindicamos nuevamente en este discurso las facultades delegatorias, instructorias y otras que se confieren al ministerio público.

Los cómplices de las irregularidades de los procesos, de la errónea aplicación de la ley, de los fraudes procesales y de la corrupción tendrán muchas menos oportunidades. Los guardianes estarán en nuestra propia casa, porque la policía judicial estará custodiando la legalidad del proceso. Desde que se inicia el proceso, se custodia el debido ejercicio del derecho de defensa de cada ciudadano que es detenido o encarcelado. Asimismo, se brinda adecuada apoyatura al abogado defensor, para que dialogue, aconseje y asesore.

Por otra parte, se plantea el control del órgano fiscal como forma de complementar al juez, que puede requerirlo cada vez que sea necesario.

Es cierto que no contamos con número suficiente para una policía judicial estructurada, pero la ponemos en marcha; eso es lo que queda en el discurso y para la historia.

Cumpliendo con la policía y los organismos de seguridad, alimentamos el gran principio que debemos establecer, que es el de prevención. Se trata de la seguridad del país; en este sentido, no sólo cabe mencionar el castigo del delito, que es una consecuencia social generada cuando las instituciones no están a tono con las circunstancias y cuando falta otro tipo de respuestas.

En verdad, la columna vertebral del sistema de seguridad es la red de prevención. La garantía de la vida y de los bienes de todos los ciudadanos argentinos radica en el sistema de prevención. Que vaya a la justicia lo que deba ir; que dejemos de encarcelar a los procesados por faltas leves o delitos insignificantes; que las cárceles sean sanas y limpias para la readaptación de

los condenados y no que se transformen en castigos en vida; que los procesos tengan una duración determinada; que la justicia sea eficaz y efectiva en el tiempo, para que no tengamos que seguir tolerando en las cárceles a procesados durante cinco o seis años; que podamos levantar nuestras miradas como representantes del pueblo frente a los familiares de las víctimas de los detenidos, a fin de poder decirles que este proceso oral les crea un organismo nuevo para brindarles apoyo.

Ya no estamos pensando sólo en el culpable del delito. También pensamos en la víctima, cuya pérdida hoy no se puede cuantificar. Es una víctima pasiva. A la altura de las circunstancias y con el debido conocimiento de las instituciones, la policía judicial va a fortalecer el nuevo sistema oral.

No podemos dejar de calificar lo que representa el sistema de ejecución penal en esta iniciativa. Queremos que este mensaje llegue al pueblo. Hay garantías en la ejecución de las penas. Ya no existirá el prejuicio de la sentencia ni del juez que ha intervenido, ni habrá necesidad de recusar a los magistrados, pues estamos garantizando la independencia del régimen de ejecución penal.

Queremos —esto es lo que refleja el espíritu sustancial de la iniciativa— que las normas del Pacto de San José de Costa Rica se hagan efectivas en instituciones concretas como las aquí previstas. No alcanza con decir que estamos adheridos a ese pacto. Debemos expresar —esto es lo que tiene que oír el pueblo— que hemos establecido un sistema de ejecución independiente.

Existirán tribunales o jueces de la misma Cámara, pero serán independientes y resolverán cada situación concreta que se presente. Estará nuestro oidor o nuestro fiscal —porque tendremos delegados en todas las cárceles del país— para recoger todos los reclamos y para filtrar toda la información, a fin de que el juez tome conocimiento de todo lo que debe saber en forma clara, concreta y transparente. Así no estaremos más desconcertados con los prejuicios de quienes hoy cumplen la tarea de seguridad en las cárceles.

De esta manera, reivindicamos a los hombres que durante muchísimos años —en virtud de las deficiencias legislativas que aquí hemos denunciado— han estado cumpliendo un servicio a la patria y un deber inexorable, que no siempre se ha ponderado y valorado correctamente. Lo han hecho con insuficiencia de medios, sin una or-

ganización adecuada y sin un código de ejecución penal como el que nos proponemos dictar en el futuro.

Este proyecto ha sido objeto de un debate intenso en el seno de las comisiones. De todas formas, estoy convencido de que en la discusión en particular coincidiremos en torno de soluciones muy importantes, que quizás tengan una mayor trascendencia de lo que hasta el día de hoy se ha escrito en los medios de prensa.

En orden a las aspiraciones presupuestarias que todo mecanismo u organización jurídico-institucional debe tener, el gobierno nacional no sólo ha respaldado las innovaciones que hemos introducido sino que también se ha comprometido a sostener las ampliaciones que sea necesario realizar en todos los organismos de aplicación de la ley a fin de que el sistema sea efectivo.

Nos nos quedamos con la historia del código viejo sino con el futuro del código nuevo, con medios económicos adecuados y que permitan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dar respuesta a las demandas de la propia organización, de los justiciables, de los colegios de abogados y federaciones de magistrados de todo el país. Quienes aun siendo del interior del país no hallen la respuesta adecuada en el régimen que sancionaremos, en el futuro satisfarán sus requerimientos siempre y cuando podamos defender racionalmente lo que la sociedad demanda al sistema: justicia con medios económicos. Este es el principio mediante el cual damos vuelta la página de la historia sin limitarnos a declamar sobre la implementación del proceso oral.

Más allá de estas consideraciones generales que, a mi juicio, reflejan la síntesis y el pensamiento de muchos de los legisladores presentes que escuchan con atención, y teniendo en cuenta las aspiraciones del anterior gobierno democrático, la decisión política ineludible del actual gobierno nacional y los deseos de la gran mayoría del pueblo argentino, no tenemos que opacar la dimensión del proyecto con discusiones estériles en torno de asuntos menores, que seguramente se presentarán en la discusión en particular. En nombre del bloque oficialista exhorto a todos los señores legisladores, a los presidentes de bloque y a quienes en particular han trabajado extensamente en este código a compartir la gran decisión y la responsabilidad en esta hora trascendente para el país.

No tenemos miedo a los enjuiciados ni tememos que los funcionarios públicos del anterior gobierno, de este o de los que vengan, deban sentarse frente a un tribunal como estamos sentados nosotros hoy frente a la Presidencia de la Cámara.

Queremos dar testimonio de que desde el bloque oficialista hemos querido levantar en alto este proyecto de implementación del juicio oral penal, que constituye la culminación de un ciclo. Esta no es una norma más. Alrededor de cien artículos serán aprobados en oportunidad del debate en particular. Llegamos a esta etapa con un gran margen de consenso, aunque seguramente con algunas diferencias. Pero lo importante y trascendente es que el justicialismo, sus aliados en este recinto y todos los que hemos trabajado en el tema queremos agotar el debate en esta reunión.

No voy a proponer anticipadamente que votemos esta iniciativa en bloque o por capítulos, porque no me interesa que la historia de esta ley quede concluida con una votación en bloque. Mi deseo es que la votemos artículo por artículo y punto por punto; pero que esta noche, aunque sean las 6 de la mañana, podamos anunciar al pueblo argentino que el proceso oral está en marcha, que todos los justiciables tienen las garantías constitucionales definitivamente consagradas y que —como dijimos en nuestra campaña electoral— hemos cambiado la historia, ya que para eso nos votó el pueblo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: la Nación está por dar un paso trascendente, ya que vamos a posibilitar la aplicación de un sistema oral en reemplazo de un sistema de enjuiciamiento arcaico. Precisamente a ello tiende la iniciativa que estamos considerando.

En este aspecto las provincias se adelantaron a la Nación; como aquí se ha expresado, muchas provincias argentinas han adoptado este sistema que presenta gran cantidad de virtudes con relación al actual sistema escrito. Entre ellas podemos mencionar la de la inmediación, la de la concentración de la prueba, la de la publicidad, la de la continuidad y la de la celeridad procesal. Es notable el cambio que en materia procesal hemos vivido quienes debimos ejercer esta profesión en la transición desde un sistema a otro.

En el año 1972 comenzó a aplicarse en Corrientes el sistema procesal oral a través de un código ideado por el doctor Alfredo Vélez Mariconde por encargo del gobierno de la provincia, a cuyo frente estaba el doctor Díaz Colodrero, entre los años 1963 y 1966.

Vivimos esa transición y apreciamos la diferencia del cambio de una a otra legislación; la antigua establecía un sistema escrito similar y diría casi idéntico al que rige en el orden na-

cional, en que el juzgador jamás o raras veces conocía al imputado y evaluaba el hecho, sus actitudes, sus antecedentes y su conducta en general a través de lo que hallaba escrito en el expediente. Del mismo modo evaluaba los testimonios que eran recibidos por empleados del juzgado.

Me tocó vivir el cambio porque ejercí prácticamente toda mi vida de abogado en el ámbito penal. La gran sorpresa que derivó del juicio oral es que en muchos casos se llegaba a la detención de los testigos. Es decir, aquellos testigos que antes declaraban sin ningún inconveniente ante el escribiente, en ese otro escenario solemne lo hacen ante tres magistrados sentados en un pupitre más elevado, además del imputado ubicado en el medio de la sala, del querellante, del fiscal y a veces del actor civil —ubicados a su izquierda— y del defensor, ubicado a su derecha. Frente a ese esquema formal, en la inmediación de las preguntas formuladas tanto por los jueces como por el fiscal, el defensor, el querellante, el actor civil o el demandado civil —ya que sólo excepcionalmente se puede leer un testimonio con este sistema—, si esos testigos incurrieran en contradicciones, podían ser detenidos.

Esto sirve para advertir la falacia de que quien declaró ante la instrucción tiene después que hacerlo de memoria ante el tribunal oral; y allí surgen los delitos de falso testimonio que llevan a la detención del testigo y que a veces cambian sustancialmente —para bien o para mal— el destino del imputado.

Las provincias han avanzado igualmente en el tema del ministerio público. Gran parte de ellas han establecido definitivamente que este ministerio es judicial, inamovible —sólo puede removerse por vía del juicio político—, y que no recibe órdenes superiores en forma vertical, que puedan significar la violencia moral de tener que ejecutar un acto contrario a la ciencia y conciencia de un funcionario judicial.

A este código le hará falta el complemento de una ley orgánica para el ministerio público. En esta Cámara hay varios proyectos en ese sentido. Incluso nosotros hemos hecho nuestro modesto aporte redactando un proyecto que pretende dar carácter judicial al ministerio público dotándolo de acuerdo senatorial, inamovilidad y remoción por juicio político.

Pero el carácter híbrido de este funcionario, que es nombrado y removido por el Poder Ejecutivo, se ve agravado por el hecho de que puede subrogar a los jueces por ausencia temporal de éstos. De manera tal que podrán ser jueces circunstancialmente, careciendo del acuerdo res-

pectivo, dependiendo del Poder Ejecutivo y, lo que es peor, sin independencia de criterio, lo que sucede cuando la Nación es parte o cuando algún organismo puede generar interés en el funcionario superior que tiene derecho a darle directivas.

Peor es el momento que viviremos a partir del 5 de septiembre, porque —en principio con buen criterio— el código establece la posibilidad de la delegación de la instrucción, por parte del juez, a los fiscales. Directamente se van a atribuir funciones judiciales a los mismos fiscales, que son dependientes del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, imposibilitados de ejercer actos imparciales propios de la jurisdicción.

Adelanto que en la discusión en particular propondré una modificación al articulado del proyecto por medio de una norma transitoria que apunta a suspender este instituto de la delegación de funciones hasta tanto no se apruebe una ley orgánica del ministerio público.

Hemos corregido —esto es atributo de las comisiones— una suerte de sistema de jueces itinerantes. El artículo 102 de la Constitución Nacional exige que la actuación en los juicios penales tenga lugar en la misma provincia donde sucedió el hecho delictivo. Ante la imposibilidad de crear un juzgado por provincia, la idea en su momento fue que se crearan en algunas provincias sí y en otras no y que, para salvar el escollo del artículo 102 de la Constitución Nacional, esos tribunales se trasladaran a las diferentes provincias para impartir justicia. Era un error de apreciación porque, si el motivo de la recurrencia a ese sistema era la falta de medios económicos, con toda seguridad el traslado del tribunal, del fiscal, del secretario, de los funcionarios y de los empleados generaría una inversión mayor.

Permeable a las críticas formuladas por la comisión, el propio Ministerio de Justicia advirtió que esto no era razonable y que podía significar hasta la frustración del sistema. De ese modo, en el seno de la comisión se logró disponer la creación de por lo menos un tribunal penal por provincia. Este es un avance más que importante.

Debido a la escasez de medios y a la necesidad de disminuir la inversión económica, y en procura de celeridad procesal, la comisión ha modificado el proyecto dándole al tribunal penal el carácter de órgano de apelación de la justicia de instrucción. Originariamente era menester concurrir a las cámaras federales de apelación. Esto significaba una pérdida de tiempo en el caso de provincias que no tenían cámara de apelación planteándose, por consiguiente, la necesidad de acudir a otras provincias en alzada.

Imaginemos lo que sucedía cuando se apelaba un auto de prisión preventiva y el imputado tenía que continuar detenido mientras el expediente se trasladaba a otra provincia para ser resuelto. Con muy buen criterio se estableció que el mismo tribunal penal tenga competencia en la apelación.

En su momento se criticó esta decisión y se argumentó que esto podría constituir prejuzgamiento. Algunos códigos que establecen el procedimiento oral consideran que hay prejuzgamiento cuando una de estas cámaras interviene en una etapa de instrucción y luego tiene que resolver la sentencia. Esta concepción fue adoptada por nuestro código actual que, en su artículo 55, establece como causal de recusación el hecho de que el tribunal haya intervenido en el auto de procesamiento dictado en el mismo proceso. Sin embargo, hemos hecho un estudio y creo que quedó absolutamente desechada toda posibilidad de que se dé esa situación de prejuzgamiento.

En efecto, la legislación argentina está informada del mismo sistema. Así es que un juez de instrucción, de acuerdo con el sistema del código vigente, instruye, dicta la prisión preventiva y después la sentencia, sin inmiscuirse ni contaminarse en contra o a favor del reo. Lo mismo sucede en el ámbito del proceso civil, donde un juez puede intervenir en un juicio ejecutivo primero, y como hace simplemente cosa juzgada formal y no material y es posible el juicio ordinario posterior, el mismo juez puede intervenir en dicho juicio ordinario posterior, lo que no implica prejuzgamiento, porque para que éste se dé tienen que estar todos los elementos y evaluarse la totalidad del material probatorio, con los mismos parámetros de juzgamiento.

No es así en un auto de procesamiento y en una sentencia donde las pautas valorativas son absolutamente distintas. El principio *in dubio pro reo* juega al revés en la etapa de instrucción, ya que no hace falta certeza para dictar un auto de procesamiento, bastando la semiplena prueba de la culpabilidad. En cambio en la etapa de la sentencia, si no hay certeza absoluta el imputado debe ser absuelto. Esto ha facilitado —insisto— en gran medida la celeridad en todas las provincias que no tienen cámara federal de apelaciones, ya que se va a sustanciar allí y se va a concluir, en breve tiempo, el caso particular de los expedientes con detenidos.

Antes de concluir, quiero destacar brevemente dos pautas. Este es un sistema caro y, si no hay predisposición a crear el número suficiente de tribunales, estará condenado al fracaso, porque a diferencia del sistema escrito debe fijarse una

audiencia por día como máximo, a la que deben concurrir los miembros del tribunal y las partes. Todo eso implica un desgaste de tiempo muy superior al del sistema escrito y una mayor movilización, particularmente en el caso de los testigos. No olvidemos que cuando éstos tienen insuficiencia económica los gastos de su comparecencia debe pagarlos el Estado, porque de lo contrario no tendrá testigos. Todo esto significa una mayor inversión.

Afortunadamente, en la Comisión de Justicia se aprobó por unanimidad un proyecto que incrementa de un 3,5 a un 5,7 por ciento del presupuesto nacional los fondos destinados al Poder Judicial nacional. Ese proyecto deberá tratarse a la brevedad para poder complementar el sistema que hoy debatimos.

Por último, quiero hacer una prevención al ciudadano que pueda creer que este sistema representará una panacea jurídica y que, una vez instrumentado el juicio oral, se terminará con el delito y la delincuencia. No es así; pero si este sistema funciona con rapidez, también será rápida la condena al responsable penal. Será condenado el culpable y por esa vía se evitará aquello que la jerga popular denomina "entrar por una puerta para salir por la otra". Es decir, hasta ahora los culpables no cumplían condena por tener el beneficio de la excarcelación; pero de aquí en más, si el sistema funciona con la celeridad pretendida, los culpables serán rápidamente condenados y, si vuelven a delinquir, no será procedente la excarcelación por ser reincidentes.

Sólo queda augurar que sean iluminados los funcionarios que tengan que designar jueces probos y que estén a la altura del sistema. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. — Señor presidente: el proyecto de implementación del juicio oral es uno de los temas que más ha sido tratado en estos últimos meses en la comisión. Las reuniones han sido intensas y se han efectuado con la presencia de representantes del Ministerio de Justicia y de los distintos sectores interesados.

Debo señalar que algo que parecía difícil en un primer momento se fue logrando en el curso de las reuniones. El tema terminó siendo tratado sin ideologismos ni enfoques partidistas, lo cual ha permitido una modificación importantísima del proyecto original del Poder Ejecutivo, consensuada entre los integrantes de la comisión y el ministerio respectivo.

Señaló esto porque, cuando esta comisión empezó a analizar los temas, parecía que tenía una misión casi imposible. Una rápida visión del estado actual de la seguridad en el país nos indica que ésta es preocupante. La sensación térmica del ciudadano común en la calle es que hay un verdadero estado de indefensión y cuando lo analizamos en detalle nos dimos cuenta de que es realmente así: las fuerzas de seguridad son insuficientes y carentes de medios e ingresos, los procesos judiciales son largos, cuando alguien es condenado y termina en la cárcel, nos encontramos con que ésta no tiene capacidad para alojarlo, y con que, además dista muchísimo de cumplir con la pretensión de rehabilitación de los condenados, quienes carecen de inserción laboral futura. Parecía que las deficiencias no podían ser superadas de ningún modo.

Con respecto al dictamen en tratamiento, en cuanto a la Capital Federal teníamos que con el proyecto original, que reducía casi a un tercio las secretarías, se llegara a un estado en el cual no se podría atender el gran número de causas. En otros distritos, con el sistema de juicio oral, un gran porcentaje de casos prescribe. Los tribunales que integran el fuero criminal y correccional ordinario de la Capital Federal deben intervenir aproximadamente en el 90 por ciento de las causas penales que se inician, y hay que tener presente que ante los juzgados de primera instancia tuvieron entrada en un año 125.477 expedientes.

Subsisten unos pocos problemas que para nosotros son importantes; ya han sido mencionados aquí y los comento. Cuenta con nuestro apoyo la iniciativa del señor diputado Garay en el sentido de que sea resuelta primero la implementación del ministerio público y su ubicación dentro de la justicia, del mismo modo que tienen nuestro respaldo algunos de los puntos que van a ser comentados en el tratamiento en particular.

No hay duda de que aquí estamos mejorando lo referente a los derechos y la libertad de los procesados; y nosotros agregamos —como también ha sido dicho aquí— que Dios quiera que esto redunde también en beneficio del derecho de las víctimas. Creemos que se está dando un paso muy importante en la mejora de la seguridad en la Argentina. Por tal motivo, desde nuestro bloque vamos a acompañar el despacho de comisión tal cual ha sido consensuado.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: este proyecto de ley, además de analizar los institutos procesales y los sistemas judiciales que actúan ope-

rativamente, nos permite trazar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la administración de justicia en la Argentina, porque se abre la posibilidad de crear un número muy importante de vacantes en la Justicia, que van a tener que llevar adelante un cambio muy importante en los mecanismos procesales del país.

El cambio del sistema escrito por el oral es una aspiración tan importante que, cuando en el seno de las comisiones se debatió este tema, la unanimidad de sus miembros coincidió en acelerar el proceso oral, efectuando críticas certeras y contundentes al anacronismo del sistema escrito.

Al analizar el funcionamiento de nuestra Justicia quizás no sepamos por qué aristas penetrar para conocerla mejor. Hay un lado muy perceptible del funcionamiento de la Justicia que se aprecia en casos muy concretos cuando ésta no actúa con independencia sino con subordinación al poder político. Existen ejemplos concretos consistentes en pedidos de juicio político y en casos conocidos por la opinión pública que fueron debatidos en el seno de las comisiones y en este mismo recinto, ya que forman parte de la discusión permanente en la vida política, y se vinculan con hechos que cotidianamente impactan en la opinión pública.

Hay otras cuestiones a las que quiero referirme para tratar de buscar un diagnóstico más certero y que hacen al funcionamiento de la Justicia. Quiero hablar de algunos casos —no todos— vinculados a los tribunales federales. La mayoría pertenece a la justicia provincial, pero en ellos se aplica el mismo mecanismo para la administración de justicia.

Me estoy refiriendo a varias vidas humanas. Una de ellas es la del joven Félix Ramón Moriniego, detenido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, en Villa Diamante. Luego de una golpiza tremenda muere en un hospital de la zona. Todo esto sucedió el 8 de marzo de 1992. El cabo de policía acusado por este delito terminó siendo sobreseído por el juez de la causa.

Otro caso es el del joven de 18 años Pablo Sommi, cuyo homicidio fue investigado en el Juzgado de Instrucción número 19, de la Capital Federal. Circulaba con un amigo en un ciclomotor y por esa violencia inexplicable a la que estamos acostumbrados, un policía lo mata de un balazo. Se identifica a los autores, la familia lleva adelante el proceso, pero como no cuenta con recursos no puede contratar los servicios de un abogado y la causa termina archivada. Omar Lencina, 24 años, muere en la isla Maciel el 19 de febrero de este año; un balazo

le penetra por la nuca de arriba hacia abajo, lo que supone que tiene que haberse encontrado en posición de sentado o acostado boca abajo en el momento de consumarse la agresión. Se procesa al autor de este homicidio, el que es calificado de homicidio en riña, pero al poco tiempo obtiene su libertad por falta de méritos. Estoy hablando de jueces, causas, procesos, testigos, todos los mecanismos.

Walter Bulacio, 17 años; fue a un recital al estadio del club Obras Sanitarias, luego del cual fue detenido y maltratado junto a otras 62 personas. El menor es llevado a una comisaría, pero de este hecho no se avisa a nadie y la familia se entera al día siguiente de que había tenido un problema de salud durante la detención. Lamentablemente, al poco tiempo muere. Ello motivó movilizaciones y expresiones de repudio por parte de este cuerpo. Se dictó la prisión preventiva del comisario Espósito pero luego la Cámara revocó esa medida porque había un entredicho —cuestión que también fue discutida en este cuerpo— acerca del famoso memorándum 40. Y dice la Sala VI de la Cámara: "Si bien Espósito utilizó un instrumento a todas luces inconstitucional, pudo no ser consciente de ello. El accionar desplegado por Espósito se inscribe dentro de las prácticas policiales vigentes."

Comentar estos hechos es una forma de analizar el funcionamiento de nuestra justicia, al igual que recorrer las cárceles para darnos cuenta de que en los últimos tiempos se ha agravado la situación penal porque, en sus sentencias, un sector de los jueces está aplicando las penas máximas como interpretación totalmente equivocada de la demanda de seguridad por parte de la población, que facilita estos casos del "gatillo fácil" y convierte a un sector del Poder Judicial en cómplice de una franja de funcionarios del sistema policial; hoy que estamos hablando del juicio oral no podemos dejar ese pacto al margen de la consideración.

¿Cómo son designados los jueces que dictan estas sentencias? Mucho se ha hablado acerca de las sesiones secretas; inclusive en la última elección de senador para la Capital Federal no hubo fuerza política que no propusiera una modificación al artículo del reglamento del Senado que trata esta cuestión. Se dijo que así se facilitaría la publicidad de los acuerdos, pero esto no se resuelve con la mera publicación en el Diario de Sesiones del Honorable Senado, porque si ni siquiera es leído por los señores senadores, mucho menos llegará a la opinión pública. En consecuencia, la publicidad del acto sigue quedando entre cuatro paredes. En realidad, tanto

en la última campaña electoral para la elección del senador por la Capital Federal como en los proyectos presentados en el cuerpo por los distintos bloques —entre ellos, el mío—, las fuerzas políticas proponen un mecanismo distinto. No dicen que la publicidad se resuelve con el acto formal de reflejar en el Diario de Sesiones el nombre de los jueces designados sino que los ciudadanos deben conocer quién va a administrar justicia, quién va a llevar adelante una denuncia o resolver una condena.

Dicha publicidad se logra cuando el ciudadano fundadamente opina, se presenta y peticiona ante el Senado. Esto es lo que he planteado, con el mandato de mi bloque, en el seno de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal y es lo que dio origen a la disidencia que formalmente he planteado.

Confirmando una información periodística aparecida en el diario "La Nación", el presidente de la Comisión de Legislación Penal ha dicho que para desembarazarnos de este problema y encontrar una solución a la demanda pública de la sociedad de que se termine con el sistema de las actas y acuerdos secretos, se realizó una reunión en la que un grupo de senadores expresó su voluntad de modificar el reglamento. Si se acepta esta tesis nos encontraríamos ante un acontecimiento espectacular que modificaría el sistema de designaciones secretas.

Nosotros no aceptamos esta posición; creemos que se pierde una gran posibilidad. No hay técnica legislativa que supere la verdadera aspiración popular. La futura ley debe contener una norma precisa sobre la designación de todos los jueces que ella misma autoriza a nombrar. Perder tal posibilidad es desmentir lo que se dice públicamente. Los acuerdos que se realizan no tienen eficacia ni validez cuando no están plasmados en el hecho legislativo, que es la norma en sí misma.

Esto es casi irrefutable. Digo casi porque creo en la buena fe de quienes estuvieron en esas reuniones y de quienes escucharon y nos transmitieron lo ocurrido. Pero es irrefutable porque no se verá reflejado en el articulado sino que quedará en la declaración, en el enunciado, en la versión periodística y en el compromiso verbal.

¿Por qué los diputados debemos ceder ante esto? No encuentro ninguna explicación. ¿Por qué no vamos a incorporar una norma como la descrita, aunque no abarque las anteriores designaciones —porque no podrán ser revisadas— y tampoco alcance a los pequeños cambios que puedan ir produciéndose por bajas, renunciaciones, jubilaciones o por cualquier otro motivo en el Poder Judicial actual? ¿Por qué vamos a dar al

Poder Ejecutivo la posibilidad de manejo secreto y discriminatorio en esta cantidad de más de 200 nombramientos, en los que muchas veces no se responde a los méritos de la carrera judicial sino a acuerdos políticos?

No sólo debemos tener en cuenta las sentencias que se subordinan al poder político sino también aquellas de los tribunales penales, en los que detrás de cada caso hay un drama, una vida y el patrimonio de argentinos que van a ser sujetos de un proceso.

Por ello es que no hay posibilidad de que acordemos —como han hecho las bancadas mayoritarias— en considerar válido el compromiso de un grupo de senadores, que además responde al gobierno nacional, que no se ha destacado en estos años de gestión por su apego a la Constitución y a la ley. Se trata de un gobierno acostumbrado a manejarse por decreto, que ni siquiera nos ha respetado en este momento, porque mientras nosotros discutíamos la intervención del Poder Judicial a la provincia de Corrientes, el Poder Ejecutivo dictaba el decreto disponiendo esa medida. Este es el respeto que el Poder Ejecutivo tiene por este poder parlamentario. Es nulo. Entonces, ¿por qué vamos a creer en esas promesas? ¿Cuáles son los antecedentes que nos generan confianza en quienes nos dicen que en el futuro se va a modificar la reglamentación? No existe ninguno.

Estamos perdiendo una gran posibilidad. Después surgirán las consecuencias. Parte de ellas se observan en el recinto y en esta Cámara de Diputados. ¿Cómo funciona hoy la Comisión de Juicio Político, donde se evalúa desde esta Cámara el accionar de nuestros jueces? Se trata de los buenos jueces, que a veces son denunciados por causas particulares, y de los jueces delincuentes, que encuentran en la reglamentación de nuestra comisión y en su composición, mayoritariamente oficialista, la posibilidad de seguir manteniendo sus cargos, mientras los delitos en los que han estado incurso han generado su efecto.

En su momento propuse a la Comisión de Juicio Político la modificación de su reglamento para acelerar las causas que los ciudadanos presentan contra los jueces y para terminar con una situación de privilegio en un Estado democrático. Así los ciudadanos recuperarán una confianza deteriorada en el funcionamiento del sistema judicial.

Esta cuestión tiene un peso más grande cuando se habla de la justicia penal y de jueces que van a entender en el conflicto y en el drama humanos, a fin de hacer justicia. Me apena el acuer-

do al que se arribó, ya que esta Cámara tenía la posibilidad de condicionar a los poderes que actúan secretamente y que lo seguirán haciendo.

También me apena que el estado de derecho empiece a reconocer las excepciones; cuando es el propio gobierno el que las genera, se debilita mucho más la confianza en el sistema democrático. Aspiramos a que un sistema democrático sea aquel en el que el gobierno concreta la aspiración del pueblo, y no un régimen electoral que sólo alcanza para autorizar algunos actos de gobierno.

Así fundo mi voto por la negativa a un proyecto que debió haber merecido el apoyo de todos. No puedo convalidar esta estrategia de pensar que el Senado *motu proprio* va a modificar su reglamento, cuando teniendo hoy en nuestras manos la posibilidad de condicionar y establecer una norma que obligue a la publicidad de los pliegos y permita que los ciudadanos se manifiesten sobre sus futuros jueces, la perdemos tan ingenuamente.

Quiero señalar otro aspecto del proyecto, que ha despertado reservas y disidencias. Me refiero al artículo 12, que junto con otros ha facilitado que ello ocurriera.

Las instituciones —sobre todo las de la Justicia y específicamente de procedimientos—, en las cuales todas las garantías constitucionales deben estar presentes, valen y sirven en la medida en que generen confianza.

En relación con el artículo 12, como bien se ha dicho, su primera parte no modifica la aplicación de las normas constitucionales en cuanto a la competencia de los jueces naturales. Esta se mantiene en su primer párrafo. Así, dice muy bien lo siguiente: “Aquellas en las que haya contestación de traslado por parte de la defensa se les aplicará el procedimiento establecido por la ley 2.372 y sus modificatorias”.

A continuación el citado artículo genera una posibilidad de opción que desde nuestro punto de vista, en cuanto al sostenimiento del procedimiento oral, la transparencia y las manos limpias que deben haber en todo esto, constituye una contradicción del mismo sistema. Esa contradicción viene a invalidar el conjunto pues abre una opción para que quien desee seguir con el sistema escrito pueda hacerlo. Es decir que quienes vamos a establecer la derogación del anacrónico sistema escrito, finalmente lo dejamos como posibilidad. Como un mecanismo en sentido de progreso de la legislación penal, vamos a ampliar los medios para ejercer todas las defensas. Asumamos que ésa es la tarea, si es eso lo que se ha pensado.

Estamos hablando también de la transformación de la justicia federal. Sin ánimo de acusar, he hecho un pequeño relevamiento de nombres y apellidos que podrían pedir la aplicación del sistema escrito, cuyo anacronismo —que todos hemos criticado— impide el rápido dictado de sentencia.

Fijémonos en algunas de las personas que están siendo investigadas por la justicia y que, como producto de esta opción otorgada por la ley, podrán generar condiciones —no digo que efectivamente lo hagan— para postergar sus situaciones procesales. Algunos de estos nombres y apellidos seguramente son conocidos: Mario Anello, Amalia Beatriz Yoma, Monzer Al Kassar, Munir Menem, María Romilda Servini de Cubría, Jorge Antonio, Miguel Angel Vicco, Armando Gostanion, Gerardo Sofovich, Francisco Mayorga, Rodolfo Barra, José Roberto Dromi, Raúl Granillo Ocampo, Ibrahim Al Ibrahim, Gaith Pharaon, Oscar Espinoza Melo, José Juliá, y sigue la lista. Todos estos señores podrían acogerse a esta opción que otorga el artículo 12. Entonces, una buena intención legislativa sufre una transformación que lleva nombre y apellido —y aquí hemos citado unos cuantos— y, como diría un juez en su sentencia, un sistema jurídico que no es respetado deviene inaplicable.

Vale decir que se mantiene para algunos el sistema escrito y la indefensión del interés público, y en el corto tiempo la sociedad observará que por medio de las normas que se crean permitimos un *bill* de impunidad respecto de quienes aparecen severamente cuestionados por esa misma normativa.

No cabe duda de que si a cualquiera de estas personas se les violara algún derecho, yo sería el primero en efectuar el reclamo. Pero no se trata de actos de denuncia y persecución sino de descubrir los nombres y apellidos que creo que en este caso se han puesto de manifiesto.

Este conjunto de derechos individuales que vamos a poner en marcha por medio de este procedimiento nos lleva a sostener nuestro voto por la negativa, apoyando en parte lo que sostuvo el señor diputado Garay sobre la necesidad de establecer el funcionamiento del ministerio público dentro de la misma ley, tema que vamos a postergar para el debate en particular.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo. — Señor presidente: fundamentaré sintéticamente la disidencia parcial que en el seno de la Comisión de Legislación Penal he opuesto con relación a este dictamen. Digo que lo haré brevemente, sin perjuicio de entender que las razones que avalan mi postura son pro-

fundas. Ellas son sustancialmente prudenciales y pretenden en este momento histórico advertir a la Honorable Cámara sobre el riesgo que implica un apresuramiento y un salto al vacío en esta materia, que dé por el suelo con la intención de los legisladores de mejorar el sistema de enjuiciamiento penal.

No se trata de traer a discusión una cuestión que ya está superada en el ámbito legislativo sobre la opción entre el sistema escriturario o la oralidad. Ello es así por cuanto esta Honorable Cámara ya ha sancionado un nuevo código de procedimientos y ahora se trata de implementarlo.

Sin embargo, quiero llamar a la reflexión. El 5 de septiembre, es decir, dentro de veinte días, se pondrá en funcionamiento un nuevo sistema, que en el ámbito federal carece de antecedentes y de tradición, si bien es cierto que en unas cuantas provincias ya se ha ensayado, y no con igual suerte en todas ellas.

Se crean más de 100 tribunales y se nombran más de 300 jueces y 600 funcionarios, para poner en práctica un nuevo sistema que, aunque no esté demostrado, puede ser mejor que el que hoy impera.

Para el funcionamiento de estos tribunales, que implican en la administración de justicia una seria inflación judicial, ¿está seriamente prevista la infraestructura? Se habla de los edificios que ocuparán estos tribunales, pero sin embargo sabemos que si bien ellos existen, aún no se encuentran desocupados, aparte de lo que ya ha sido señalado por varios legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, en cuanto al riesgo que implica la nominación de tantos magistrados en un término tan breve, en un país lamentablemente acostumbrado a sistemas de designación política en donde no se respetan méritos personales.

Nuestro país tiene tristes experiencias por apresurarse a adoptar medidas que luego quedan tan solo estampadas en el papel. En este sentido recuerdo la ley que sancionó el traslado de la Capital Federal a Viedma: lo cierto es que hoy estamos sesionando en la ciudad de Buenos Aires, aún Capital de la República.

Corremos el riesgo de instrumentar entre gallos y media noche un juicio oral que puede terminar con las ventajas que el mismo sistema ofrece, aunque habrá que demostrar si él realmente funciona. Es más, el nuevo código de procedimientos sancionado —y que ahora se completa mediante este proyecto de ley— prevé la delegación de la instrucción de las causas sumariales en el ministerio público; pero la ley del

ministerio público sigue guardada por el Poder Ejecutivo, quien aún no se ha dignado enviarnos el proyecto.

Existen otras leyes complementarias —como la que instrumenta la *probatión*— que tampoco han sido tratadas. Es decir que el juicio oral constituye un verdadero sistema. No se trata solamente de sancionar a las apuradas la creación de una serie de cargos y tribunales encargados de ensayar la aplicación de un nuevo código de procedimientos. Debe tratarse de un sistema completo y racional, aplicado en forma prudencial, que debería instrumentarse en forma gradual.

¿Qué quiero decir con esto? Que según la experiencia de nuestro derecho público provincial, el sistema de la oralidad no ha funcionado por igual en el juzgamiento de todos los delitos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con la reforma del viejo código de Jofré, este procedimiento se aplicó sólo para los delitos más graves. ¿Por qué no ensayarlo de la misma manera en el sistema federal? Sabido es que delitos de otra complejidad, como las defraudaciones o los delitos económicos, no ofrecen la misma receptividad para el sistema de juicio oral que, por ejemplo, los homicidios o en general los delitos contra las personas. Tratándose de un sistema que no tiene tradición en nuestro derecho federal, ¿por qué no se lo aplica gradualmente y se va acomodando prudencialmente conforme a su funcionamiento?

Esto es lo que falta en esta implementación: la virtud del político, que desde los clásicos griegos a la fecha sigue siendo la prudencia. Hay un entusiasmo cuasideológico en instrumentar rápidamente el juicio oral. Nos encontramos con que, dentro de veinte días, trescientos nuevos jueces y casi cien nuevos tribunales aplicarán un nuevo código a todas las situaciones, cuando todavía no se han dictado las normas de superintendencia con que se van a manejar y cuando todavía no se han cubierto los cargos de la Cámara Nacional de Casación Penal, que tendría competencia para establecer esas normas de superintendencia. Esto es un agravio a la prudencia. En una implementación gradual correspondería que primero se designe a los miembros del tribunal de casación, que se postergue la fecha de entrada en vigencia del nuevo código o, en todo caso —a pesar de algunas críticas que he escuchado precedentemente—, que se aplique en todos los casos para el futuro en lugar de quedar como una opción que, con mayor o menor habilidad y rapidez, utilicen los abogados defensores.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Educación, ingeniero Jorge Alberto Rodríguez.

Sr. Gallo. — Los antecedentes provinciales no son tan halagüeños como podría suponerse. Las estadísticas nos dicen que en Mendoza más del 90 por ciento de los juicios perimen y que en Córdoba la situación es similar. De cualquier manera no se trata de discutir esto sino de tomar conciencia que ello nos exige redoblar nuestra prudencia con el fin de que la aplicación de ese sistema en el orden federal mejore la administración de justicia.

A pesar del ponderado trabajo que hicieron los miembros de ambas comisiones —una de las cuales integro— y al que quiero rendir aquí homenaje, creemos que si no se introducen algunas correcciones en el tratamiento en particular, los deseos de todos nosotros de que mejore el sistema se van a ver malbaratados y vamos a correr el riesgo de llegar a una administración de justicia peor que la actual.

Nada más propicio en este momento que hacer un homenaje a don Manuel Obarrio, redactor de la ley 2.372, que es el Código Procesal Penal Federal que rige actualmente. Decía en su exposición de motivos del 15 de julio de 1882, es decir hace exactamente 110 años, que él ante la disyuntiva de redactar un nuevo código, respetando el mandato constitucional del artículo 102 y teniendo en cuenta los distintos sistemas procesales, optó por adecuar prudencialmente un código que se compadezca con la tradición jurídica argentina y con las posibilidades de administrar justicia en la actualidad.

Eso es lo que reclamo en nombre de mi bloque; y en homenaje a aquel gran jurista que fue don Manuel Obarrio, fundamento así la disidencia parcial vertida en el dictamen en consideración. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez, J. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: en aquella sesión en la que se debatió la reforma procesal sancionándose un nuevo código de procedimientos con el sistema de oralidad manifesté mi discrepancia. No pretendo reabrir el debate y si lo recuerdo es simplemente para formular una reserva respecto a quienes dijeron que todos estamos de acuerdo con que el proceso escrito es anacrónico: personalmente no lo estoy.

Refiriéndonos al tema del anacronismo, tenemos que decir que es realmente anacrónico el proceso oral, que por hipótesis precedió al escrito.

Si se buscan ejemplos de injusticias en el procedimiento escrito se encontrarán también las dos más grandes injusticias en el proceso oral. Allí está el proceso a Sócrates y también el proceso a Jesús con toda la intermediación del proceso oral, proceso que hizo decir a un gran jurista como Calamandrei que le sorprendió que en los despachos de los magistrados la cruz figure a sus espaldas, cuando debiera estar por delante, para recordar la mayor de las injusticias de todos los tiempos. Pero yo respondo al mandamiento de los abogados: luchar por las ideas con toda la energía, antes; y si la suerte nos es adversa; resignarnos a acatar lealmente; y luchar ahora para que la decisión que se ha tomado antes se lleve a cabo de la mejor forma posible.

Es en este sentido que hablaré como si fuera partidario de la oralidad, tratando de aportar mi grano de arena a este dictamen, del que debe reconocerse sinceramente que para quien se ubica dentro del sistema de la oralidad representa un alto esfuerzo elogiabile. Personalmente, pienso que es lo mejor que se pudo haber hecho; puede merecer alguno que otro retoque, que siempre será opinable. Hago votos para que este proceso tenga éxito, que no le pase a la oralidad judicial lo que le acontece a la oralidad legislativa, en la cual sobre un total de 257 señores diputados sólo están presentes 45, suponiendo que sean oyentes.

En lo posible debemos tratar de evitar un problema que no ha escapado a la consideración de la comisión: el 5 de septiembre está muy próximo. A tal punto ello no ha escapado a la comisión que en el artículo 21 ha previsto una gradualidad territorial. Entre paréntesis, sugiero a la comisión que corrija un error de imprenta en dicho artículo según el texto impreso de que dispongo, pues no creo que haya sido su intención establecer un tribunal oral para once provincias, sino que debe haber querido decir once tribunales orales, en plural.

Hay un gradualismo territorial ya que esos otros once tribunales recién comenzarán a funcionar el 1º de abril de 1993. Esto rompe con el principio de generalidad de las leyes. A este se agrega otro tipo de gradualismo en el artículo 91, donde se habla de una integración escalonada que se deja librada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Colocándome en la visión del sistema de la oralidad y tratando de hacer mi aporte, sugiero a la comisión que traslade todo al 1º de abril de 1993 para que todos los tribunales de la República comiencen a funcionar en la misma fecha y, en consecuencia, todos los ciudadanos gocen del mismo proceso en todo el país.

Me ha preocupado una reflexión hecha por el señor diputado Cafiero respecto a que —si no le he comprendido mal— hubiera deseado que en el texto de la futura ley figure el procedimiento a seguirse en el Senado de la Nación para la designación de los jueces. No voy a entrar al fondo de la cuestión aunque sí voy a mencionar que este procedimiento no podría nunca figurar en una ley porque sería inconstitucional. La facultad de prestar el acuerdo corresponde al Senado, y por disposición expresa de la Constitución Nacional es cada Cámara —como la nuestra— la que tiene la facultad de dictar su propio reglamento. De tal manera que la Cámara de Diputados nunca podría inmiscuirse en este tema. En este sentido la acción política que han desplegado los dos bloques mayoritarios ante el Senado me resulta suficiente y no podemos pretender más.

Con las reservas que he hecho de escepticismo respecto al procedimiento oral, anticipo que votaré en general por la afirmativa. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez, J. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: la sanción del dictamen de comisión que estamos tratando es necesaria para afirmar y poner en vigencia el juicio oral. Es posible que se hagan algunas objeciones o que el dictamen no satisfaga totalmente las expectativas. Pero la sanción permitirá la aplicación de un sistema procesal que modifique el anacrónico procedimiento inquisitorio y escrito cuyos resultados tenemos a la vista. La aplicación efectiva demostrará si son necesarias algunas modificaciones o adecuaciones, y esta Honorable Cámara tendrá que seguir de cerca la evolución de esta institución para corregir o enmendar lo que fuera necesario.

Esperamos que con la aplicación de este nuevo sistema terminen la mayor parte de las deficiencias que hoy exhibe el Poder Judicial.

El proyecto sometido a consideración de la Honorable Cámara ha tenido en cuenta en gran medida el concepto de nuestro sistema federal, justamente con la distribución geográfica de los tribunales o el mantenimiento de los ya existentes. Deseamos que esta situación se consolide ante el atraco reiterado del poder central contra la autonomía de las provincias.

Se ha señalado que algunos juzgados no funcionarían porque no estaba previsto su costo en el presupuesto. Esta Cámara no tiene por qué aceptar —ya que no significa un obstáculo— las decisiones de los burócratas del equipo económico, porque cuenta con facultades suficientes para crear cargos y establecer los medios para su mantenimiento.

Estoy de acuerdo con este proyecto, pero por la experiencia que tengo, siento temor —y no lo puedo ocultar— sobre quiénes serán los magistrados que se designen. A la facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, de designar los jueces previo acuerdo del Senado, hubo que buscarle un procedimiento, como el que se ha encontrado para que esa designación sea más viable, clara y transparente.

Es evidente que con la sanción de este proyecto de ley implementando el sistema del juicio oral penal no se resolverá el problema de la Justicia. Ya sostuve reiteradamente que en materia judicial se debe efectuar una reforma total y estructural. Lamento mucho que a pesar de haber hablado de la reforma constitucional se hayan escrito obras enteras referidas solamente a la organización del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, haciéndose escasas referencias al Poder Judicial.

Es necesario modificar íntegramente el sistema de estructuración judicial para que el ingreso a la justicia no sea el resultado de tener un pariente diputado, de haber actuado en la campaña electoral en favor del partido triunfante o del reparto entre los grandes partidos. Hay que hacer la carrera judicial desde su inicio, demostrando vocación y especialización en temas relativos a la Justicia.

—Es necesaria la existencia de un organismo de control porque cuando se reforme la Constitución Nacional deberá modificarse el sistema del juicio político para los magistrados judiciales, ya que no corresponde, pues, la experiencia así lo demuestra. La creación de un consejo de la magistratura, con representación de legisladores, funcionarios judiciales y colegios profesionales —que son los que sufren en definitiva la mala administración de justicia— puede servir para solucionar muchas deficiencias. Hay provincias, como la de Santa Fe, donde el *jury* de enjuiciamiento ha mostrado su eficiencia al destituir a ocho o diez magistrados que no cumplían con sus funciones.

Hace unos días se discutió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el señor diputado Miguel Balestrini efectuó una larga exposición —desde luego, acertada— sobre lo que se hizo al amparo de la ley de Entidades Financieras y de la cuenta de regulación monetaria.

Señalamos esto debido a un informe de una comisión que se inventó y que no sabemos qué destino tuvo, pero podemos afirmar que no hay un solo detenido e inclusive el principal responsable e ideólogo de este sistema financiero fue indultado por el presidente de la República.

Por ello, si no cambiamos la mentalidad y la base de los principios y parámetros éticos en el manejo de la justicia, esta norma o cualquier otra que se dicte resultará inútil. Esperemos que por medio de este proyecto la situación se vaya modificando, porque creo —sin exagerar— que la mayoría de los argentinos estamos privados de la jurisdicción teniendo en cuenta la actual organización judicial.

Llamo a la reflexión a quienes propongan a los futuros jueces y otorguen los acuerdos.

El bloque que represento acompañará con su voto la sanción de este proyecto para ver si de una vez por todas arrancamos, aunque sea con las dificultades y tropiezos inherentes a toda nueva actividad, buscando establecer un sistema que asegure a los argentinos la libertad, la dignidad y la protección de sus bienes.

Sr. Presidente (Rodríguez J. A.).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna.— Señor presidente: voy a ser breve en mi exposición, no porque me desalienten las bancas vacías que observo sino porque me siento relevado de hacer mayores comentarios frente al exhaustivo análisis realizado por el señor presidente de la Comisión de Legislación Penal, quien con brillantez ha esbozado no sólo el informe de su comisión sino también el de la Comisión de Justicia. También adhiero a las palabras vertidas por el señor diputado Sodero Nievas.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo.

Sr. Gauna.— Estamos viviendo una jornada singular porque el proyecto que consideramos producirá un cambio profundo en la estructura judicial del fuero penal de la Capital y del ámbito federal en su conjunto. Por ello, como vicepresidente 1º de la Comisión de Justicia —en ejercicio de la Presidencia, por lo menos hasta el día de hoy—, quiero puntualizar dos reflexiones.

En primer término, desco destacar el trabajo fecundo realizado por los integrantes de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, donde tuvimos por Norte la presencia de nuestro sistema federal, que es una filosofía política de nuestra Constitución que debemos aprender a respetar.

Por otro lado, debo resaltar que esa tarea fue realizada por diputados pertenecientes a diversas aristas ideológicas y representantes de casi todas las provincias.

Hoy vamos a permitir que entre efectivamente en vigencia el Código de Procedimientos Penal, ya que para ello era imprescindible dictar una norma como la que estamos considerando.

De todos modos, debo expresar que a la hora del balance no han tenido respuesta por parte del Poder Ejecutivo algunos aspectos trascendentes para la salud de la República, tal como ha sido señalado por algunos señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Concretamente estoy haciendo referencia a la Ley Orgánica del Ministerio Público que de alguna manera pretendimos revertir a través de los distintos proyectos presentados por diferentes diputados —entre ellos, uno de mi autoría—, en los que se remarcaba la necesidad de que esta norma fuera sancionada cuanto antes. Por ello, rescato las palabras del señor diputado Sodero Nievas en el sentido de que rápidamente se dará tratamiento a este proyecto, imprescindible para el efectivo funcionamiento del Código de Procedimientos Penal.

Quiero recordar, sin pretender con ello pronunciar un discurso político ni sacar réditos, que en un pasado reciente, cuando eran otras las relaciones de fuerza en esta Cámara, un proyecto del Poder Ejecutivo también tendiente a consagrar un nuevo Código de Procedimiento Penal con instalación del juicio oral —que tuvo dictamen de la Comisión de Legislación Penal— no pudo tratarse en el recinto porque la oposición, la primera minoría —hoy oficialismo—, exigió el tratamiento de ese tema junto con la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El radicalismo no dará hoy la misma respuesta, a pesar de su intensa preocupación por dicha ley orgánica. Estamos coparticipando en este trascendental proyecto de ley de implementación del juicio oral. De esta manera se desbaratan los planteos que se hacen de un radicalismo obstruccionista o destructivo en un tema central como el que consideramos.

La preocupación de nuestra bancada, y de otras fuerzas con representación parlamentaria que se han expresado, consiste en asumir entre todas el compromiso de traer prontamente al recinto uno o varios dictámenes sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público que la Argentina se debe desde hace cien años. Mucho más cuando con este código el fiscal —tal como se ha señalado aquí— pasa a tener un rol protagónico esencial. Por ello debemos dar una respuesta que asegure la estabilidad de la independencia de los señores fiscales; es decir, convertirlos en una magistratura del Poder Judicial que les permita obrar como representantes genuinos de los intereses de la sociedad y que

no estén trastornados por ropajes políticos que desvirtúan su función y los convierten en causa de desprestigio para el Poder Judicial, a pesar de ser una institución que en estos momentos no está dentro de esa órbita.

Debemos asumir el compromiso de este tratamiento porque es necesario para dar coherencia al nuevo Código Procesal Penal. Por otro lado, es la única manera de asegurar la transparencia de este vital protagonista del nuevo proceso penal que es el fiscal. Este es un magistrado que queremos ver dentro de la órbita del Poder Judicial asegurando su estabilidad e independencia. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Profili. — Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra en razón de haber firmado el dictamen en disidencia parcial. Quiero dejar sentado el porqué de esta disidencia.

En primer término, deseo señalar que se debe destacar el trabajo realizado por los integrantes de la comisión que tuvieron a su cargo la gigantesca responsabilidad de estructurar un esquema judicial a fin de poner en práctica en pocos días más el Código Procesal Penal que introduce el juicio oral en las jurisdicciones nacional y federal. En este sentido, debo decir que acompañé el esquema general bosquejado en el dictamen elaborado, pero en algunos aspectos he creído conveniente sentar mi discrepancia con la redacción de algunos artículos.

Concretamente, me refiero a los artículos 12, 19, 24, 34, 59, 70 y 88, última parte. Todos están relacionados específicamente con el tema al cual me voy a referir. Esta disidencia nació justamente en la observación al artículo 12 del proyecto, porque introduce una variante a lo que ya había dispuesto expresamente el Código Procesal Penal —artículo 536 de la ley 23.984— en el capítulo de disposiciones transitorias, donde se consagra la aplicación inmediata de este código para las causas pendientes, siempre y cuando no se hubiese llegado al estado procesal de la contestación del traslado por parte de la defensa. Este era el principio rector que debía orientar la aplicación temporal del Código Procesal Penal que entraba en vigencia.

En el artículo 12 de la iniciativa que estamos considerando se introduce una modificación que no es adecuada y que no encuentra una respuesta satisfactoria desde el punto de vista jurídico para que se plasme en la norma. Así es como el artículo 12 sostiene: "Las causas actualmente en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fe-

deral de la Capital Federal y ante los juzgados mencionados en el artículo 6º, quedarán radicadas ante los mismos. Aquellas en las que haya contestación del traslado por parte de la defensa se les aplicará el procedimiento establecido por la ley 2.372 y sus modificatorias. Las causas en las cuales dicho acto procesal no se haya producido, se tramitarán conforme a la ley número 23.984...".

Hasta aquí no difiere con la norma consagrada en el artículo 536 de la ley 23.984. A continuación se introduce una variante que modifica sustancialmente el sentido que se quiso dar al ámbito temporal de aplicación de la norma, porque expresa: "...salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias en el término de quince días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984."

Las otras normas del proyecto que he mencionado se vinculan con este artículo 12. A su vez, el artículo 88 agrega al final del artículo 536 de la ley 23.984, la frase siguiente: "o cuando el procesado o acusado lo solicitare dentro de los quince días de la entrada en vigencia de este Código." Es decir, se le da una posibilidad de optar al procesado.

Ello me movió a indagar antecedentes doctrinarios en materia de procedimiento penal, precedentes de carácter legislativo y distintos códigos de procedimientos orales que existen en diversas provincias argentinas. Pero no encontré la respuesta en cuanto al motivo de la introducción de esta cláusula optativa que permite que aquellos que tienen la posibilidad de acogerse a un código que se caracteriza por las bondades procesales de la celeridad, el aseguramiento de sus garantías individuales, la concentración de la prueba y la ponderación probatoria a través de las reglas de la sana crítica, puedan optar por un código viejo, vetusto y que bastantes consecuencias de entorpecimiento procesal ha significado para todos los imputados que, si se quiere, se vieron amparados por él.

Entonces, a ese cuestionamiento no cabe otra respuesta que no sea el carácter político de la cuestión. Como bien decía el señor diputado Cafiero en su exposición, pareciera que con esta modificación del artículo 536 de la ley 23.984, al establecerse la posibilidad de optar por el código viejo, algunos procesados penalmente quizá se vean protegidos por normas de carácter procesal. Quienes hemos tenido ocasión de litigar sabemos muy bien que el procedimiento aplicado en virtud de la ley 2.372 es sumamente engorroso, viscoso y complicado, a

la vez que permite todo tipo de vericuetos legales, incidentes, e incluso, etapas recursivas que sólo contribuyen a dilatar el proceso para que en definitiva la sentencia llegue tarde o no llegue nunca.

Si tomamos la realidad política del país nos encontraremos con un sinnúmero de causas que tienen una repercusión pública importantísima. No reiteraré los ejemplos que citara el señor diputado Cafiero; simplemente agregaré algunos que quizás sea necesario mencionar. Así, la causa en que se encuentra involucrado Eduardo Bauzá, la iniciada contra Jorge Triaca, la causa contra Mario Caserta o aquellas otras en las cuales están involucradas importantes figuras del *jet set* nacional, como por ejemplo el recordado caso de los automóviles introducidos ilegalmente en el país.

Significa entonces que la única respuesta que se puede dar para justificar una opción que en realidad no existe, ya que no hay ningún antecedente en los códigos de las provincias argentinas, es ni más ni menos que una de carácter político: procurar el amparo de todos estos procesados bajo la férula de las normas condensadas en el viejo código de procedimientos.

No me quedo tranquilo con este fundamento de carácter político porque existen sobradas razones de orden jurídico para concluir que esta opción es inconstitucional. Ello es así toda vez que se violaría el principio de igualdad jurídica consagrado en la Constitución Nacional en tanto brinda la posibilidad a ciertos procesados para optar por uno u otro código, estableciendo una imposibilidad material de optar a aquellos que no hayan llegado a una determinada etapa procesal, como es la contestación del traslado de la defensa, o viceversa, aquellos que habiendo llegado a ese estadio no puedan acogerse a la nueva ley de procedimiento penal. Es evidente que se produce aquí una desigualdad de orden constitucional, violatoria de principios elementales, como es el de la irretroactividad de la ley procesal penal.

Esto último equivale a decir que la ley que se pondrá en vigencia comenzará a tener eficacia en forma inmediata y se aplicará incluso a las causas pendientes, de manera que sólo se la podrá dejar de lado cuando existan excepciones expresamente consagradas en el código. Es así que el código procesal de Mendoza, que ha sido invocado en reiteradas oportunidades, y el moderno código procesal de Córdoba establecen en una norma específica el sentido de darle eficacia temporal a la ley con la excepción de que se podrá aplicar el código viejo siempre y cuan-

do se haya contestado el traslado de la defensa, es decir, el mismo criterio que había sentado el código de procedimientos en materia penal vigente por la ley 23.984 en su artículo 536, que con el criterio que se sustenta en el artículo 12, otorgándose la posibilidad de optar, se deja de lado.

Finalmente, es atentatorio del juez natural y de la improrrogabilidad de la competencia en materia penal. En este sentido me voy a tomar el atrevimiento de leer algunos párrafos extraídos de importantes doctrinarios procesalistas, como el caso del doctor Clariá Olmedo, que en el tomo II, página 121, de su obra, dice: "La competencia es un elemento del juez natural e integra los presupuestos procesales penales con la nota de improrrogabilidad. Ni el acusador ni el imputado pueden elegir el tribunal para que entienda en la causa ni éste puede actuar en un proceso con respecto al cual no es competente. Su improrrogabilidad es absoluta, siempre y exclusivamente ha de determinarse por imperio de la ley..."

Vélez Mariconde, inspirador del código procesal de Mendoza y de otros de carácter provincial dice en el tomo II, página 183, de su obra *Derecho Procesal Penal*: "Las normas legales sobre jurisdicción y competencia penal son absolutamente improrrogables. No pueden ser modificadas por voluntad del juez ni por otros sujetos procesales". Por su parte, Giovanni Leone, en el tomo I, página 274, de su obra *Derecho Procesal Penal*, dice que la improrrogabilidad es la prohibición absoluta para las partes de acudir a un juez distinto del previamente dispuesto por la ley para el caso. La claridad conceptual de las citas doctrinarias me exime de mayores comentarios.

Evidentemente que si le damos a ciertos procesados o imputados la posibilidad de optar, indudablemente estaremos violando la improrrogabilidad absoluta de la competencia penal, sacándolos de los jueces naturales del proceso.

Cuando este tema se discutió en comisión, se dijo que el espíritu que inspiraba la introducción de la opción buscaba la aplicación de la ley más benigna. Debo decir que en materia penal el principio de la ley más benigna se aplica para la ley sustantiva, es decir, para el código de fondo, en donde están descritas las distintas tipologías penales. Por eso, cuando una ley posterior reforma una figura delictiva y establece una sanción punitiva más leve, debe entonces aplicarse dejándose sin efecto la punición de la norma anterior. Pero en materia de derecho procesal, tal principio no es aplicable, aunque podría tenérselo en cuenta perfecta-

mente, porque si se produce una mayor flexibilización, por ejemplo, para que se ponga en práctica el instituto de la excarcelación, ella podría aplicarse para aquellas causas que se encuentran pendientes. No así si la ley posterior es más rígida que la anterior en materia de excarcelación. En tal caso, el procesado podrá atenerse a los principios establecidos en la norma anterior.

Cabe destacar que la nueva ley se caracteriza por una serie de aspectos que han venido a perfeccionar el viejo código escrito que estuvo en vigencia durante tantos años. En este sentido, si tenemos concentración de pruebas, celeridad procesal, economía procesal y resguardo suficiente de las garantías individuales, evidentemente que estaremos frente a una ley más benigna, con lo que perfectamente podrá aplicarse a todas las causas, incluso a las pendientes.

Por estas razones dejo sentado mi voto en disidencia, toda vez que me parece que no existen motivos de carácter jurídico que puedan justificar una modificación que me plantea un sinnúmero de interrogantes para los cuales no puedo obtener una respuesta que no sea de carácter político. Si el artículo 536 del Código Procesal Penal consagró en materia de derecho transitorio la aplicación temporal de la ley, ¿por qué se viene ahora a introducir este párrafo que permite hacer uso de una opción que no aparece cristalizada en ningún código procesal del país? Y digo esto porque por ahí también se dijo que los códigos de Buenos Aires, Córdoba y San Luis establecen esta opción. En realidad, no es así. La opción que establece el código de Buenos Aires y el código de San Luis está incorporada al procedimiento y le da al imputado en una determinada etapa procesal la posibilidad de elegir el juicio oral o escrito. Así, el acusado puede armar su defensa sobre la base del procedimiento por el que haya optado.

Pero en el caso del derecho transitorio, es decir, de normas que regulan el paso de una ley procesal derogada a una nueva, hay que establecer claramente qué disposiciones se van a aplicar a las causas pendientes y cuáles a las causas futuras. Esto tiene que quedar bien claro porque de lo contrario se presta a la confusión de que quede boyando la idea de que el derecho de opción tiene carácter constitucional y concreción legal en distintos códigos procesales, y esto no es así.

Por estas razones dejo sentado mi voto en disidencia, y cuando se traten en particular los artículos voy a señalar las discrepancias que he fundamentado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: hay un dicho popular que dice que la Justicia nunca duerme. Lamentablemente ese proverbio no se puede aplicar a esta circunstancia porque a esta altura del debate muchos señores diputados están más cerca del sueño que de la vigilia. Por eso, voy a ser sumamente breve.

Vengo de una provincia donde el juicio oral es desde hace muchos años una norma, un estilo. Es una forma en la que se comportan no sólo los profesionales sino el pueblo todo de la provincia de La Rioja. Tenemos juicio oral en lo penal y en lo civil. Venciendo las limitaciones humanas y la imperfección de la justicia —ese afán nunca alcanzado por los hombres—, esta forma de comportamiento se traduce en una mayor claridad en la actuación de los jueces, porque en el juicio oral los jueces tienen o sufren el doble contralor de las partes y de la opinión pública. Decía Mirabeau en la convención constituyente francesa de 1789: Denme el juez que quieran, el más corrupto, mi peor enemigo, con tal que sus actos sean verificados por la publicidad.

Es que el juicio oral resulta la culminación de un largo camino que fueron sembrando y abriendo paso los pensamientos de los filósofos y de los políticos como Voltaire, Rousseau y Victor Hugo, y de los hombres más preclaros como Ricardo Rojas en la República de los argentinos.

Con la sanción de esta ley no tendremos que lamentarnos como una vez lo hizo Angel Ossorio y Gallardo, ese abogado prestigioso del foro español que visitando la Universidad de La Plata decía: Estoy gratificado por estar en la República de los argentinos; una Capital magnífica, unos Andes que uno pondera desde las alturas, una riqueza pujante, unas mujeres hermosas, pero tengo que hacerle un reproche a los argentinos: tienen el juicio escrito porque pareciera que se han acobardado frente a la publicidad de los actos republicanos en la justicia que deben administrar.

Por eso éste es un acto importante, porque estamos poniendo una bisagra a la historia de ese juicio inquisitivo, de ese juicio donde la presencia de las tinieblas en la sanción de las conductas era el clima ideal para la irresponsabilidad de algunos jueces.

Por ello acompañamos el proyecto del Poder Ejecutivo, pero debemos señalar una disidencia que para nosotros es fundamental. Cuando el señor diputado Sodero Nievas, en un ponderado discurso que nosotros aplaudimos porque fue hecho con responsabilidad y convicción, nos ha-

bla de la sala militar en el tribunal de casación, está creando un antecedente regresivo en los preceptos históricos y judiciales de nuestro país.

Si nosotros erradicamos para siempre en las generaciones que nos precedieron, los fueros personales; si señalamos por medio de nuestros constituyentes como una señal para todos los tiempos que el artículo 16 debía ser el haz luminoso de la igualdad de todos los ciudadanos, instalar a esta altura de la civilización política y de la cultura de los argentinos una sala para que sea la que administre la justicia de los militares es colocar a este estamento social en una situación de privilegio; es dar un adjetivo a la justicia y colocar frente a la jurisdicción un privilegio que no admite ni siquiera la ley natural.

Por ello durante el tratamiento en particular de este proyecto vamos a ratificar nuestra oposición porque queremos unos tribunales que no tendrán el sentido popular que calificaban antiguamente a los tribunales del pueblo pero que sin duda serán tribunales democráticos, con este importante paso que dio el Senado de la Nación de hacer transparente la designación de los magistrados de la República.

Nuestro bloque adhiere a este proyecto en el diseño mayor y en su profundidad total —con la excepción de la crítica que acabamos de formular— y a este paso importante que damos para la administración de la justicia de nuestros ciudadanos.

Celebramos el proyecto, acompañamos la intención, y ojalá que cuando los años pasen las generaciones que nos sucedan alguna vez reconozcan a este Parlamento el importante paso que da en materia de legislación y de justicia para los argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: trataré en lo posible de ser breve pero hay algunas consideraciones que debo hacer. Cuando aprobamos el año pasado, el 21 de agosto, la ley 23.984 de Código Procesal Penal habíamos creado la oralidad en el país. En los artículos 366 a 430 decíamos que la oralidad ya era una realidad en la República Argentina. Iniciábamos una compleja tarea para concretar serias y viejas aspiraciones de muchos tratadistas de la doctrina nacional, y más fundamentalmente de aquellos hombre que somos del interior y tenemos juicio oral.

Con ello se estaba logrando hacer juicios públicos, continuos y con la intermediación necesaria para que la justicia tenga claridad. Sabemos que las bases del sistema procesal están bien delimitadas: tenemos una acusación y una defensa y una resolución. Cuando estas tres partes están en

manos de órganos diferentes —del ministerio público, del abogado defensor y del juez— decimos que estamos en presencia de un sistema acusatorio. Cuando estos órganos se entrecruzan es porque estamos indudablemente en el sistema inquisitorio escrito.

No voy a hablar tanto de las bondades del juicio oral, de las cuales han expuesto la mayoría de los oradores. Dimos otro paso importante cuando el año pasado aprobamos la ley 24.050, de organización de la justicia nacional. Allí incorporamos nuevas instituciones, como el tribunal de casación penal, el tribunal oral, los tribunales orales del interior del país, los tribunales de ejecución penal, y hoy nos toca tratar y aprobar una ley para cerrar el circuito legislativo y de una vez por todas tener el plano integrado de lo jurídico; esto será así cuando aprobemos la oralidad que tendrá vigencia a partir del 5 de septiembre de este año.

Este expediente que contiene el proyecto del Poder Ejecutivo ha sido complementado con distintos proyectos de varios señores diputados del interior del país y ha dado en llamarse ley de implementación del juicio oral. Pero debemos hacer consideraciones sobre algunos aspectos.

Es necesario hablar de los tribunales orales del interior del país. Desde que el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo llegó a la comisión hasta que se suscribió el pertinente dictamen hubo reuniones interesantes y reiteradas, y fundamentalmente nos preocupó que en el proyecto original no estuviera previsto para cada una de las provincias argentinas que no son cabecera de los distritos judiciales el tribunal oral con asiento en esa provincia. Por el contrario, se podía iniciar una era bastante mala para la Justicia nacional porque se quería que los tribunales de las provincias más cercanas que fueran cabecera de distritos judiciales se trasladaran a aquellas que no lo fueran con lo cual se inauguraba la antisoledad de la justicia porque íbamos a contar con tribunales móviles orales.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Agúndez. — En consecuencia, muchos diputados del interior del país queríamos contraponerle a este proyecto del Poder Ejecutivo la necesidad del juicio oral en cada una de nuestras provincias. fue así que, en definitiva, contemplando el sentimiento federal de la Constitución Nacional y respetando la dignidad de la Justicia y la de los ciudadanos del interior el Ministerio aceptó que en cada una de las pro-

Vincias existiera un tribunal que adoptara como procedimiento el juicio oral para la parte penal. Se aducía en ese entonces que había pocas causas y problemas presupuestarios. Es imposible creer que para la Justicia existe un problema económico cuando todos —y el propio gobierno— deseamos ingresar en el primer mundo. Habíamos subordinado los conceptos básicos de la Justicia como el debido proceso y el derecho de la defensa en juicio por estos problemas de tipo económico.

Todo esto nos preocupó tanto a veces que le tuvimos que decir al ministro que ellos deseaban que la oralidad fuera una realidad en la Capital Federal, pero querían el aplauso de todo el país.

Estas preocupaciones no eran simplemente por la implementación del juicio oral, sino que se debían a otros proyectos de ley que el Poder Ejecutivo presentó en este Congreso de la Nación. Cuando el Senado remitió a esta Cámara el proyecto de ley de educación para su revisión recibimos todos los diputados nacionales, de parte de las provincias justicialistas, la preocupación por conocer el rol protagónico de los estados provinciales, además de considerar la responsabilidad del Estado nacional. En este caso no estaba en claro lo que las provincias tenían derecho a decidir.

En el mensaje número 523 del 27 de marzo de 1992 se incluyó el proyecto de ley de regulación de relaciones y compensaciones de créditos y deudas recíprocas entre la Nación y las provincias. Fue en ese momento cuando los gobernadores de las provincias justicialistas nos dijeron que debíamos prestar mucha atención al proyecto, porque se quería otorgar al secretario de Hacienda facultades omnímodas en el sentido de que podía ser juez y parte en la calificación de la deuda entre las provincias y la Nación. Ese mismo proyecto traía aparejada una "peyorización" hacia los estados provinciales. Ese fue uno de los motivos que nos llevó a que presentáramos este proyecto para que en cada una de las provincias pudiésemos contar con un tribunal que adoptase como procedimiento el juicio oral. Para ello debimos pedir el apoyo de las cámaras de Senadores y de Diputados provinciales e incluso del propio gobernador de cada una de las provincias.

En una conversación mantenida con el gobernador de mi provincia se me manifestó que me aceptaban como integrante de la comisión de reforma constitucional del partido oficialista. Existía un borrador que decía que las provincias tenían que ser eficientes. Entonces me pre-

gunto qué hubiese ocurrido, concretada la reforma constitucional, cuando una provincia no fuese eficiente.

También tenemos una preocupación por el antecedente muy reciente de esta misma tarde cuando diputados nacionales de la provincia de Corrientes expresaron su intranquilidad por la ampliación de la intervención a otros poderes de dicha provincia.

Por otro lado, se dice que los gobiernos provinciales deben soportar las pérdidas de los ferrocarriles de la Nación. Cuando hay que otorgar a los jubilados el 82 por ciento móvil hay que recurrir a las provincias para que sean parte de esa deuda.

Me pregunto si en definitiva no estamos siendo siempre convidados en las pérdidas en lugar de dar un claro ejemplo de respeto al federalismo como pedimos todos los hombres del interior.

Existen provincias más chicas y más pobres que otras, pero institucionalmente todas son iguales; ése es el tratamiento que solicitamos. No podemos quedarnos tranquilos con que el oficialismo y el ministerio respectivo, por medio de una decisión coyuntural acepten el juicio oral en cada una de las provincias a través de la creación de los tribunales respectivos, como lo establece el artículo 21 con la ampliación fijada en el artículo 90. El federalismo debe ser un problema de conciencia y no coyuntural.

Es indudable que el nuevo sistema oral tendrá influencias decisivas en el procedimiento carcelario argentino. Conocemos el hacinamiento y la promiscuidad existentes en las cárceles. Sabemos que la situación de los internos es totalmente neurótica, que viven en un estado de permanente incertidumbre y sufren encarcélamiento excesivo. Todo esto se debe al retraso con que actúa la justicia, y este problema no compete sólo al Poder Judicial sino a los tres poderes. Por ello el Poder Ejecutivo de una vez por todas tendrá que otorgar los presupuestos necesarios para la atención de las cárceles argentinas, los jueces no se podrán atrasar en las causas y los legisladores deberemos darles las herramientas idóneas para el juzgamiento de los ciudadanos.

Debemos considerar que en las provincias donde existe el sistema oral el promedio de las detenciones preventivas es de un año y medio, aproximadamente, mientras que en los lugares donde impera el procedimiento escrito el plazo asciende a los tres años y medio. No sabemos si esto se debe a un problema del sistema carcelario o del procesal; me inclino por esta última posibilidad. Por ello si los jueces dictaran

sentencia en plazos breves habría menos detenciones preventivas y el costo económico y social sería menor para la Nación. Es menor el costo que acarrea la implementación del sistema oral que el mantenimiento de los internos en situación preventiva.

Una de las formas de afianzar la justicia —como expresa el Preámbulo de la Constitución— es otorgándole las herramientas idóneas y el presupuesto adecuado.

Contamos con los elementos necesarios para solucionar el problema de la superpoblación carcelaria, porque el artículo 701 del Código de Procedimientos Penal señala que los procesados no pueden estar más de dos años en esta situación. Asimismo el Pacto de San José de Costa Rica expresa que la detención preventiva no puede exceder el plazo de dos años.

En consecuencia, sólo resta tomar una decisión política y jurídica, porque si se procedió de esa manera cuando se otorgaron indultos, no veo por qué, cuando hay fallas en la justicia, no puede aplicarse lo estipulado en la legislación y en un tratado que ha sido ratificado por este Parlamento.

Debemos tratar el tema que abordaron otros legisladores referido al derecho de opción contemplado en el artículo 12. Tenemos que legislar sin ningún tinte político cuando lo que está en juego es el tema de la justicia. Así es que puedo coincidir con hombres de otras bancadas y disentir con diputados pertenecientes a la que yo integro, ya que la justicia no puede politizarse. En este sentido se puede hablar de disciplina jurídica más que de disciplina político partidaria.

No podemos subordinar una técnica legislativa en el derecho de defensa por algunos particulares que pueden ser amigos del gobierno. El derecho de opción puede ser precisamente el resguardo del principio de defensa en juicio y del debido proceso.

Hay fundamentos legales importantísimos para sostener la opción prevista en el artículo 12 y que fue agregada con posterioridad al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. Esto fue tratado por los miembros de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal. Creo que uno de los fundamentos...

Sr. González (L. M.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Agúndez. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. González (L. M.). — Señor presidente: interpreto que el diputado Agúndez está respondiendo a la argumentación de nuestro compañero

de bancada Gerardo Profili en términos políticos. Lo que señaló el diputado Profili es que no existen argumentos jurídicos para la incorporación de la opción del artículo 12.

Solicito al diputado Agúndez que dé los fundamentos jurídicos y de política legislativa que abonan esta prórroga de la jurisdicción. Además, quiero señalar que ningún legislador legisla aislado de la realidad circundante y de las necesidades de la sociedad.

Es necesario dar respuestas aceleradas en aquellas causas que involucran a importantes funcionarios. En este punto no tengo diferencias con los oficialistas ni con los radicales porque no me interesa si los procesados tienen uno u otro color político; no estoy dispuesto a dar una opción de ley más benigna a ningún presunto delincuente, sea cual fuere la camiseta que luzca.

Concretamente quiero conocer los argumentos jurídicos, sin valoraciones políticas, que iluminan esta opción no prevista en la sanción del Código Procesal.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Agúndez. — En realidad todavía no había llegado a ese punto, señor presidente. Además, la valoración que hago es jurídica y no política y no me interesa si hay hombres del gobierno interesados en que esta opción no exista.

Simplemente hablo como abogado y legislador. Posiblemente no tenga la formación jurídica que pueden haber tenido quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero alguna vez participé de juicios orales en mi provincia y sé qué es el derecho de opción.

Este derecho se basa fundamentalmente en que tanto el imputado como el abogado hacen su estrategia defensiva cuando aquél está ubicado ya en el proceso, o sea está comprometido con la indagatoria. Si tuviera que defender a una persona, quisiera saber si en la indagatoria se utilizará el procedimiento escrito o el oral, porque en el primero existe la prueba tasada, mientras que en el segundo se utiliza en algunos casos la libre convicción y en otros, la sana crítica.

Sabemos que un tribunal oral, teniendo indicios razonables, convergentes y concordantes puede condenar a una persona en base a la sana crítica y, fundamentalmente, a la libre convicción. Por ejemplo, en aquellos delitos vinculados con la privacidad muy pocas veces podemos tener pruebas directas y tasadas. En este tipo de delitos contamos con pruebas presuncionales e indiciarias.

Entonces, si el procedimiento es escrito, deberíamos recomendar al imputado que se abs-

tenga de declarar, y el fiscal tendrá que probar la acusación. Si existe juicio oral, en la propia indagatoria puedo hacer declarar al imputado concordándolo con la defensa. Es una forma de usar la declaración indagatoria como defensa. Este es el primer argumento que brindo.

La segunda razón se vincula con el artículo 2º del Código Penal, que expresa que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo, se aplicará siempre la más benigna. El artículo 3º del Código Civil dice que las leyes se aplican para el futuro y que no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. A continuación agrega que la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

A su vez, el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Muchas veces se ha interpretado que la ley más benigna se aplica sólo a las leyes de fondo. Considero que este concepto corresponde tanto a la ley de fondo como a la ley de forma. Así, Maier expresa que la ley más benigna es la que produce en el caso concreto resultados más favorables. En el mismo sentido, Linares Quintana afirma que no existen dudas de que las normas legales relativas a la organización judicial y al procedimiento son de orden público y se inspiran en el interés general de asegurar una correcta administración de justicia.

El debido proceso está constituido por los actos constitucionales de cada poder, que deben ser razonables. A esa razonabilidad se la denomina debido proceso. Para que puedan ser consideradas válidas, las sentencias penales deben tener tres elementos: la ley anterior al hecho del proceso, el juez natural y el respeto de la defensa en juicio.

Hay tres clases de oralidad en el sistema inquisitivo. La optativa, que Jofré introduce en el Código de San Luis —artículo 22 de la ley 19.040—, donde la opción de uno acarrea la obligación de todos de ir al mismo sistema procesal; la oralidad limitada, como posee la provincia de Buenos Aires; y la de este caso, en que decimos que simplemente existe una oralidad optativa y transitoria, hasta que transcurra el período de transición entre el juicio oral que vamos a crear y el juicio escrito de la ley 2372.

Tampoco puedo pensar que quienes se quedan en el procedimiento escrito gozarán de impunidad. Eso implicaría decir que hace muchos años que existe impunidad en la Capital Federal y en la justicia federal. Significa tener poca conside-

ración para algunos jueces, que actúan correctamente. Si no se comportan como ordena la Constitución, tenemos el remedio del juicio político, pero no podemos aventurarnos a decir que el criterio de la opción no condice con la mayoría. Simplemente digo que la opción, a mi juicio, está sustentada solamente en un criterio técnico y jurídico; pero creo que es un pensamiento muy ligero aquel que se esgrime en el sentido de que con la opción pasamos a la impunidad.

Legislemos con carácter general y no nos detengamos en casos particulares que quizás nos puedan molestar. No sancionemos leyes que luego puedan ser declaradas nulas, porque perjudicamos a la justicia. Pensemos que además de estos personajes existe un sinnúmero de anónimos que tienen los mismos derechos que aquéllos; entonces, no los perjudiquemos por no dar la oportunidad a las personas que se han nombrado.

Por último, creo que tenemos aspiraciones que van más allá de la sanción de esta iniciativa, pues este proyecto de ley por sí solo no soluciona todo. Debemos confiar fundamentalmente en que los nombramientos de quienes representarán a la Justicia argentina se harán con total transparencia. De manera sincera entiendo que esos jueces deberán tener impecabilidad ética, idoneidad jurídica e imparcialidad política. Por otro lado, el nombramiento de magistrados en el interior del país tendrá que estar acompañado, por lo menos, de la residencia o el arraigo de cada uno de ellos en su respectivo lugar de actuación; ésa será la forma de poder tener un control social sobre los residentes de esos lugares, pues los jueces son quienes están en mejores condiciones de conocer la idiosincrasia de los hombres sometidos a su decisión.

Además de estas aspiraciones actuales, las provincias tenemos aspiraciones futuras. El logro obtenido en cuanto a los tribunales orales en cada una de las provincias comprende una parte del derecho: el derecho penal. Para llegar a un federalismo claro y concreto, como señala el artículo 1º de la Constitución Nacional, en oportunidad de la reformulación del mapa judicial de la justicia federal que se llevará a cabo el año próximo, cada una de las provincias deberá tener un proyecto más ambicioso a fin de que en cada jurisdicción provincial haya distritos judiciales. Así podremos decir que hemos respetado el federalismo que todos pregonamos pero que a veces no cumplimos, y que ésa es la forma más segura de afianzar la justicia en la República Argentina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Parente. — Señor presidente: a esta altura del debate me proponía argumentar a favor del establecimiento de la institución del juicio por jurados conforme fuera adelantado por el señor miembro informante, diputado Antonio Hernández. Pero habida cuenta de lo avanzado de la hora y en la inteligencia de que demorar el debate quizá dificultaría la sanción de este proyecto de ley esta misma noche, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de una síntesis del discurso que pensaba pronunciar en esta sesión.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia informa que se ha agotado la lista de oradores.

No habiendo número reglamentario en el recinto, se va a llamar para votar en general.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a proceder a pasar lista.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: teniendo en cuenta que la cantidad de diputados presentes en el recinto es cercana al quórum, solicito que se continúe llamando por cinco minutos más.

Sería de desear que los señores diputados que no dejan trabajar a quienes sí lo queremos hacer nos acompañen en este sentido. Nuestro bloque anticipa que hará pública la nómina de diputados que no se encuentran presentes en esta oportunidad. (Aplausos.)

Cuando la Cámara inició su actividad en el día de hoy hubo una votación en la que se registraron 188 señores diputados, según me acotan. No puede ser que ahora, cuando estamos considerando un tema de tanta envergadura, cuando tratamos la transformación de una legislación estructural del sistema penal argentino, ocurra que no podamos votar esta iniciativa por falta de quórum, sobre todo teniendo en cuenta que hay acuerdo de bloques respecto al dictamen y a su tratamiento. Creo que es una falta de consideración al país en su conjunto. De allí que pido que se siga llamando por cinco minutos más y, de no registrarse quórum, nuestra propuesta es que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 15.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,

Sr. Albamonte. — Señor presidente: deseo expresar mi apoyo a la propuesta que acaba de formular el señor diputado Matzkin. Entendemos que es correcto que se pase lista luego de haber llamado para votar con insistencia. No hay duda de que la norma que se está por votar ha sido largamente esperada por la sociedad argentina y estamos cercanos a lograr quórum. Por eso nos sumamos a la propuesta de que se siga llamando durante cinco minutos y luego se pase lista.

Sr. Presidente (Pierri). — Se continuará llamando durante cinco minutos.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general, el proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Dado lo avanzado de la hora...

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: éste es un proyecto de ley que tiene despacho unánime de tres comisiones especializadas. Durante el tratamiento en general han hecho uso de la palabra aproximadamente 18 señores diputados, lo que representa un hecho totalmente inusual para esta clase de despachos.

A mi entender estamos en condiciones de votar rápidamente en particular. Se trata de un proyecto que tiene 3 capítulos. Podríamos acordar un tratamiento por capítulos, máxime cuando no queda mucho por decir. En consecuencia, si existe la voluntad política de seguir trabajando, nuestro bloque desea hacerlo.

Sr. Presidente (Pierri). — Puesto que es dudosa la posición de un diputado en la banca, y con el fin de no cometer ningún tipo de desprolijidad, se va a rectificar por el sistema electrónico la votación en general recaída en el dictamen.

—Resulta afirmativa de 127 votos; votan 130 señores diputados sobre 131 presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar el proyecto en particular.

Señor diputado Matzkin: ¿usted proponía que votáramos por capítulo?

Sr. Matzkin. — Sí, señor presidente. Es un procedimiento que hemos seguido en otras oportunidades. Creo que es posible hacerlo aquí, en base a consultas que se han hecho con algunas

bancadas. A medida que se vayan considerando los capítulos, sus representantes irán informando sobre eventuales modificaciones. Esa es la propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se procederá en la forma indicada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo I, que se extiende desde el artículo 1º hasta el 22 inclusive.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Profili. — Señor presidente: quiero dejar señalada nuestra disidencia parcial, formulada y fundamentada en su momento con respecto al artículo 12, y en tal sentido propongo que se derogue este artículo, manteniendo vigente el artículo 536 de la ley 23.984 (Código Procesal Penal).

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: deseo proponer en el primer artículo del proyecto de ley un texto que indique imperativamente que las sesiones para el tratamiento de los pliegos que envía el Poder Ejecutivo al Honorable Senado de la Nación sean públicas, estableciéndose un mecanismo de oposición. Es decir que los ciudadanos puedan opinar, impugnar y hacer observaciones fundadas sobre la designación de los jueces. A su vez, se propone establecer un mecanismo con plazo y publicación oficial para generar publicidad y transparencia en la designación de los jueces.

Por otra parte, en el artículo 12 se solicita que el párrafo que va desde donde dice: "...Las causas en las cuales dicho acto procesal no se haya producido..." hasta "...vigencia de la ley 23.984.", sea suprimido, en función de los argumentos ya expuestos en la discusión en general.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde que la comisión se expida sobre las modificaciones propuestas por los señores diputados Profili y Cafiero.

Sr. Hernández (A.M.). — Señor presidente: con respecto a la observación del señor diputado Cafiero, la comisión no acepta la modificación porque la misma peca de inconstitucionalidad. La atribución para designar jueces sólo corresponde, según la Constitución, al Senado, de manera tal que esta Cámara de Diputados tiene que respetar las facultades que tiene el otro

cuerpo legislativo. Oportunamente se presentaron en esta Cámara proyectos de declaración pidiendo la modificación del reglamento del Senado, pero no podemos avanzar más allá porque estaríamos desconociendo las atribuciones del Senado de la Nación en este sentido.

Por estas razones la Comisión no acepta la modificación.

En cuanto a la observación del señor diputado Profili con respecto al artículo 12, esta comisión ha considerado largamente el problema de la opción y hemos aceptado incluirla por las razones que expuso con toda claridad el señor diputado Agúndez, que rápidamente sintetizaré de esta manera. En primer lugar, para asegurar el derecho a la defensa; en segundo lugar, para asegurar el principio de la ley penal más benigna y, en tercer término, porque hay que evitar posibles cuestionamientos procesales que impidan la eficacia que nosotros queremos para asegurar el triunfo del proceso oral.

Debo explicar además, en forma muy sintética, que esta idea de la opción es teóricamente sostenida por prominentes especialistas en la materia, como los profesores doctores Zaffaroni, Maier y Cafferata Nores. Respecto del principio del juez natural conviene explicar que históricamente, desde la antigüedad clásica, se habló del principio de la *perpetuatio jurisdictionis*. Esto además está indicado por juristas clásicos como Marcelo. De tal manera que pienso que todas estas razones abonan claramente la juridicidad de la idea de la opción que oportunamente ha incorporado la comisión. Debo decir que sé que al respecto existen opiniones distintas. Como en su momento dijo Tito Livio, la ley no puede contentar a todos, pero nosotros hemos actuado pensando en el interés general de la República, y en base a estos principios hemos consignado la idea de la opción.

Por las razones que he expuesto brevemente no acompañamos la propuesta del señor diputado Profili. Pero quiero aprovechar para proponer concretamente una serie de modificaciones al proyecto, en base a las observaciones que también oportunamente había efectuado el señor diputado Soderó Nievas y que constan en la documentación obrante ante esta Cámara.

Después de "Capítulo I" corresponde colocar un subtítulo que diga "Cámara Nacional de Casación Penal". En el artículo 16 hay que suprimir los párrafos séptimo y octavo. Esta cuestión se refiere a una modificación que se planteaba en el proyecto con respecto a la integración de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Precisamente el señor diputado Juan Pablo Baylac me hizo

llegar una carta que le remitiera el señor presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que dice lo siguiente: "Diríjome a usted conforme lo solicitado, informándole que: primero, por ley 23.482 se integró la Cámara Federal de Bahía Blanca con cinco (5) jueces; segundo, por el artículo 16 del proyecto de implementación del juicio oral se transforman dos cargos de juez de la Cámara Federal en vocalías ante el tribunal oral quedando la Cámara Federal únicamente con tres jueces, y tercero, la Cámara Federal por acordada número 23 del 9 de mayo de 1992 solicitó el mantenimiento de su composición actual de cinco jueces en razón de su competencia múltiple y consiguiente mayor trabajo de sus jueces por falta de especialización".

He conversado este tema con otros diputados de la comisión y con el propio ministro de Justicia de la Nación, y quiero decir que propongo esta modificación por esas razones; es decir, no sólo por el pedido efectuado por la propia Cámara Federal o por la solicitud del señor diputado Baylac, sino porque hay una razón constitucional que me preocupa sobremanera: el problema del traslado de los jueces. Esto es lo que puede ocurrir teniendo en cuenta que los jueces no están de acuerdo con esta modificación. Cabe recordar como antecedente una acordada del 2 de abril de 1945 en relación al traslado que oportunamente se efectuó al señor juez federal Salvador Dama Montaña. La Corte Suprema dijo en esa oportunidad que afecta la garantía de inamovilidad del artículo 96 de la Constitución Nacional la posibilidad de un traslado sin el consentimiento del propio magistrado.

Por las razones expuestas, solicitamos que se supriman los párrafos séptimo y octavo del artículo 16, lo que va a posibilitar que continúe con la integración actual la Cámara Federal de Bahía Blanca.

El artículo 17, en lugar de 21 fiscalías debe decir "23", porque no se incorporaron los dos nuevos tribunales de San Martín.

En el artículo 20, como consecuencia de una observación formulada por el señor diputado Sodero Nievas, en lugar de 52 cargos de juez de Cámara debe decir "58"; en lugar de 21 cargos de fiscal de Cámara, debe decir "23"; en cambio, los cargos de secretario de Cámara son correctos.

En el artículo 21, a raíz de una observación del señor diputado López de Zavallía, en lugar de un tribunal oral con asiento en cada una de las provincias debe decir "11 tribunales orales con asiento en las respectivas provincias".

Estas son las observaciones que planteamos con respecto al capítulo I.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: proponemos que en el artículo 12, donde se dice: "...se tramitarán conforme a la ley 23.984, salvo que el procesado o acusado solicitara la aplicación de la ley 2.372 y sus modificatorias en el término de quince (15) días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984", se introduzca una modificación consistente en que el acusado o procesado sea notificado en forma legal, con lo que evitamos una cantidad de hechos engorrosos que se pueden producir en el debido proceso sobre todo cuando el expediente no se encuentra en la sede del juzgado respectivo, por estar en vista del fiscal o *ad effectum videndi* en otro juzgado.

Por ello solicitamos que se efectúe esa modificación, que es absolutamente beneficiosa para la norma.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: como autor de una de las disidencias presentadas me doy por satisfecho porque se han recogido las inquietudes que he planteado.

En relación con el tema referido a la modificación de la Cámara de Bahía Blanca debo señalar que el bloque que represento coincide con la propuesta. Asimismo dejamos constancia de que el señor diputado Larraburu ya había realizado gestiones en igual sentido.

Además, con respecto a la observación formulada por el señor diputado Profili adelanto que vamos a proponer una nueva redacción del artículo 12, que seguramente será compartida por la mayoría de los miembros de la Cámara, por cuanto apunta a lograr una mejor resolución de la causa tomando como fundamento la doctrina del artículo 18 de la Constitución Nacional —que garantiza a cada procesado el derecho al juez natural—, lo estipulado en el artículo 19 de la ley 23.072, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sentada en un fallo que se publica en *El Derecho*, tomo 143, página 123, y la opinión del constitucionalista Bidart Campos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piotti. — Señor presidente: tomando como base los argumentos esgrimidos por el señor diputado preopinante, proponemos una nueva redacción del artículo 12, cuyo título seguirá siendo el mismo. Dice así: "Las causas actualmente en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y ante los juzgados

mencionados en el artículo sexto (6°), quedarán radicadas ante los mismos. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicite la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

"En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior deberá ser ejercitada en forma unánime.

"En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: como oscila peligrosamente el quórum, quiero dejar aclarado que los diputados de mi bloque, si es necesario, permaneceremos en el recinto hasta el amanecer o el mediodía, pero no queremos que se actúe apresuradamente.

Solicito al señor diputado Hernández —a quien felicito por su brillante exposición— que aclare respecto del artículo 16 cuáles son concretamente los apartados que propone derogar. Entiendo que los mencionó con los números 8° y 9°, pero luego en el curso del debate se habló de Bahía Blanca que no está en el 8° ni en el 9°, según veo, sino en el 7°. Además, desearía saber si las razones que se han dado para Bahía Blanca son las que he entendido rigen también para Rosario y para Mendoza. ¿No habría que pensar un poco más sobre este artículo 16?

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: en las transformaciones de algunos cargos de las cámaras federales a tribunales orales, el Ministerio de Justicia fue consultando a cada una de las cámaras respectivas y los señores camaristas federales fueron manifestando su acuerdo. Pero debo decir que en el decurso del tiempo pude comprobar que en algunos casos hubo cambios de criterio en afirmaciones positivas hechas en un primer momento. Esto lo comprobé precisamente en la Cámara Federal de Córdoba.

Por otra parte, hablé con camaristas federales de Mendoza, quienes acordaron la forma de redacción de este artículo 16. En el caso de Rosario ocurrió lo mismo, pero allí fue donde surgió la necesidad de un tribunal oral más para la ciudad de Santa Fe. Y luego apareció esta novedad precisamente en el caso de Bahía Blanca. Esa

ha sido la forma de trabajo del ministerio y en la medida de mis posibilidades he tomado contacto con camaristas federales.

Para responder a la inquietud sobre Bahía Blanca y para que no exista ningún tipo de duda proponemos que se supriman los siguientes párrafos del artículo 16: "Transformanse dos (2) cargos de vocal de la actual Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en vocalías ante el Tribunal Oral creado por la presente ley en su distrito.

"Trasládase una secretaría de aquella Cámara para actuar ante este tribunal."

Y para ser totalmente coherentes, el artículo 20 —esto lo voy a reiterar— debe estar redactado de la siguiente manera: "Créanse sesenta (60) cargos de juez de Cámara, veintitrés (23) cargos de fiscal de Cámara, veintitrés (23) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara y veintiún (21) cargos de secretario de Cámara". Estas son las modificaciones que proponemos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — El bloque oficialista acepta la propuesta formulada por el señor diputado Hernández.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Luego de escuchar al señor diputado Piotti sobre la nueva redacción impulsada por el bloque oficialista para el artículo 12, retiro mi propuesta. Adelanto que votaremos favorablemente ese artículo. De todos modos, quisiera agregar, luego del párrafo que se refiere a la opción, el siguiente texto: "Quien o quienes al momento de ejercitar la opción hubieran estado rebeldes o prófugos, no podrán modificar la decisión del régimen procesal escogido por quienes lo hicieron en la oportunidad prevista por la presente ley".

Como se requiere unanimidad para poder acceder a este nuevo régimen, ésta no puede ser puesta en duda cuando aparece un rebelde o un prófugo con una posición distinta que rompa la unidad a la que se refiere la redacción que acabamos de escuchar.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: el bloque oficialista acepta la proposición formulada por el señor diputado Albamonte. Queremos dejar a salvo la diferencia de opinión que existe con respecto al artículo 12. El bloque Justicialista ha formulado su propuesta y, en consecuencia, votará este capítulo íntegramente con las

modificaciones ya aceptadas y con la diferencia expresada en lo que se refiere a la redacción del artículo 12.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: voy a proponer la siguiente redacción para el artículo 12: "Causas en trámite. En las causas en que exista presentación del escrito de defensa se aplicará el procedimiento establecido por la ley 2.372 y sus modificatorias. En las restantes causas en trámite se aplicará esta ley, salvo que el procesado optare expresamente por el procedimiento escrito en un plazo no mayor de quince días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, bajo pena de caducidad. Cuando hubiere dos o más procesados, el sometimiento de la mayoría de ellos al trámite oral obligará en igual sentido a los restantes y en el caso que fueran dos, la opción de uno de ellos obligará al otro. Cuando se tratare de distintos delitos, la opción la tendrá el o los procesados del delito mayor".

En función de la aprobación de este agregado, habrá que modificar los artículos concordantes.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Profili. — Señor presidente: las modificaciones propuestas no satisfacen al diputado que habla, toda vez que se mantiene la opción.

Por lo tanto, voy a seguir sosteniendo mi disidencia y solicito que la votación del artículo 12 sea nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — En este capítulo se continuará con este procedimiento, pero en el próximo cada diputado formulará las propuestas que desee y luego la comisión se expedirá. En caso contrario, la discusión se torna confusa y, finalmente, resulta difícil saber qué se va a votar.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: solicito que se vote el capítulo I con la salvedad de la propuesta formulada por el bloque Justicialista en relación con el artículo 12 —que solicito se vote separadamente—, y por supuesto, la incorporación del pedido del señor diputado Albamonte.

Ha quedado en claro en el curso del debate que la propuesta del señor diputado Hernández respecto del artículo 16 ha sido explicitada y ha dado respuesta acabada a la observación del señor diputado López de Zavala. Apoyamos totalmente dicha propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte que resulta difícil avanzar en este capítulo porque no se sabe finalmente quién representa a la comisión. En consecuencia, los bloques deberían conciliar las posiciones porque de lo contrario no sabremos qué se va a votar.

Sr. Sodero Nievas. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: dado que en torno de los artículos 1º a 11 no existe ningún tipo de inconveniente, podríamos votarlos a continuación. Las diferencias se plantean con respecto al artículo 12, que solicito sea votado por separado. Propongo que se adopte este temperamento para iniciar la votación en particular.

Sr. Cafiero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: dada la posibilidad de dar explicaciones adicionales, sólo por este capítulo solicito se tome nota de que no comparto lo manifestado desde la presidencia de la Comisión de Legislación Penal acerca de la inconstitucionalidad de la propuesta de modificación del reglamento de la Cámara de Senadores. Si bien la Constitución autoriza a cada una de las Cámaras a dictar su reglamento, en ninguna parte dice que esos reglamentos están por encima de la ley.

En segundo término deseo manifestar que no me satisfacen las reformas que se proponen al artículo 12; en consecuencia, como autor de la disidencia seguiré sosteniéndola.

Sr. Presidente (Pierri). — De acuerdo con la propuesta formulada por el bloque Justicialista, se van a votar los artículos 1º al 11 del proyecto de ley aprobado en general.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde votar el artículo 12, en primer lugar, de conformidad con la modificación propuesta por la comisión. Este ha sido el estilo en cada una de las votaciones; la voz cantante siempre ha sido la del presidente de la comisión.

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: entiendo que una cosa es la comisión y otra su presidente. Así, cuando preguntamos qué opina la

comisión queremos decir que opina la mayoría de ese cuerpo. Esa es la forma habitual en esta Cámara, y es correcto que así sea porque el que opina lo hace en representación de la mayoría de la comisión.

En este caso el presidente de la comisión pertenece al bloque radical pero la mayoría de ese cuerpo es justicialista. Pero habitualmente quien preside una comisión opina en nombre de la mayoría. Este caso es distinto; por ello, debe expedirse la mayoría de la comisión, lo cual se ha hecho mediante la propuesta del bloque Justicialista. Esto es así, y además, tiene lógica.

Sr. Hernández (A. M.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: deploro lo que en este momento está haciendo el bloque Justicialista. Aquí hubo un despacho aprobado por unanimidad de la comisión con respecto al tema de la opción y existe una redacción clara. Pero como no hubo un acuerdo posterior sobre algunos criterios técnicos vinculados a la forma de redactar esa opción, ahora se quiere introducir algún tipo de confusión y como presidente de la Comisión de Legislación Penal voy a defender lo que se ha acordado, porque la base del Parlamento es la lealtad. De manera que los diputados que firmaron el dictamen por unanimidad que estoy defendiendo tendrán que explicar por qué cambian el criterio.

Si de cuestiones técnicas se trata, con relación a la redacción del tema de la opción y para el caso concreto de que sean dos o más procesamientos voy a avalar la posición sustentada por el señor diputado Agúndez. Pero entiendo que hay que poner claridad en la forma del trabajo legislativo, por lo que dejo expuesta claramente mi posición y ratifico que votaremos lo que sostuvo por unanimidad la comisión; de ninguna manera podemos aceptar esta modificación que se pretende introducir a esta altura del debate.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: lo que pretende nuestro bloque es simplemente votar una propuesta. Si lo que se intenta es que se vote en primer término lo sostenido según el criterio radical, que se proceda de ese modo, pero entendemos que tenemos derecho a votar nuestra propuesta en primer término. De todos modos haremos una cuestión por ese tema. El Parlamento no gira alrededor del ombligo del señor

diputado por Córdoba. Este recinto es el lugar que corresponde para proponer las modificaciones que se estimen si así lo considera quien formula la propuesta.

Por tal razón pediría al señor diputado que no se altere si proponemos modificaciones que han sido fundadas. Si a este respecto no hay unanimidad como ocurre en la casi totalidad del proyecto de ley en análisis, mala suerte. Vayamos a suerte y verdad en este punto y continuemos votando el resto del articulado juntos, que esto no es para alarmarse y mucho menos significa una deslealtad.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalia. — Señor presidente: quienes no integramos la comisión y tratamos de brindar nuestra colaboración pedimos que se pongan de acuerdo los bloques con relación al artículo 12 y lo mediten, porque la cuestión se reproduce en los artículos 24, 34, 46, 54 ó 59 —no recuerdo bien— y 70, es decir, en varios textos. De tal manera que convendría que nos detuviésemos cinco minutos para resolver este tema de la redacción para que signifique luego una sola lectura para los demás artículos.

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde que el cuerpo se pronuncie en primer término respecto del artículo 12 del dictamen con la modificación propuesta formulada por el señor diputado Agúndez.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: que quede en claro que si esta votación resulta negativa corresponderá votar nuestra propuesta.

Sr. Presidente (Pierri). — Así es, señor diputado. Se va a votar en forma nominal el artículo 12.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 133 señores diputados presentes, han votado 36 por la afirmativa y 92 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.

Votan por la afirmativa los señores diputados Agúndez, Aigala, Armendariz, Benedetti, Bravo, Breard, Brook, Bruzzo, Ceballos, Cossos, Pérez, de la Rúa, Elías, Fernández (A.), Galván, García de Novelli, Gauna, Golpe Montiel, González Gass, Hernández (A. M.), López (A. H.), Mauny, Marcó, Meneghini, Molardo, Molina, Muñoz, Olivera, Ortiz Maldonado, Parola, Piccinini, Pinto, Quezada, Roig, Seguí, Vázquez (R. H.) y Vicchi.

Votan por la negativa los señores diputados Acevedo, Aguado, Alhamonte, Alcalá, Álvarez (H. C.), Álvarez Echagüe, Amadeo, Aranda,

Argüello, Arias, Arrechea, Balestrini (M. A.), Barberá, Baum, Baylac, Becerra (N. E.), Bericua, Bermúdez, Blanco, Bordín Carosio, Bracchi, Branda, Calleja, Camaño, (E. O.), Corchuelo Blasco, Crostelli, Cruz, Durrieu, Fescina, Folloni, Gallo, Gan, Germanó, Gioja, Gómez (R. J. C.), González (L. M.), González (O. F.), González Gaviola, Green, Hernández (S. A.), Herrera (B. E.), Herrera Arias, Humada, Ibarreche, Iribarne, Lamberto, Larraburu, López Arias, López de Zavalia, Loutaif, Maggi, Manfredotti, Maqueda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michelli, Michitte, Moreau, Nacul, Novau, Parada, Parente, Pesce, Piotti, Profili, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Sabio, Sacks, Salusso, Salvador, Santín, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaria, Toma, Topa, Toto, Uriondo, Varela, Venesia, Yoma y Zaracho.

Se abstienen de votar los señores diputados Alvarez (C. A.), Brunati, Cafiero y Ferreyra.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en forma nominal el artículo 12 con las modificaciones propuestas por el señor diputado por Río Negro.

—Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 133 señores diputados presentes, han votado 83 por la afirmativa y 43 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones. No se ha registrado el voto de un señor diputado que no ha hecho uso de su llave.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Acededo, Aguado, Alhamonte, Alcalá, Alvarez (H. C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Balestrini, Barberá, Baum, Becerra (N. E.), Bermúdez, Blanco, Bordín Carosio, Bracchi, Branda, Calleja, Camaño (E. O.), Corchuelo Blasco, Cossos Pérez, Crostelli, Cruz, Durrieu, Fescina, Folloni, Gallo, Gan, García de Novelli, Germanó, Gioja, Gómez (R. J. C.), González (O. F.), González Gaviola, Green, Hernández (S. A.), Herrera (B. E.), Herrera Arias, Humada, Iribarne, Lamberto, Larraburu, López Arias, Loutaif, Maggi, Manfredotti, Maqueda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michelli, Michitte, Nacul, Parada, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Sabio, Sacks, Salusso, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaria, Toma, Topa, Toto, Uriondo, Varela, Venesia, Yoma y Zaracho.

—Votan por la negativa los señores diputados Agúndez, Algaba, Armendáriz, Baylac, Benedetti, Bericua, Breard, Brook, Bruzzo, Ceballos, de la Rúa, Elías, Fernández, (A.), Galvan, Gauna, Golpe Montiel, González (L. M.),

González Cass, Hernández (A. M.), Ibarreche, López (A. H.), López de Zavalia, Marcó, Meneghini, Molardo, Molinas, Moreau, Muñoz, Novau, Olivera, Ortiz Maldonado, Parente, Parola, Piccinini, Piro, Profili, Quezada, Roig, Salvador, Santín, Seguí, Vázquez (R. H.) y Vicchi.

—Se abstienen de votar los señores diputados Alvarez (C. A.), Brunati, Cafiero, Ferreyra y Manny.

Sr. Presidente (Pierri). — Se van a votar los artículos 13 a 22.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo II, que incluye los artículos 23 a 79. Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: quiero saber si los artículos puestos a votación incluían las modificaciones propuestas en mi carácter de presidente de la comisión.

Sr. Presidente (Pierri). — Sí, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alhamonte. — Señor presidente: habida cuenta de la redacción definitiva que se ha dado del artículo 12 y a efectos de una correcta labor legislativa, correspondería modificar los artículos 24, 34, 46, 59 y 70, porque en todos ellos se establece la forma en que entra en vigencia esta opción. En todos ellos donde dice: "a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.984", debe decir: "a partir de la notificación legal efectuada conforme a lo establecido en el artículo 12 de la presente norma".

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piotti. — Señor presidente: para guardar coherencia con la redacción dada al artículo 12, corresponde modificar el texto de los artículos 34, 46, 59 y 70, al haberse invertido la opción.

Para el artículo 24 proponemos la siguiente redacción: "Las causas en trámite ante las dos (2) salas que se transforman por el artículo anterior se distribuirán en forma equitativa entre las cinco (5) salas que continúan integrando la citada Cámara. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificaciones, salvo que el procesado o acusado solicitar la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

"En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado, la opción prevista en el párrafo anterior deberá ser ejercida en forma unánime.

"En todos los casos, la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercida con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: debo aclarar que he votado las dos modificaciones en forma negativa, porque ya a esta altura no sé bien en qué consisten.

Tan sólo quiero aclarar que si bien en el sistema originario trataban este tema cinco artículos, el artículo 59 lo enfocaba de un modo distinto, de tal modo que querría saber si también este último artículo va a experimentar el mismo tipo de modificación u otra que mantenga la variante anterior, de distinción de régimen.

Puesto que se ha hablado —si mal no he escuchado— de plazos de caducidad, también sería interesante que se aclare si son 15 días corridos o 15 días hábiles. Como esta disposición no forma parte del código de procedimientos me parece que es una aclaración que sería menester introducir.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: nuestro bloque va a sostener la redacción del artículo 34 tal cual la propuso el señor diputado Piotti, que es extensiva a los otros artículos que tratan este tema, incluido el artículo 59 al que se refirió el señor diputado López de Zavalía. En este sentido no consideramos que haya que hacer ninguna salvedad o rectificación. Con respecto a los plazos procesales, se trata de días hábiles. Esto tiene que quedar expresado específicamente en el Diario de Sesiones.

Quiero agregar que la reforma no es simplemente de cambio de opción sino que representa el acabado cumplimiento del derecho de defensa en juicio, toda vez que hemos establecido que los 15 días no empiezan a correr inmediatamente. En efecto, se garantiza al procesado o acusado la notificación legal, conforme se había anticipado. De esta forma, sabemos que todo procesado o acusado, detenido o no, tendrá de parte del tribunal que interviene la debida y anticipada noticia para poder hacer adecuado uso de la opción que aquí le conferimos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: propongo modificación del artículo 47, que a mi modo

de ver debería quedar redactado de la siguiente forma: "Créanse nueve (9) cargos de juez nacional en lo correccional, catorce (14) cargos de fiscal ante los juzgados nacionales en lo correccional, siete (7) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes y veintidós (22) cargos de secretario de juzgado nacional en lo correccional."

El fundamento de la nueva redacción se debe a que en ninguna parte del cuerpo se habla de la primera instancia. Como ejemplo me remito al artículo 42, que habla de la denominación. Dice el artículo 42: "Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional letras C, H, I, J y N se denominarán juzgados nacionales en lo correccional y se enunciarán con los números 1, 2, 3, 4, y 5." Por lo tanto creo que es de buena técnica legislativa eliminar la denominación de primera instancia.

Por último, en el artículo 51 donde dice: "Créase una defensoría de pobres, incapaces y ausentes..." propondría a la comisión que en este caso se crearan por lo menos dos defensorías. Hay que tener en cuenta que estas defensorías deberán actuar ante siete juzgados y ante la Cámara, tal como lo establece el artículo; creemos realmente que esto es absolutamente insuficiente y por ello, siendo discretos, estamos proponiendo la creación de dos en vez de una.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A.M.). — Señor presidente: consideramos correctas las observaciones al artículo 47 formuladas por el señor diputado Albamonte. En cuanto a la propuesta de modificación del artículo 51, se mantiene el criterio sustentado por la comisión porque el texto es el resultado de un trabajo desarrollado en forma intensa, habiendo consultado en este sentido al Ministerio de Justicia.

Asimismo aprovecho la oportunidad para proponer, conforme a lo que ya se estableciera en el artículo 85, que se tengan como anexos I a X precisamente las propuestas del señor diputado Sodero Nievas según su disidencia.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: deseo referirme a las expresiones del señor diputado Hernández, que comparto totalmente, de forma tal que en cuanto a las observaciones formuladas por el señor diputado Albamonte el dictamen se va a mantener incólume, es decir, sin modificaciones, y en lo que respecta al despacho que suscribo en disidencia, que ha sido contestado por el titular de la Comisión de Legislación Pe-

nal, opino que también refleja el espíritu de un trabajo compartido y una coincidencia total de los puntos del capítulo.

Sólo queda para considerar una cuestión que planteará el señor diputado Piotti.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piotti. — Señor presidente: en mi anterior intervención anuncié que las modificaciones comprenden a los artículos 24, 34, 46, 59, 70 y finalmente el 91. Salvo el artículo 91, en los demás la redacción es similar y creo que ha quedado claro cuál es el nuevo texto que proponemos para el artículo 24.

En cuanto al artículo 34, la redacción que proponemos es la siguiente: "Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia proseguirán con la sustanciación y terminarán todas las causas radicadas ante los mismos de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

"En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

"En todos los casos la opción prevista en este artículo debe ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación." Esta es la redacción que proponemos para el artículo 34.

Para el artículo 46 —pido disculpas a los señores diputados porque prácticamente se repetirá en su integridad— proponemos el siguiente texto: "Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional remitirán a los juzgados nacionales en lo correccional que se crean por la presente ley, para su tramitación definitiva, las causas radicadas ante los mismos correspondientes a las secretarías que se trasladan conforme lo dispuesto por el artículo 43.

"Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

"En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

"En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación."

La redacción propuesta para el artículo 59 es la siguiente: "Las causas actualmente en trámite ante los juzgados enunciados en el artículo 48 quedarán radicadas ante los nuevos juzgados nacionales de menores a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la ley 23.984 y proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

"En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

"En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación."

El artículo 70 quedaría redactado así: "Las causas actualmente en trámite por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal y por ante los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal quedarán radicadas ante los mismos. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

"En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

"En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación." El último párrafo de este artículo conserva su redacción.

Sin perjuicio de la modificación o del nuevo texto que va a proponer el señor diputado Soderro Nievas para el artículo 79, quiero concluir mi exposición mencionando el nuevo texto para el artículo 91: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de las facultades de superintendencia que le son propias, podrá designar el personal necesario y dictar las normas complementarias que posibiliten la integración escalonada y la puesta en funcionamiento de los

órganos creados por la ley 24.050 y por la presente, pudiendo delegar esas facultades en la Cámara Nacional de Casación Penal, en las cámaras nacionales de apelación o en el tribunal oral respectivo.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente, determinará el criterio de distribución equitativa de las causas en trámite y de aquellas iniciadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.984."

Estas son las modificaciones que proponemos. Simplemente falta una más, que propondrá el señor diputado Sodero Nievas con respecto al artículo 79.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: soy autor del proyecto en virtud del cual la comisión accedió a incorporar en el marco de la Procuración General de la Nación dos cargos de procurador fiscal con atribuciones y competencias conforme a lo establecido por la ley 15.464.

Vamos a proponer que este artículo 79 quede redactado de la siguiente forma: "Créanse dos (2) cargos de procurador fiscal con atribuciones y competencias conforme lo establecido por la ley 15.464", suprimiéndose el resto del artículo.

Las razones por las que proponemos esta modificación consisten en el hecho de haber efectuado una consulta exhaustiva con respecto a los antecedentes y el funcionamiento de la Procuración General. De esta forma posibilitamos que el propio procurador general pueda derivar a las dos nuevas fiscalías creadas causas que no sean exclusivamente de competencia penal. Ese es el sentido de la reforma, que creemos que va a ser compartida por los señores diputados.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piotti. — Señor presidente: quiero aclarar que cometí un error involuntario al proponer una modificación al artículo 91 del proyecto, ya que se está considerando el capítulo II y dicho artículo corresponde al capítulo III. Sin embargo, en el momento oportuno, reiteraré mi proposición. También efectuaré un pedido de modificación con respecto al artículo 88.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: simplemente deseo solicitar dos aclaraciones. Una de ellas es al bloque oficialista porque tengo entendido que apoyaron la propuesta de modificación del artículo 47.

En segundo lugar, el artículo 61 habla del fuero en lo penal económico y dice lo siguiente: en lo Penal Económico de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Penal Económico y se integrarán con dos (2) secretarías cada uno." Lo que no me queda en claro en este artículo es si se mantiene el número actual o si existe una modificación con respecto al número de juzgados en lo penal económico, que en la actualidad son ocho.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: solicito al señor miembro informante que aclare si se han introducido modificaciones en los anexos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: solicito que se vote por separado lo relacionado con las modificaciones introducidas al artículo 12.

Por otra parte, considero que para dar coherencia técnica a la redacción del proyecto correspondería modificar el artículo 88 introduciendo el mismo criterio, porque se está haciendo referencia al artículo 536 de la ley 23.984, cuestión que aparentemente el señor diputado Piotti ha pasado por alto.

Adelanto nuestro voto negativo con respecto a la propuesta formulada en el sentido de modificar el artículo 91, porque este tema no fue considerado en la comisión. Además, se trata de la supresión de una frase que hace referencia a aquello no especificado en la norma. Se otorga así una delegación a la Corte Suprema de Justicia que no considero adecuada, entre otras cosas, porque las facultades de delegación no están permitidas si no emergen expresamente de la Constitución. De lo contrario podría rozarse el inciso 17 del artículo 67 y el artículo 94 que fijan las atribuciones del Parlamento en esta materia. Se trata de un principio cardinal del derecho público que se relaciona con la separación de los poderes. La delegación autorizada en la norma consensuada por la comisión es la pertinente, porque existen cuestiones ya definidas, como corresponde, por este Congreso de la Nación.

Aceptamos la modificación propuesta al artículo 79, a pesar de que no fue considerada en la comisión, por las razones expuestas por el señor diputado Sodero Nievas.

Por otra parte, aclaro al señor diputado Albamonte que se mantienen los ocho juzgados en lo Penal Económico con las dos secretarías actuales, y al señor diputado López de Zavalía, que no existen modificaciones a los anexos...

Pido disculpas a la Cámara, pero en este momento advierto que es necesario introducir una modificación por lo acontecido con la Cámara de Bahía Blanca. Por ello, mientras se avanza en la consideración de otras cuestiones, procederé a confeccionar la respectiva modificación.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿El señor diputado Piotti puede aclarar esta cuestión?

Sr. Piotti. — Va a ser difícil porque la problemática jurídica es muy compleja, señor presidente.

El diputado López de Zavalía ha hecho una clara advertencia y el diputado Hernández me acaba de rectificar en cuanto a los anexos. A raíz de la modificación propuesta en el artículo 79, en el anexo VIII hay que suprimir dos cargos de secretario de procurador fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, equivalente a juez de primera instancia. Esta modificación al anexo VIII motivó mi interrupción al diputado Hernández, a quien agradezco su amabilidad.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Sodero Nievas. — Señor presidente: estamos en condiciones de votar el capítulo II dado que ya se han formulado las correspondientes propuestas de modificaciones a los textos originales. En consecuencia propongo que se proceda a votar con las diferenciaciones hechas por el señor diputado Hernández.

Los artículos vinculados con el 12 del primer capítulo indudablemente no necesitan de fundamentación en esta instancia. En cuanto a los restantes artículos, iremos puntualizando aquellos que deben votarse en forma individual. La aclaración hecha por el señor diputado Hernández sobre un artículo del capítulo III será considerada en oportunidad de tratarse dicho capítulo.

Recuerdo a los señores diputados que después de esta votación sólo resta el capítulo III, que contiene aproximadamente 20 artículos. Creo que vale la pena hacer un esfuerzo más para mantener el quórum y terminar así con la sanción de este proyecto.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia entiende que la votación se debe realizar sobre los artículos 23 a 79 —que son los comprendidos en el capítulo II— excluyendo los artículos 24, 34, 46, 59, 70 y 79.

Sr. Sodero Nievas. — Exactamente, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia aclara que fueron aceptadas las modificaciones propuestas en el artículo 47.

Se va a votar el capítulo II con la exclusión de los artículos mencionados.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Correspondería votar el artículo 24 tal como fue propuesto por el señor diputado Hernández. En caso de que la votación resulte negativa, como ocurrió con el artículo 12, se votaría la propuesta del señor diputado Sodero Nievas.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: presumiblemente, las propuestas del señor diputado Hernández serán rechazadas. Por una razón de agilidad en el procedimiento, propondría que primero se voten aquellas propuestas que suponemos serán aceptadas por la Cámara. Así ahorraríamos varias votaciones.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento, así se procederá.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — En consecuencia, se va a votar el artículo 24, con las modificaciones propuestas por el señor diputado Piotti.

—Resultado afirmativa.

—Con las modificaciones propuestas por el señor diputado Piotti, se votan y aprueban los artículos 34, 46, 59, 70 y 79.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el capítulo III, que incluye los artículos 80 a 93.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piotti. — Señor presidente: ya he propuesto extemporáneamente la modificación del artículo 91, que ratifico en este momento.

Con respecto al artículo 88 concretamente propongo que se sustituya el último párrafo por la siguiente redacción: "Deróganse los artículos 536 y 537 de la ley 23.984".

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo III, excluyendo los artículos 88 y 91.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 88 con la modificación propuesta por el señor diputado Piotti.

—Resultado afirmativa.

—Con la modificación propuesta por el señor diputado Piotti, se vota y aprueba el artículo 91.

—El artículo 94 es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar si se autoriza la inserción solicitada por el señor diputado Parente.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se hará la inserción solicitada².

Sr. Hernández (A. M.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice, en esta misma página.

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 2048.)

Sr. Hernández (A. M.). — Señor presidente: solicito que se tengan en cuenta las modificaciones al Anexo III del proyecto de ley, de conformidad con las observaciones formuladas por el señor diputado López de Zavallia. En ese sentido, en donde dice: "Juez de cámara... 58", debe decir: "Juez de cámara... 60"; en donde dice: "Secretario de cámara... 20", debe decir: "Secretario de cámara... 21", finalmente, la suma total debe ser de 375 en lugar de 372.

Sr. Presidente (Pierri). — Se tendrá en cuenta su observación, señor diputado.

Dado lo avanzado de la hora, queda levantada la sesión.

—Es la hora 2 y 27 del día trece.

FULVIO F. RAMOS.
Director del Cuerpo de
Taquígrafos.

INSERCIONES

Inserción solicitada por el señor diputado Parente

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre implementación de las instituciones incorporadas a las leyes 23.984 y 24.050, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, a fin de viabilizar el juicio oral penal

En oportunidad del tratamiento por esta Honorable Cámara del proyecto de ley en revisión por el que se establecía el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (sesión ordinaria especial del 25 de julio de 1991) expuse consideraciones acerca de la necesidad de que este Parlamento inicie el postergado debate sobre la implementación del juicio por jurados, en cumplimiento del mandato constitucional directo de los artículos 24, 67, incisos 11, y 102 de la Carta Magna.

Reitero aquí los fundamentos entonces vertidos en apoyo de tal sistema y mi preferencia por la estructura que se le confiriera en el proyecto de los doctores Maier y Binder —modelo en el que intervienen ciudadanos, jueces, profesionales y abogados—, en un total convencimiento de que proveeremos así a la plena participación popular y acortaremos el distanciamiento entre las decisiones judiciales y la sociedad, recuperando ésta en parte la composición de sus propios conflictos.

En este sentido acompaño las reflexiones de los diputados nacionales Alberto Aramouni y Jorge Gentile referentes a la rémora en la discusión legislativa de un tema tan importante, volcadas también en la histórica sesión en que afortunadamente pusimos fin el procedimiento escriturista, abriendo cauces al sistema procesal penal acusatorio oral y público.

Por último, podemos decir, citando al doctor Jorge R. Vanossi, que “la institución del jurado asegura... la plena participación popular no sólo eligiendo sino también decidiendo... perfecciona la independencia del Poder Judicial y despierta el interés del pueblo en su administración de justicia...” (fundamentos del proyecto de ley sobre establecimiento de juicios por jurados para delitos contra el honor, expediente 160-D.-92, Trámite Parlamentario Nº 6/92, pág. 237).

Creemos oportuno replantear estos temas en vísperas de la efectiva transformación del sistema procesal penal, tal como se intenta a través del proyecto en análisis, cuyas normas pretenden viabilizar el juicio oral penal, pudiendo afirmar que al comenzar a discutir estas cuestiones estamos haciendo realidad la consolidación de la democracia y afianzando los principios de libertad y participación.